



UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

**Una vida digna
Conceptualizaciones y nuevas nociones de pobreza en el sur de
Bolívar**

**Natalia Abril Bonilla
Trabajo de grado para optar por el título de Socióloga**

**Directora:
María Fernanda Torres Penagos**

**Universidad del Rosario
Escuela de Ciencias Humanas
Programa de Sociología**

Bogotá, 2019

Tabla de contenido

Una vida digna Conceptualizaciones y nuevas nociones de pobreza en el sur de Bolívar	1
Introducción.....	3
Capítulo I: Discusiones teóricas sobre la pobreza	10
1.1 La pobreza: multidimensional, producida y contextualizada	10
1.2 La construcción de la pobreza en lo rural: neoliberalismo, cuestión agraria y campesinado.....	17
Capítulo II: Metodologías participativas para el análisis de la pobreza en el Sur de Bolívar .	24
2.1 ¿Por qué un enfoque cualitativo y participativo?.....	24
2.2 La metodología en el sur de Bolívar	27
2.3 Consideraciones éticas, limitaciones de la investigación y reflexiones:	35
Capítulo III: Campesinos(as) de tierra y agua en Morales y Arenal.....	38
3.1 La zona de reserva: historia y lucha	43
3.2 ZRC en contexto: acceso a bienes productivos y servicios públicos	55
Capítulo IV: La pobreza no es como la pintan	67
4.1 La pobreza vista desde la vida en el campo	68
4.2 El ser y hacer campesino: lo económico, lo político y lo social.....	79
4.3 Las dimensiones de la pobreza: algunos aportes a la medición desde las vivencias campesinas	94
Conclusiones y recomendaciones	103
Bibliografía	108

Introducción

Según el último censo realizado por el Departamento Nacional de Estadística (DANE), en 2018, la pobreza multidimensional en el país fue de 19,6%; de este porcentaje el 13,8% se concentraba en las cabeceras municipales y 39,9% restante en los centros poblados y rural disperso (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2019a). Mientras que el porcentaje de personas pobres según su ingreso fue de 27% a nivel nacional, de los cuales el 24,4% se concentraba en las cabeceras y el 36,1% estaba en centros poblados y rural disperso (DANE, 2019b). En síntesis, estas cifras mostraron que el sector rural es más pobre que el urbano. Una conclusión nada novedosa teniendo en cuenta que, históricamente, la pobreza en América Latina se ha concentrado predominantemente en el sector rural, a pesar de los avances de la región en materia socioeconómica (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2016; Núñez Méndez & Ramírez, 2002).

De hecho, la pobreza rural ha sido una preocupación para los países de América Latina desde la segunda mitad del siglo XX. A partir de la década de los 60, agencias internacionales de cooperación económica como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) advirtieron la importancia de mitigar la pobreza rural con intervenciones dirigidas específicamente a este sector, para que respondieran a sus particularidades económicas y sociales (Echavarría, 1998). Esto incluía una amplia gama de estrategias encaminadas, por ejemplo, al establecimiento de un mercado de tierras y de sistemas financieros rurales, a través de la creación de programas de asentamiento y colonización, impuestos a la tierra con base en su producción, proyectos de titulación y registro de tierras y desarrollo de catastro (Echavarría, 1998). Todos elementos claves que buscaban reducir la pobreza atendiendo las necesidades y dinámicas propias del sector rural.

En Colombia, además de estas estrategias para abordar la pobreza rural, se creó la figura de Zona de Reserva Campesina (ZRC) en la Ley 160 de 1994. Según las normas que las reglamentan (Ley 160 de 1994, Decreto 1777 de 1996 y el Acuerdo 024 de 1996), dichas zonas constituyen un área geográfica delimitada por la junta directiva de la autoridad nacional de tierras, actualmente Agencia Nacional de Tierras, que se crea al interior de uno o varios municipios con el fin de crear las condiciones necesarias para mejorar las condiciones de vida del campesinado. La figura fue especialmente pensada para “fomentar y estabilizar la

economía campesina, superar las causas de los conflictos sociales que las afecten y, en general, crear las condiciones para el logro de la paz y la justicia social en las áreas respectivas” (Decreto 1777 de 1996).

Según el Decreto 1777 de 1996, la ZRC tiene como principales objetivos: *i)* controlar la inadecuada expansión de la frontera agrícola; *ii)* regular la ocupación y aprovechamiento de tierras baldías, dando preferencia en la adjudicación a campesinos colonos¹; *iii)* crear y construir una propuesta integral de desarrollo humano sostenible y de ordenamiento territorial; y *iv)* fortalecer los espacios de concertación social, política ambiental y cultural entre el Estado y las comunidades, garantizando su adecuada participación en las instancias de planificación y decisión local y regional. Para ello, las mismas normas establecen que la actuación del Estado en esta área debe estar encaminada a otorgar subsidios, incentivos y estímulos de manera preferencial y en favor de la población campesina en materia de créditos agropecuarios, capitalización rural, adjudicación y adecuación de tierras, desarrollo de proyectos alternativos, modernización y el acceso ágil y eficaz a los servicios públicos rurales (Decreto 1777 de 1996).

Finalmente, la figura contempla la participación de las comunidades en sus territorios a través de la creación de los Planes de Desarrollo Sostenibles (PDS), que constituyen una hoja de ruta sobre las acciones que requiere el territorio para mejorar las condiciones de vida y culminar los proyectos de vida de las comunidades campesinas. Según la norma, la autoridad de tierras debe convocar a las instituciones públicas y privadas a nivel local que tengan intereses en el territorio y a las organizaciones representativas del campesinado, “con el objeto de preparar el plan de desarrollo sostenible, definir y concertar las acciones que deban emprenderse” (Acuerdo 024 de 1996, Art. 7.).

A la fecha se han constituido siete ZRC en todo el territorio nacional: Cabrera, Cundinamarca (Resolución 046 del 2000); Cuenca del Río Pato y Valle de Balsillas, Caquetá (Resolución 055 de 1997); Perla Amazónica, Putumayo (Resolución 069 de 2000); Guaviare, Guaviare

¹ Según la ley, los beneficiarios de adjudicación de baldíos serán “los hombres y mujeres campesinos mayores de dieciséis años de escasos recursos o que tengan la condición de jefes de hogar, que además no sean propietarios de predios rurales, se hallen en condiciones de pobreza y marginalidad, y deriven de la actividad agropecuaria la mayor parte de sus ingresos en su calidad de asalariados del campo, minifundistas o meros tenedores de la tierra” (Ley 160 de 1994).

(Resolución 054 de 1997); Valle del Río Cimitarra, Bolívar y Antioquia (Resolución 028 de 2002); Morales y Arenal, Bolívar (Resolución 054 de 1999); Montes de María II, Bolívar (Resolución 057 de 2018). Las primeras seis fueron creadas entre 1996 y 2002 y la última en 2018, dado que la aplicación de esta política fue suspendida en el primer año del periodo Uribe Vélez (2002-2008) por una decisión presidencial, y luego reactivadas en 2010 (Fajardo, 2012).

De esta manera, las ZRC constituyen una política que pretende mejorar las condiciones de vida del sector rural, especialmente, de los **campesinos pobres**, por medio del acceso preferencial a recursos productivos como tierras, crédito, asistencia técnica, etc., así como la provisión de bienes y servicios públicos, además de permitir la participación del campesinado en los planes que requiera la región. Para la Corte Constitucional, estas disposiciones que trae la ZRC pueden garantizar el bienestar del campesinado, en la medida que solucionan los conflictos socioeconómicos y ambientales ligados a la tierra, protegen y fortalecen las economías campesinas, ordenan los procesos de colonización y contribuyen a la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de los campesinos (Sentencia T-713 de 2017).

No obstante, en 25 años de vigencia de la figura, las ZRC no han transformado las condiciones materiales del campesinado que vive en ellas. En ninguna de las ZRC constituidas se ha logrado cumplir con sus objetivos en cuanto a la adjudicación de baldíos y formalización de la pequeña propiedad, financiación de los PDS, provisión de bienes y servicios públicos de calidad y acceso preferencial a los incentivos económicos (Contraloría General de la República, 2015a; Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2018).

La literatura en esta materia es enfática en mencionar que las características comunes de la ZRC son **la marginalidad, la pobreza, las confrontaciones entre distintos actores armados por el control del territorio y los cultivos ilícitos**. “Estas constantes marcan la desestabilización en cuanto al desarrollo de las zonas, generando en ellas una alta inestabilidad, tanto de la economía campesina como en la propiedad de la tierra” (Ortíz Guerrero et al., 2004, p. 11). De hecho, según el informe de evaluación de la política de ZRC de la Contraloría General de la República, “las condiciones socioeconómicas del sector rural

en las ZRC muestran deficiencias en los indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y de déficit de vivienda (Contraloría General de la República, 2015a, p. 14).

La misma evaluación de la Contraloría encuentra fallas del Estado a nivel local, departamental y nacional en la implementación de ZRC. Para la entidad, la provisión en materia de bienes y servicios públicos como salud, educación, saneamiento básico, infraestructura de transporte, formalización de la propiedad rural, acceso a crédito y trato preferencial en materia de incentivos productivos ha sido precaria. Esto conforma un “conjunto de carencias que obstaculizan la estabilización socio-económica de las familias que habitan las ZRC” (Contraloría General de la República, 2015a, p. 78).

En este sentido, se podría decir que la pobreza es una condición que persiste en las zonas de reserva, a pesar de que se haya creado justamente para superarla, pero ¿qué significa esta condición? Para Albert Berry (2003), la efectividad de los instrumentos de reducción de la pobreza depende en gran medida de cómo esta se entiende, es decir, de la definición misma que se tiene sobre el fenómeno, pues de ella se desprenden las dimensiones y herramientas que se usan para medirla y abordarla. Por ende, cualquier esfuerzo por analizar la situación de pobreza que, pareciera sigue siendo una constante en las ZRC, pasa primero por conceptualizar esta condición y sus dimensiones. Esto implica ver la pobreza más allá de una lista de ítems que caracterizan la situación de las ZRC y de buena parte del sector rural, como las condiciones de la vivienda, la falta de empleo o el acceso a salud y educación, y establecer una definición misma de la pobreza o, más importante aún, la forma en que la definen aquellos que perduran en esta condición, como el campesinado de la ZRC.

Esta investigación tiene como propósito **comprender cuál es la noción de pobreza que tiene el campesinado de la Zona de Reserva Campesina de Morales y Arenal (ZRC-MA), al sur del departamento de Bolívar, y conceptualizarla a partir de sus percepciones y experiencias de vida.** En este texto se construye una definición de la pobreza que da cuenta de las particularidades que tienen los habitantes de la zona de reserva como campesinos y campesinas del país, así como del contexto social, político y económico en el que se enmarcan sus condiciones de vida. Con ello, esta investigación hace un esfuerzo por establecer las dimensiones y los elementos que para esta población son determinantes para

culminar sus proyectos de vida, permitiendo ver la pobreza de manera más próxima a sus realidades.

Preguntarse por la noción de pobreza que existe en las ZRC es especialmente importante, pues la ZRC es la única figura en el ordenamiento jurídico que reconoce la existencia de un territorio netamente campesino e incluye la apertura de espacios institucionales para la planeación del ordenamiento territorial como los PDS, los cuales representan uno de los pocos espacios institucionales abiertos al campesinado para su participación (Estrada, 2013). Tanto la inclusión de esta figura en la ley 160 de 1994, como su reglamentación en 1996 y la creación legal de las primeras zonas de reserva durante los últimos años del milenio, son el resultado de una “presión de algunas movilizaciones campesinas en demanda de atención estatal” (Fajardo, 2012, p. 60). Las ZRC fueron producto de intensas luchas campesinas que se dieron en la década de los 90, en medio de un conflicto armado que alcanzaba su punto más alto, y que exigían el derecho al territorio de los campesinos cocaleros (Fajardo, 2000), inicialmente, pero que con el paso del tiempo fue reconocida por las diferentes organizaciones campesinas en gran parte del territorio nacional, consolidando un movimiento campesino alrededor de esta figura (Osejo Varona, 2013).

Las zonas de reserva también significan el reconocimiento de una producción campesina del territorio. Al constituir esta figura, se reconocen las formas de organización territorial de las comunidades campesinas en la que se destacan el manejo de recursos, la gestión de proyectos, las formas de regulación social y económica y las reivindicaciones por el acceso al territorio (Estrada, 2013; Ruiz Reyes, 2015; Tobón Quintero & Ferro, 2012). Todos elementos que pueden traducirse en “un proceso social de construcción de una dinámica territorial, devenido en movimiento” (Estrada, 2013, p. 27).

Finalmente, a diferencia de otras políticas gubernamentales en esta materia, las ZRC le permiten al campesinado participar en el diseño de los planes y acciones que requiere su región para superar, justamente, la condición de pobreza, a través de los PDS. La constitución de una ZRC pasa necesariamente por un proceso de concertación, en el que tanto autoridades locales como comunidades planean a futuro el territorio, lo que implica pensar en los elementos que se requieren para transformar las condiciones de vida, es decir, elementos que son constitutivos de la pobreza, aunque no se reduzcan solamente a ella. Así, las ZRC además

de ser un espacio que reconoce al campesinado como grupo social específico, con sus respectivas particularidades económicas, sociales y culturales, permiten pensar en las condiciones de pobreza que existen en la región para encontrar caminos que puedan ayudar a superarla.

Particularmente la zona de reserva de Morales y Arenal tiene dos características que merecen especial atención frente al resto de zonas legalmente constituidas. Por un lado, a pesar de que los municipios de Morales y Arenal comparten una figura de ordenamiento territorial como la ZRC, sus condiciones socioeconómicas son distintas. De acuerdo con cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP)², para julio de 2017, el ingreso per cápita de Arenal era en promedio de \$400.000, mientras que el de Morales era de \$800.000. De igual manera, mientras que en Arenal la agricultura, pesca, ganadería y silvicultura representan solo el 10,49% de la actividad económica del municipio, en Morales esta representa el 31,29%. Finalmente, el número de personas dentro del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) en Arenal es de 8.681, mientras que el de Morales es de 15.582.

Por otro lado, a pesar de que el campesinado de esta zona de reserva no es homogéneo ni política ni productivamente, la constitución de la zona de reserva le ha permitido consolidar un movimiento que integra los intereses de las organizaciones de ambos municipios. En Morales y Arenal y dentro de la zona de reserva misma, existen aproximadamente 57 organizaciones de carácter productivo, cultural y político. También existen apuestas políticas distintas a la zona de reserva, como la Cumbre Agraria y sus territorios agroalimentarios, que tienen unas exigencias particulares frente al desarrollo del campesinado de la región, como la autonomía territorial. Sin embargo, fue solo a raíz de la creación de la ZRC que los pobladores de estos municipios han empezado a organizarse (aunque ya existan otros procesos) para entablar acciones conjuntas que mejoren sus condiciones de vida de manera integral (ver Capítulo III).

² Estas cifras corresponden a las fichas de caracterización territorial que realiza el Departamento Nacional de Planeación para cada uno de los municipios del país. Disponibles en el siguiente link: <https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Paginas/Fichas-de-Caracterizacion-Regional.aspx>

En este sentido, esta investigación parte de problematizar esa imagen tan natural que se tiene de la pobreza, de los indicadores y dimensiones que la componen, y pretende conceptualizar teóricamente lo que significa dicha condición para un grupo social y un contexto específico. Para ello, esta investigación realiza un diagnóstico de las condiciones de vida de esta zona de reserva y sitúa las subjetividades de dicho campesinado frente a la condición de pobreza en contextos más amplios del orden social, político y económico. Esta investigación pretende brindar herramientas para la comprensión de la pobreza en Colombia y la forma en que opera este fenómeno a nivel local, con las limitaciones que supone para la culminación de los proyectos de vida.

Así, la importancia de conceptualizar y definir la pobreza de esta manera es doble. Por un lado, la conceptualización de la pobreza tiene una base empírica que se sustenta en las vivencias de los habitantes, pues la definición de la misma está construida a partir de las percepciones y experiencias de la comunidad campesina. Esto permite que se reconozcan los elementos y las dimensiones que para esta comunidad son importantes para mejorar las condiciones de vida y se hacen explícitas las dimensiones que tienen más peso sobre otras en un contexto dado. Por el otro, dicha definición reconoce las particularidades y dinámicas propias del sector rural, que tienen que ver con las históricas problemáticas agrarias en medio de una economía neoliberal, que la misma literatura sobre el tema ha reconocido como factores que producen y reproducen la pobreza (ver Capítulo II). Esto implica pensar las características propias de lo rural como dimensiones constitutivas de la pobreza y nombrarlas a partir de ahí, con el fin de pensar en indicadores que den cuenta de lo que necesita el campesinado para culminar su proyecto de vida.

El texto se divide en cuatro capítulos, además de esta introducción y las conclusiones. El primer capítulo expone los elementos teóricos sobre los que se soporta esta investigación con respecto a la pobreza a nivel general y la rural en particular. El segundo, desarrolla la metodología usada para el caso de Morales y Arenal, incluyendo límites y consideraciones. El tercer capítulo hace una caracterización de la ZRC-MA, con base en i) la historia de su creación y los procesos organizativos actuales y ii) un diagnóstico de las condiciones de vida en Morales y Arenal, según los elementos que la literatura identifica como claves en la producción de la pobreza, especialmente para el campesinado. Por su parte, el cuarto capítulo

desarrolla la noción de pobreza que tiene el campesinado de la zona de reserva, identificando sus principales dimensiones y el contexto económico, político y social en el que se enmarca su percepción de la pobreza, para luego proponer algunas dimensiones de la pobreza que surgen de este análisis. Finalmente, el texto termina con unas conclusiones y recomendaciones.

Capítulo I: Discusiones teóricas sobre la pobreza

Si bien a lo largo de estas páginas se construye una definición de la pobreza con base en las experiencias de vida de un campesinado particular, es importante recalcar que cualquier estudio sobre este tema debe partir por reconocer las principales corrientes teóricas que permiten comprenderla. El estudio sobre la pobreza *no cae en el vacío*. Por eso, este apartado pretende, primero, delimitar teóricamente el concepto de pobreza, para comprender a qué se hace referencia cuando se nombra esta palabra. Y segundo, explica los principales aportes de la literatura sobre *pobreza rural*, la cual constituye un marco conceptual que permite comprender la noción de pobreza en un contexto de actividades productivas y culturales que se desarrollan en el campo, como sucede en la ZRC-MA.

1.1 La pobreza: multidimensional, producida y contextualizada

La condición de pobreza es algo que ha existido a lo largo de nuestra historia y se manifiesta de distintas maneras dependiendo el tipo de sociedad y su sistema político, económico y cultural. Teniendo en cuenta que todas las sociedades están estratificadas de alguna u otra manera, la consecuencia es que un grupo o sector de la población siempre va a estar en el “fondo” (Øyen, 2004). Esto, a su vez, genera una forma de diferenciación en la sociedad donde se entiende que las personas que se encuentran en el fondo de la jerarquía tienen menos de lo que es considerado deseable, bien sea tangible (bienes materiales) o no (elementos socioculturales) (Øyen, 2004). El estudio de la pobreza consiste en dilucidar, justamente, lo que constituye este fondo de la jerarquía.

El estudio sobre la pobreza ha estado marcado por distintos enfoques, perspectivas y paradigmas desde su primera aparición a inicios del siglo XX hasta la actualidad, donde el debate sobre qué significa ser pobre continúa vigente. En este caso, esta investigación parte de tres grandes perspectivas para comprender la pobreza: (i) las múltiples dimensiones en las

que se priva a una persona para desarrollar sus libertades personales; (ii) que es una condición producida históricamente a partir de una serie de relaciones económicas, políticas y sociales a nivel internacional, nacional y local; y (iii) que se manifiesta y se experimenta de manera diferenciada, dependiendo del contexto en el que se encuentre y las características que tenga cada grupo social.

La pobreza fue por primera vez definida a fines del siglo XIX por Charles Booth (1892), quien la relacionó con los estándares mínimos que una persona necesita para sobrevivir. Esta definición fue luego desarrollada por Seebohm Rowntree (1901) en Inglaterra, en la que se establecía una línea de la pobreza, medida a través de una canasta de bienes o servicios que una persona debe tener para sobrevivir, constituyendo así una visión economicista y unidimensional de la pobreza. Con el tiempo, dicha visión fue consolidándose tanto en instituciones académicas como en agencias internacionales, hasta llegar a asociarse con elementos del desarrollo, industrialización y modernización de los países (Øyen, 2004). Lo que significó que la pobreza se relacionara con el crecimiento económico de un país, pues este determinaba la posibilidad de ingreso de los individuos de una sociedad para obtener la canasta de bienes y servicios que necesita para sobrevivir.

Así, el principal indicador para medir qué tan pobre era un individuo, según esta visión económica, fue la Línea de Pobreza (LP), el cual tiene un enfoque monetario y determina lo que una persona necesita para vivir dignamente. La LP puede ser absoluta, donde se mide el costo per cápita mensual mínimo para alcanzar una canasta de bienes y servicios básicos; o relativa, que tiene que ver con la distribución de ingresos en una sociedad (Torres Penagos, 2016). Con este índice como principal herramienta para la medición de la pobreza, se desarrollaron desde la década de los 70 grandes encuestas en varios países del mundo, impulsadas por el Banco Mundial, con el fin de obtener información más precisa sobre las personas pobres y sus condiciones de vida y caracterizar el capital económico de diferentes países (Øyen, 2004).

La caracterización de las personas en situación de pobreza y sus estándares de vida según sus ingresos, no solo mostró las diferencias entre los ingresos medios de la población, sino que evidenció algunos patrones en la situación de pobreza de los países donde, por ejemplo, en promedio la carga de la pobreza siempre era mayor en mujeres y niñas que en hombres y

niños (Øyen, 2004). Tales patrones visibilizaron, a su vez, que la formación de la pobreza varía dependiendo de los sistemas políticos, culturales, económicos y sociales, y que cuestiones como la raza, el género o la religión inciden en la condición de pobreza (Øyen, 2004). Así, esta diferenciación entre los contextos de las personas consideradas pobres fue determinante para generar una noción de pobreza menos desarrollista y más centrada en entenderla como resultado de la interacción de muchos factores y condiciones económicas y sociales, que actúan de manera dinámica en contextos culturales particulares de las sociedades.

La propuesta de Amartya Sen (1978; 1985; 1987; 1993) fue determinante para adoptar otra visión de la pobreza, que tuviera en cuenta estas distinciones en los contextos de las poblaciones y se relacionara más con las vivencias de los individuos. El gran aporte de este Nobel de Economía fue su definición de pobreza como la privación de capacidades básicas que necesita una persona para desarrollarse libremente; para Sen la pobreza debe entenderse desde las capacidades que tienen los individuos para elegir el tipo de vida que quieran tener. Dicho enfoque se acerca a la comprensión de la pobreza desde el contexto de la vida de las personas y las libertades que disfrutaban (Torres Penagos, 2016), lo que permite develar esas estructuras que generan la pobreza en contextos específicos.

Para Sen (2000) las libertades dependen tanto de los arreglos económicos y sociales disponibles para los individuos, como acceso a la salud y educación, así como de los derechos civiles y políticos, dentro de los que se encuentra la posibilidad de participar en discusiones públicas y en los escrutinios electorales. Esto permite entender a la pobreza como una intersección de múltiples privaciones que sufren simultáneamente los individuos (Torres Penagos, 2016), por lo que, si bien los medios como la renta son importantes, pues permiten llegar a los fines, no es lo único que define la pobreza. Así, esta definición aboga por un enfoque humano que incluye las opciones y oportunidades en áreas claves para su superación como la educación, el trabajo y la salud (Torres Penagos, 2016).

Actualmente existe un amplio consenso en la literatura sobre el tema de que la pobreza no es un concepto monolítico, es decir, no está compuesto por un solo elemento, sino que abarca múltiples dimensiones de la vida social de los individuos (Alkire & Foster, 2011; Atkinson, 2003; Bourguignon & Chakravarty, 2003; Woolcock, 2009). Tal visión permitió incluir

factores como la exclusión social, el riesgo, la vulnerabilidad, el bienestar, las necesidades básicas y el ingreso económico, como variables que determinan las privaciones que puede sufrir una persona para obtener un pleno goce de su ciudadanía (Mabughi & Selim, 2006). Incluso, se ha reconocido al tiempo como otra variable que entiende a la pobreza no como un concepto estático, sino como un proceso dinámico que depende de las relaciones sociales y los contextos particulares que se dan a través de él (Addison et al., 2009).

A partir de esta perspectiva epistemológica que define a la pobreza, se desarrollaron en las últimas décadas del S. XX distintos indicadores para medirla que dieran cuenta de las múltiples dimensiones que impiden el desarrollo individual. Entre ellos se encuentran el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), creado por la CEPAL para los países de América Latina; el Índice de Desarrollo Humano (IDH), propuesto por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-; el Índice de Oportunidades Humanas (IOH), diseñado por el Banco Mundial-, y más recientemente el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), elaborado por la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford –OPHI por sus siglas en inglés-. En Colombia, además del NBI, se han incluido el Índice de Calidad de Vida (ICV) y el Sistema de Identificación de potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN) y actualmente se encuentra el IPM para el país elaborado por el Departamento Nacional de Planeación. Dichas herramientas han sido aplicadas desde la década de los 90 en diferentes partes del mundo y tienen en cuenta, en términos generales, las condiciones de vivienda, salud y educación de los hogares. Esta perspectiva multidimensional ha permitido hacer un seguimiento a las condiciones de vida de las poblaciones de manera diferenciada y ha permitido focalizar la política pública en regiones donde se presenten deficiencias en dichas condiciones (Torres Penagos, 2016).

Ahora bien, además de esta multidimensionalidad, los estudios en esta materia reconocen que la pobreza es histórica y socialmente producida y se manifiesta y experimenta de manera interseccional. Woolcok (2009) propone estudiar la pobreza desde lo que él llama la *teoría social de la pobreza*, que se compone de tres elementos. Primero, la propuesta parte de analizar y explicar los procesos sociales que han producido esta condición; explicar por qué cierto hogar o individuo no tiene acceso a esas capacidades que le permiten desarrollarse libremente. Segundo, se debe dar cuenta de los mecanismos que hacen que esta condición

persista en ciertos grupos sociales por un determinado tiempo, dilucidando la forma en que el poder es creado, mantenido y desafiado. Y tercero, la teoría comprende el comportamiento del grupo social al que se le atribuye esta condición, lo que significa reconocer sus prácticas sociales, culturales y políticas, con el fin de situar estas características de la pobreza en contextos específicos.

Con respecto al primer elemento de la propuesta, las ciencias sociales han adoptado una visión crítica de la pobreza en la que cuestionan que esta sea entendida como una característica de un individuo, hogar o sociedad. Para varias áreas de conocimiento de las ciencias sociales, en especial la sociología y antropología, “los análisis de pobreza convencionales descansan sobre una mirada errónea de la ciencia que eleva la medición, pero desconoce su contexto” (Harris, 2009, p. 207). Para autores como Arzate et al. (2011) el dato de pobreza representa una magnitud estadísticamente probable, pero no tiene capacidad explicativa. “El problema del dato empírico de pobreza es que la carencia, en cualquiera de sus dimensiones, no se encuentra conectada a su sistema de relaciones históricas, económicas y sociales que le dan sentido” (Arzate et al., 2011, p. 13) Así, los análisis convencionales sobre pobreza se han enfocado en establecer reglas generales para describir los factores que componen la pobreza, más no para las esclarecer las estructuras que la generan. Es decir, presentan la pobreza como un “estado” que requiere una apropiada descripción para su entendimiento, pero pierden la oportunidad de revelar la forma en que se produce y reproduce en el tiempo (Arzate et al, 2011).

Por eso, alguna literatura ha reiterado que la comprensión de este fenómeno no puede concentrarse únicamente en cuestiones relacionadas con su medición o sus manifestaciones en un tiempo y espacio determinado, sino que es necesario estimular la construcción de modelos teóricos que contribuyan a explicarla (Cimadamore & Donato Biocca, 2008). Para este grupo de la literatura, es necesario pensar en la pobreza como un fenómeno complejo en el que interactúan simultáneamente procesos económicos, políticos, sociales y culturales (Cimadamore & Donato Biocca, 2008), por lo que no debe pensarse la pobreza como una cosa para ser atacada, sino como el resultado de relaciones sociales específicas que han producido esta condición (Green, 2003).

Por ello, desde las ciencias sociales se proponen que la pobreza sea entendida como una construcción social e histórica que es creada y reproducida por diferentes actores situados espaciotemporalmente (Harris, 2009). Esta mirada crítica al concepto de pobreza sugiere que la formación de la misma es profundamente política, pues responde a relaciones de poder, clase y dominación, que permiten a un individuo o comunidad ‘ser pobre’, por lo que el estudio de este fenómeno debe dirigirse a estudiar la pobreza y no al pobre. De hecho, Arzate et al., (2011) sugieren reemplazar el término pobreza por *empobrecimiento* al que se someten ciertas poblaciones, y Øyden (2004) considera neutral hablar de las causas de la pobreza, por lo que propone hablar de la *producción de la pobreza*, teniendo en cuenta que esta palabra sugiere un tipo de acción que produce o genera dicha condición.

Este enfoque teórico también implica reconocer las formas en que se mantiene y desafía este poder de jerarquización entre los pobres y no-pobres. Para ello, se adoptan nociones como marginalidad, exclusión y desigualdad como conceptos que explican la condición de pobreza en función de la generación de riqueza. Lo importante es “realizar una distinción entre los procesos de acceso al ingreso y patrimonio con respecto a los procesos sociales de exclusión y discriminación, fenómenos que tienen efectos diferenciados en el bienestar de las personas y familias” (Arzate Salgado et al., 2011, p. 12).

Un ejemplo de cómo entender este aspecto lo desarrolla el mismo Sen (2000) en su propuesta de entender al desarrollo como el proceso de expandir las libertades de las que goza un individuo. El autor menciona que, si bien los afroamericanos en Estados Unidos pueden llegar a ser más ricos que las personas en el tercer mundo, esta población tiene una esperanza de vida (indicador que incluye el IDH) mucho menor que países como Sri Lanka o algunas partes de India (Sen, 2000b). En este sentido, es necesario recalcar las razones que posibilitan e impiden a un individuo, por ejemplo, al afroamericano en EEUU, acceder a los recursos, bienes y servicios que provee la sociedad estadounidense, es decir, sus capacidades, para tener una vida longeva. Lo que llevaría a discutir, entre otras cosas, los procesos de racialización en la construcción del Estado americano, que impiden a este grupo social acceder a bienes o servicios que puedan potenciar y desarrollar sus libertades.

Por ende, las formas en que se produce, manifiesta y reproduce la pobreza se refuerzan mutuamente por cuestiones de raza, género y clase, donde el contexto ayuda a potenciar o

minar esas caras de la pobreza (Green, 2008). La pobreza es una carencia producida por sujetos históricos, la cual es resultado de un “complejo proceso de relaciones sociales, en donde las variables de clase, raza, edad, sexo e, incluso, región son determinantes del resultado, en la medida en que toda relación social y económica implica relaciones de poder-dominación que las hacen posibles” (Arzate et al, 2011 p. 11).

Lo anterior conduce a problematizar los mismos indicadores con los que se mide esta condición, pues las dimensiones que describen la pobreza homogenizan a la población que presenta estas características (Green, 2008). Se presenta entonces al hacinamiento, la falta de educación de los jefes del hogar, falta de acceso a salud o la construcción inadecuada de vivienda, como elementos transversales a todos grupos sociales, sin que se expliquen o por lo menos visibilicen sus particularidades en cuanto a la forma en que tienen el mundo, sus prácticas cotidianas y sus experiencias. Por ejemplo, las mujeres rurales, una población indígena, afro descendiente e incluso campesina.

Para antropólogos como Green (2003) y Escobar (1995), las agencias internacionales de cooperación como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional crean los indicadores y las definiciones con que se identifica la pobreza de una población, asumiendo sus características como algo dado y estableciendo lineamientos similares para que las distintas naciones las midan (Green, 2003). La pobreza aparece como algo real cuando las instituciones internacionales la cuantifican, localizan y jerarquizan los países y poblaciones de acuerdo a ella (Escobar, 1995).

Por ello, Woolcok (2009) plantea tres esferas desde donde los estudios no económicos de la pobreza pueden partir para conocer las realidades de los grupos sociales: las relaciones sociales, sus sistemas de reglas y los sistemas de significado. El primero se refiere a cómo se definen los grupos, cómo se crean los límites entre "nosotros" y "ellos", cómo dichos límites se mantienen y se transgreden, y cómo estos se desplazan durante periodos de transformación económica y política. Los sistemas de reglas, por su parte, corresponden a todas las normas formales e informales que regulan los comportamientos de una comunidad y facilitan la vida en sociedad. Y finalmente, los sistemas de significados se refieren al conjunto de creencias que le permiten a un individuo que hace parte de una sociedad darle sentido al mundo en el que habita (Woolcock, 2009).

En este sentido, la propuesta que aborda esta investigación consiste en establecer que la pobreza se presenta de múltiples formas, pero reconociendo que dichas formas son producidas y reproducidas en un contexto específico. De igual manera, estas múltiples formas en que se identifica la pobreza también responden a las nociones que cada grupo social, como lo son los campesinos en la zona de reserva de Morales y Arenal, tienen sobre su contexto, a sus prácticas y su experiencia de vida misma.

1.2 La construcción de la pobreza en lo rural: neoliberalismo, cuestión agraria y campesinado

La pobreza rural es un concepto amplio que abarca múltiples dimensiones³ y todavía presenta disensos en la forma de entenderla, medirla y erradicarla. La diversidad de resultados, así como las metodologías empleadas en los estudios sobre este tema, hacen que sea prácticamente imposible hablar de un indicador y un comportamiento único y específico de pobreza (Argüello, 2004). Sin embargo, los estudios de las ciencias sociales, incluyendo la economía, han permitido establecer unos elementos determinantes de la pobreza que permiten caracterizar esta condición en el sector rural, los cuales se relacionan con la “bajísima productividad del trabajo, precariedad en las condiciones del empleo, magros niveles de ingreso generados e incipiente seguridad social” (López Castaño & Núñez Méndez, 2007, p. 122).

Según la literatura, la pobreza en el sector rural se determina por los activos privados con los que cuentan los hogares rurales y son utilizados para generar productos o ingresos monetarios, como la tierra, maquinaria y tecnología que se necesita para ponerla a producir, el nivel educativo y la composición del hogar, entre otros elementos (Leibovich & Núñez Méndez, 1999; Tobasura et al., 2013; Parra-Peña et al. 2013). Pero también se explica por las políticas de desarrollo económico que excluyen las capacidades del campesinado, la estructura desigual en la tenencia de la tierra, la precarización laboral, las condiciones de discriminación de las mujeres rurales y comunidades étnicas, la falta de sostenibilidad ambiental y la exposición constante de las poblaciones rurales a formas de violencia (Berry,

³ Las formas de analizar la pobreza van desde corrientes que la asocian con conceptos más amplios como desigualdad, o desarrollo (Gasparini et al., 2014); que plantean hablar de pobreza y riqueza, como fenómenos indisolubles (J. C. Castillo & Rivera, 2018); o incluso se enfocan en las expectativas de las personas en contextos particulares, como el conflicto armado (Loaiza Quintero et al., 2018)

2017; Castillo, 2014; Jaramillo, 2006; Kay, 2006; Mora Cortés, 2013). Así, la pobreza rural está dada tanto por las condiciones propias de los hogares rurales, como por las problemáticas históricas del campo y sus estructuras económicas, políticas y sociales excluyentes.

Con respecto a estas estructuras, los estudios sobre pobreza coinciden en que “mientras prevalezca el actual *modelo de desarrollo agropecuario*, están dadas las condiciones para que en Colombia subsista la pobreza rural” (Perfetti, 2009, p. 25). La población rural en Colombia, específicamente el campesinado, depende en gran medida del sector agropecuario para su subsistencia⁴ (Perfetti, 2009), por lo que el nivel de pobreza está ligado al comportamiento de este sector (Barrientos Marín et al., 2014). Por eso, el impacto que han tenido las políticas de liberación de mercados, que sucedieron a principios de la década de los 80, en la producción agropecuaria del país han sido las causantes del empobrecimiento de un amplio sector de la población rural colombiana (Forero Álvarez, 2002).

La relación entre dicho modelo de desarrollo y la pobreza tiene varias aristas y perspectivas que han sido ampliamente documentadas en la literatura internacional, especialmente en el sur global (Puyana et al., 2005; Bush, 2007; Mazoyer, 2008). Para los fines de esta investigación solo se hará énfasis en cómo este modelo se ha entendido como un generador de pobreza en el campesinado colombiano de dos maneras: su marginalización económica y la reducción del margen de acción del Estado para atender las demandas de esta población, en un contexto de inequidades agrarias.

Si bien Colombia tiene una herencia de modelos de desarrollo industrial que apostaron por la rápida desaparición del campesinado y la consolidación de la agricultura empresarial con asalariados rurales (Salgado Araméndez, 2010), el actual modelo económico para el campo ha tenido especiales consecuencias en esta población. Las políticas neoliberales han profundizado la brecha entre productores capitalistas y campesinos (Kay, 2007), lo que, en palabras de este autor, ha generado una *agricultura a dos velocidades*.

⁴ Existe una corriente en la literatura sobre estudios rurales, denominada *nueva ruralidad*, que menciona la pluriactividad de los hogares campesinos, donde se involucran cada vez en actividades no agrícolas o pecuarias, como turismo, artesanías, comercio, etc. Sin embargo, Forero (2002) plantea que esta proliferación de actividades, más que constituir nuevas oportunidades para el campo, es el resultado de una prolongada crisis agropecuaria. De igual manera, Kay (2007) plantea que la nueva ruralidad es el resultado del neoliberalismo, y “promover la pluriactividad sin cambiar el contexto es reproducir el neoliberalismo y con ello la explotación y el despojo campesino”.

El modelo de industrialización por sustitución de importaciones que predominó en décadas anteriores, fue reemplazado por uno cuya principal característica ha sido “la liberalización de los mercados que significa tanto extender como profundizar las relaciones mercantiles en todos los ámbitos posibles” (Kay, 2007, p. 32). En teoría, la liberalización de los mercados beneficiaría la agricultura en la medida que aumentaría sus exportaciones, permitiendo que los campesinos también exportaran, aumentando sus oportunidades de empleo y mejora en sus salarios como trabajadores agrarios (Kay, 2007).

No obstante, estos mercados son más exigentes en términos de calidad, controles fitosanitarios y acceso a compradores como grandes cadenas de supermercados, entre otros, que dificulta la capacidad para competir de todos los productores. Estos requerimientos para competir con mercados internacionales favorecen a la agroindustria que tiene los capitales y conocimientos para realizar los procesamientos necesarios y que está involucrado en otras etapas de la cadena productiva, en la que se captura la mayor parte del valor agregado y de las ganancias (Kay, 2007). Adicionalmente, la liberalización de los mercados ha facilitado la importación de alimentos, “que ha llevado a la ruina a muchísimos productores campesinos e incluso ha provocado dificultades para los capitalistas” (Kay, 2007, p. 36). Con la diferencia que estos capitalistas tienen la capacidad de responder en momentos de crisis en el mercado, en tanto tienen los medios económicos para incrementar la eficiencia productiva o reconvertir su producción hacia bienes más rentables (Kay, 2007).

Aunque este modelo tiene muchos más efectos negativos⁵, en el aspecto económico dicho modelo parte de tres supuestos que no fueron garantizados en un principio en el campo colombiano (Corrales Roa & Forero Álvarez, 1992). En primer lugar, el modelo parte de contar con una tecnología adecuada a las necesidades del productor agrario para ser competitivo. Sin embargo, la generación de dicha tecnología está en manos del Estado y no depende del campesino, lo que representa un obstáculo para el desarrollo de su economía. Una segunda dificultad es que el capital humano con el que cuenta la transformación tecnológica que supone el modelo se ve truncado por la carencia de sistemas educativos apropiados en el sector rural y por la misma violencia, que debilitan el “factor humano” en

⁵ Según Corrales Roa & Forero Álvarez (1992), la política neoliberal ha afectado la seguridad alimentaria, la pérdida de identidad cultural y biodiversidad, impacto en renglones productivos, deterioro de las condiciones de vida y empobrecimiento tecnológico por la presión a la especialización productiva.

la productividad del trabajo. Finalmente, el acceso a uno de los principales medios de producción, que es la tierra, permanece concentrada y fuertemente inmovilizada por el latifundio ganadero.

Así, el modelo de apertura económica, libre mercado y libre competencia se aplicó sin crear las condiciones básicas para su implementación, sometiendo al sector rural a la presión de la competencia externa sin la posibilidad de responder positivamente a esta (Corrales Roa & Forero Álvarez, 1992). “Se trata [entonces] de ofrecer la oportunidad a los campesinos de acogerse a modelos mecánicos de suministro de materias primas agropecuarias para la exportación, (...) enfrentado a mercados de alta incertidumbre y ningún control” (Corrales Roa & Forero Álvarez, 1992, p. 61).

Adicionalmente, la apertura de economías a mercados mundiales y la multiplicación de los acuerdos de libre comercio, condujo al auge de unos productos específicos como soya, palma de cera o caña de azúcar (Kay, 2015), en detrimento de otros. Perfetti (2009) plantea que la inversión económica del campesinado está en productos no transables⁶, que corresponden a los bienes básicos de la dieta colombiana y no generan tantos ingresos. Mientras que los transables, como la palma, caña, banano, flores y café, son los que generan mayor empleo rural en la economía agropecuaria y pertenecen a grandes y medianos productores (Perfetti, 2009). Por esta razón, entre 1991 y 1998, los cultivos transitorios de arroz, maíz, sorgo, cebada, etc. disminuyeron en más de 875.000 hectáreas, en tanto las áreas permanentes como caña y palma, sin incluir el café, aumentaron en 293.000 hectáreas (Pérez Martínez & Pérez Correa, 2002).

Estos productos transables, en palabras de Giovenardi (1999), son aquellos que generan mayor acumulación de valores económicos, donde el campesino no tiene cabida. Para el autor, el campesinado es un profesional pobre porque produce e invierte todo su trabajo y sus recursos en el agregado de producción cuya capacidad de acumulación es débil, pues los mayores ingresos los genera la comercialización y la agroindustria de unos productos que compiten en el mercado internacional (Giovenardi, 1999). Además, los puntos de acumulación de valores económicos (insumos y comercialización) de este *complejo*

⁶ Los productos no transables son aquellos que solo pueden consumirse en la economía en que se producen, no pueden importarse ni exportarse. Estos pueden ser el plátano, la yuca, la papa, etc.

económico rural, son producto de decisiones políticas y económicas a las que el campesinado no tienen acceso (Giovenardi, 1999).

De esta manera, dicho modelo neoliberal le ha asignado a la sociedad rural y a la economía campesina la función de proveedores de mano de obra para actividades económicas urbanas o agroexportadoras (Pérez Martínez & Pérez Correa, 2002), por lo que las comunidades rurales, especialmente los campesinos pobres, se han visto rezagadas en su desarrollo (López Castaño & Núñez Méndez, 2007). El papel del campesinado se limita al suministro de materias primas agropecuarias para la exportación, desconociendo sus sistemas de producción y protección del medio ambiente, por lo que el modelo resulta en la consideración del campesinado como un sector desarticulado, marginal, homogéneo y en vías de extinción (Corrales Roa & Forero Álvarez, 1992).

Sin embargo, este impacto del modelo neoliberal debe entenderse en un contexto de estructuras agrarias pre-existentes y un marco institucional que permitió su instalación (Peña Huertas et al., 2014). Dicho modelo económico no es un fenómeno natural que llegó al país, sino es el resultado de la implementación de una serie de políticas públicas que promovieron la apertura económica, las cuales pasan por un filtro o procedimiento de decisión política que depende tanto de los diseños de dichas políticas como de las constelaciones de poder en las que se crean (Gutiérrez, 3013 en Peña Huertas et al., 2014). Es decir, a través de las instituciones del Estado y sus jerarquías se consolidan las políticas aperturistas que producen esos escenarios de empobrecimiento y que son el resultado de unos arreglos políticos entre distintos sectores de la sociedad. Por ende, la producción y reproducción de la pobreza también depende del Estado, quien condiciona la influencia de los mercados internacionales en las dinámicas locales (Cimadamore & Donato Biocca, 2008).

La liberación de los mercados estuvo acompañada por una perspectiva política que exaltaba la superioridad de la distribución mercantil de bienes y servicios por sobre su provisión pública (Becerril Velasco, 2015). En el marco de este modelo económico, “el deber del Estado neoliberal consiste en mantener el orden del mercado, evitar interferir en la producción y el intercambio y sancionar los ataques a la competencia entre individuos” (Becerril Velasco, 2015, p. 372). Esa ideología política fue condensada en las reformas que planteó el Consenso de Washington para toda la región de América Latina, las cuales incluían

la desregulación de los mercados financiero y laboral, la descentralización de servicios públicos, la reducción de impuestos y el recorte del gasto público, entre otros aspectos (Becerril Velasco, 2015).

Aunque varios países de la región incluyeron el paquete completo de las reformas del Consenso de Washington en su agenda política, “su adopción, su puesta en práctica y su respectiva falla o éxito, varió de acuerdo al contexto interno de cada país” (Becerril Velasco, 2015, p. 374). En el caso colombiano, el nuevo modelo económico trajo consigo, entre otras cosas, nuevas propuestas y acciones del Estado para flexibilizar las relaciones laborales, la privatización de las empresas públicas en la producción y en la provisión de servicios y la paulatina eliminación de subsidios para los más pobres, con agravamiento de los problemas de exclusión y fractura social (Gómez Jiménez, 2003). Estas medidas del nuevo modelo económico entraron en contradicción con las políticas sociales del Estado de Derecho, cuyo choque de trenes se manifestó con mayor ahínco en el ámbito agrario (Gómez Jiménez, 2003).

“El cambio a las políticas neoliberales ha reducido los focos de apoyo y medidas proteccionistas que el Estado solía proporcionar a algunos campesinos en el período de industrialización por sustitución de importaciones, como el crédito, la asistencia, e incluso tierra en aquellos países que implementaron reformas agrarias” (Kay, 2006, p. 464).

Para Peña Huertas et al. (2014), la Constitución del 91, siendo esta una de las más garantistas del continente, no consideró al campesinado como sujetos especiales de protección, motivo por el cual éste no han sido sujeto de políticas públicas. A lo largo de sus 380 artículos permanentes solo son nombrados en el artículo 64, en el que son equiparados a ‘trabajadores agrarios’, y en los artículos de transición, se les menciona en el 57 como parte de un grupo que debería participar en la construcción de propuestas sobre seguridad social (Peña Huertas et al., 2014). De hecho, las políticas y legislación agraria implementadas desde 1991 hasta 2010 no tienen una participación efectiva del campesinado, “dejando en manos del mercado, de los gremios y de las organizaciones agroindustriales el futuro del sector agropecuario” (Peña Huertas et al., 2014, p. 152).

Otro punto crucial del enfoque neoliberal en la agenda política del agro en Colombia tiene que ver con el acceso a tierras por parte de comunidades vulnerables. De acuerdo con

Machado (2009), una de las propuestas del modelo neoliberal es el desarrollo del mercado de tierras como alternativa de acceso a la propiedad rural. Bajo este modelo, las comunidades interesadas en obtener este activo, “simplemente acceden a una línea de crédito para comprar tierras mediante negociaciones voluntarias con los propietarios, la cual se complementa con crédito para producción y la inversión intrapredial, sin ninguna clase de subsidios” (Machado, 2009, p. 20). Así, el Estado aparece como un facilitador del mercado de tierras y de acceso a los créditos al otorgar algunos subsidios, “sin intervenir directamente en las negociaciones como lo hacía antes” (Machado, 2009, p. 20).

Estos supuestos fueron aplicados en la Ley 160 de 1994, que constituye la ley agraria vigente en el país, la cual, más allá de tener en su esencia el subsidio a la compra de tierras, no resuelve la desigualdad en la posesión de recursos (Machado, 2009). La estrategia supone que el mercado es un mejor asignador de recursos que el Estado, el cual solo debe limitarse a crear las condiciones para que el primero se desarrolle plenamente (Machado, 2009). Así, sin la intervención directa del Estado en la afectación de la estructura agraria, el mercado mantiene y profundiza las relaciones de poder y desigualdad en la sociedad rural, que impiden a sectores campesinos y otras comunidades rurales acceder a uno de los activos más importantes del sector rural: la tierra (Machado, 2009).

En el contexto colombiano, dichas reformas económicas fueron introducidas en un panorama de inequidades agrarias y violencia que atraviesan la implementación de las políticas e inciden en la producción y reproducción de la pobreza. Para Albert Berry (2017), los niveles de ingreso y bienestar de la población colombiana están mediados por la histórica relación de injusticia y violencia, que han contribuido a que exista una alta inequidad en la riqueza en términos generales, y de la tierra productiva en particular. Conflicto, violencia e injusticia son elementos inherentes a la historia agraria de Colombia, que ha tenido un grave impacto en los pobres rurales; principalmente en los pequeños campesinos y trabajadores agrarios asalariados, en la medida que han sido víctimas de un sesgo perverso en las políticas económicas, donde la tierra para esta población ha sido un bien susceptible de expropiación y despojo (Berry, 2017). Pese a ello, el clima político en esta era de globalización neoliberal es cada vez más desfavorable para que el Estado lleve a cabo medidas radicales que beneficien al campesinado, como por ejemplo la implementación de una reforma agraria,

debido al desbalance de poder y control frente a las fuerzas del mercado y de quienes controlan el capital, particularmente, el capital financiero (Kay, 2006).

En este sentido, se puede decir que el modelo de desarrollo en el sector rural ha tenido un *sesgo anticampesino*, donde la forma en que se organizan el sistema económico y se asignan los recursos mantienen en condición de pobreza a la población campesina (Uribe-López, 2013). Dicha condición se manifiesta en la imposibilidad del campesinado de acceder a los recursos productivos en este modelo de desarrollo, rezagando sus capacidades y limitando sus oportunidades. En lo que tiene que ver con la política agraria específicamente, el no reconocimiento del campesinado como un sujeto de derechos y el rol del Estado como facilitador en el acceso a tierra de comunidades carentes de ellas resulta problemático. El modelo económico “contempla una disminución drástica de la acción estatal y un mayor aislamiento de las entidades gubernamentales del campesinado” (Corrales Roa & Forero Álvarez, 1992, p. 60).

Capítulo II: Metodologías participativas para el análisis de la pobreza en el Sur de Bolívar

Con el fin de elaborar un concepto o una definición de la pobreza, según las experiencias de vida y percepciones del campesinado de la ZRC-MA, esta investigación parte de una metodología participativa de carácter cualitativo, que se sustenta en la teoría fundamentada. En este capítulo se expone en detalle el acercamiento metodológico de la investigación, para lo cual, primero, se expone un contexto sobre el uso de métodos participativos cualitativos en los estudios sobre pobreza y las ventajas de este enfoque en la comprensión del fenómeno. Luego se explica la metodología usada en el Sur de Bolívar, con sus respectivas etapas y su fundamento teórico, y, finalmente, se muestran las consideraciones, limitaciones y reflexiones que surgen de la investigación.

2.1 ¿Por qué un enfoque cualitativo y participativo?

La noción de capacidades (Amartya Sen 1978; 1985; 1987; 1993), que se enfoca en el carácter multidimensional de la pobreza y fue rápidamente aceptado por la academia y las agencias internacionales de desarrollo en la década de los 90, legitimó el uso de métodos cualitativos para conocer aquellos aspectos de la vida social de las personas que se relacionan

con la producción y reproducción de la pobreza (El Amin, 2003). Un ámbito que desde la década de los 60, cuando se empezó a pensar en la necesidad de abordar este asunto desde la política pública, estaba dominado por los métodos cuantitativos que para entonces servían a la definición de la pobreza como una cuestión netamente económica (El Amin, 2003). Así, la evolución del concepto de pobreza trajo consigo nuevos debates en torno al mejor método para estudiarla; métodos que permitieran comprender el contexto y las realidades locales, dinámicas y diversas en las que se crea y se manifiesta la pobreza (Chambers, 1995) .

La metodología participativa se vale justamente de los instrumentos del análisis cuantitativo y cualitativo, y permite a las personas en condición de pobreza analizar y expresar lo que saben, experimentan, necesitan y desean con respecto a la pobreza (Chambers, 1995). Según Torres Penagos (2016), las metodologías participativas pueden tener un enfoque directo o indirecto. El primero, se refiere a aquel que por medio de encuestas se le pregunta a población pobre sobre su percepción respecto a su condición -información que puede o no ser tomada en cuenta posteriormente en la elaboración de índices-. Mientras que en el segundo se realizan algunas consultas directas a la población sobre las percepciones que tengan frente a la pobreza, con el objetivo de incorporar dichas consultas a las herramientas de medición (Torres Penagos, 2016).

Particularmente, la investigación participativa de carácter cualitativo se ha convertido en una herramienta que permite comprender las dimensiones de la pobreza como un fenómeno social e identificar los aspectos subjetivos y la experiencia vivida de grupos sociales con respecto a este fenómeno, así como su impacto en sus vidas (Njeru, 2005). Su utilidad, radica en que permite obtener información de las condiciones de vida actuales y precedentes de las zonas estudiadas de manera oportuna, localizada y específica (Peralta et al., 2006). Dicha investigación es reconocida por capturar la riqueza del contexto en el que habita el grupo social y los mecanismos, procesos y limitaciones en los que se desarrolla la pobreza (El Amin, 2003), así como permite generar nuevos conocimientos, teorías e hipótesis que luego se pueden examinar en estudios posteriores (Weber et al, 2005).

Si bien las técnicas de investigación participativa han sido utilizadas predominantemente por los profesionales del desarrollo, su utilidad como un conjunto de técnicas de investigación ha sido evidente en disciplinas académicas como la ciencia política, la sociología, la

antropología y la economía, entre otras (Bowd et al, 2016). Algunos ejemplos que incluyen esta metodología son los estudios de Fitchen (1985) y Duncan (1999) en Estados Unidos, y más recientemente el trabajo de Thomson (2014) en Zambia.

El primero hace una etnografía en un enclave rural del estado de Nueva York, estudiando los factores históricos que inducen a la pobreza como los ingresos de las familias, las condiciones de la infancia, las relaciones entre vecinos y con el resto de regiones con las que colinda el enclave (Fitchen, 1985). Mientras que el segundo, hace un análisis de las relaciones de clase en el pueblo de Appalachia en Mississippi y las posibilidades de movilidad social, a través de un trabajo de campo de cinco años (Duncan, 1999). Por su parte, la investigación de Thomson (2014) se centra en comprender las opiniones locales sobre las características de los hogares pobres y ricos o acomodados en una región rural en Zambia, cuya principal actividad económica es la agricultura. Esto con el objetivo de identificar los elementos claves que componen la pobreza y la riqueza, identificados por la misma población (Thomson, 2014).

En el caso de Colombia, dos estudios merecen especial atención por los aportes que hacen a la comprensión de la pobreza en el país, utilizando una metodología participativa que combina herramientas del análisis cualitativo y cuantitativo. El estudio de Peralta et al (2006), por ejemplo, creó una línea de la pobreza propia basada en los elementos que identifica la población de dos municipios en la región andina. El estudio partió de una metodología de *etapas del progreso*, la cual hace énfasis en los ‘pasos’ que se requiere para salir de esta condición, según su propia línea de la pobreza. Luego se establecieron eventos determinantes en 25 años que permiten conocer cómo ha cambiado la situación de pobreza en el tiempo de acuerdo a la línea de la pobreza construida, para después categorizar a los hogares según su evolución (si han permanecido pobres, que han escapado de la pobreza, que han caído en ella o que nunca lo han sido). El estudio contrasta la información recolectada con los resultados de medidas nacionales como el Índice de Calidad de Vida (ICV), donde la población analizada identifica como pobres ciertas regiones que el ICV califica en un rango medio de la pobreza.

Por su parte, Torres Penagos (2016) desarrolla un índice de pobreza multidimensional (IPM) para la ciudad de Bogotá desde la perspectiva de las personas en dicha condición. Para ello,

la autora utiliza una metodología mixta en tres etapas, donde, primero, calcula el IPM según los estándares colombianos a toda la ciudad, luego selecciona las localidades donde la pobreza tiene mayor incidencia según los resultados del IPM y, por último, desarrolla talleres participativos con comunidades de estas localidades para establecer qué dimensiones del IPM son más importantes para ellos y qué variables se dejaron por fuera o se pueden incluir dentro del indicador para realmente medir sus condiciones de vida (Torres Penagos, 2016). Con base en estos resultados, el estudio propone una nueva metodología de medición que incluye las perspectivas de las personas consultadas y compara sus resultados con los obtenidos por el IPM tradicional.

Así, las metodologías participativas de carácter cualitativo constituyen una herramienta importante para la comprensión del fenómeno, teniendo en cuenta la experiencia de vida de quienes presentan esta condición. Si bien existen antecedentes del uso de este tipo de herramientas en Colombia, no se han realizado muchos esfuerzos por conceptualizar la pobreza con la participación de estas personas, sino en la mayoría se han utilizado para medir y analizar dicha condición en el sector rural. Por eso, una aproximación de este tipo en el contexto rural puede presentar nuevas formas de analizar esta condición y desarrollar o revelar nuevas líneas de investigación.

2.2 La metodología en el sur de Bolívar

La presente investigación parte de los postulados de la teoría fundamentada, propia de la investigación cualitativa, cuyas disposiciones están diseñadas para desarrollar un conjunto de conceptos bien integrados que brinden una explicación teórica de los fenómenos sociales en estudio (Corbin & Anselm, 1990). Es decir, la teoría fundamentada constituye una serie de herramientas que permiten la elaboración de conceptos y el análisis teórico, a partir de la recolección de datos y evidencia empírica, que provienen de la realización de entrevistas y observaciones, así como de recopilación de documentos de política pública, normas, prensa, etc. (Corbin & Anselm, 1990). A través de la teoría fundamentada, se busca que las investigaciones expliquen el fenómeno que se pretende estudiar, por medio de la construcción de una teoría, que describa al tiempo las formas en dicho fenómeno surge y opera en contextos específicos. En este caso, la presente investigación adoptó una metodología

cuantitativa en tres etapas, como se puede ver Gráfico N° 1, las cuales responden cada una a una pregunta con respecto al objetivo del estudio:

Gráfica N° 1: Etapas de la metodología



a. Recopilación de información:

Esta fase parte de la pregunta ¿qué es pobreza? y consistió en la recolección de información en campo sobre las condiciones de vida en la zona de reserva, las percepciones de los habitantes frente a esta condición y su trayectoria de vida. En ella se realizaron tres visitas a la ZRC en periodos distintos entre enero y agosto de 2018, a la vez que se hacía una revisión de literatura sobre el concepto de pobreza y de pobreza rural. En estas visitas a campo se realizaron 18 entrevistas semiestructuradas individuales y dos grupales a líderes sociales de la ZRC (ver Tabla 1)⁷, que conocen la situación de su vereda o corregimiento; a funcionarios de las entidades que tienen presencia en esta zona; y expertos de organizaciones locales o nacionales que han trabajado en el área y tienen conocimiento sobre los procesos de la ZRC. Las entrevistas tenían como propósito en reconocer el territorio y la trayectoria de vida de los miembros de la zona de reserva con respecto a las condiciones de las viviendas, de la educación y salud en sus corregimientos/veredas, etc.; los procesos internos alrededor de la construcción de una ZRC y el funcionamiento de la misma de la mano de funcionarios y expertos (ver Anexo 1).

⁷ Por seguridad, los nombres de los entrevistados y demás participantes en la investigación no fueron incluidos. En su lugar, se codificaron las entrevistas y grupos focales de tal manera que el lector pueda identificar la fuente a medida que está citada en el texto.

También se realizaron tres grupos focales con habitantes de tres corregimientos/veredas representativas de la economía de la ZRC: agricultura, ganadería y pesca (ver Tabla 2). Los grupos focales se dividieron en cuatro actividades: i) discusión grupal siguiendo las preguntas guía ¿qué es la pobreza? ¿Qué es calidad de vida? ¿en el corregimiento o vereda tienen una buena calidad de vida?; ii) reflexión personal en la que se le pide a los participantes escribir qué elementos consideran importantes para mejorar la calidad de vida para luego discutirlos; iii) identificación de problemáticas, en la que se construyó un cuadro con las columnas de “solución inmediata, de mediano y largo plazo” donde se identifican los problemas que más inquietan a los habitantes, allí se explica en qué consiste el problema, por qué creen que sucede, si ha cambiado en el tiempo y si todos los habitantes de la vereda/corregimiento lo sufren igual; y iv) discusión sobre el papel de las organizaciones sociales en su municipio, donde se indagó sobre la función de las organizaciones y si creen que pueden mejorar la calidad de vida (ver Anexo 2).

Como ya se mencionó, estas actividades se realizaron en tres visitas al territorio. El primer encuentro consistió en el reconocimiento del campo, a través de entrevistas y la observación, en el cual se hizo una presentación del trabajo con los líderes más importantes de la zona de reserva y con funcionarios de entidades estatales, y se hicieron recorridos por algunas veredas que componen la zona de reserva en los dos municipios. Este primer encuentro permitió identificar las distintas actividades productivas de la región, las organizaciones sociales y políticas y sus líderes, con sus respectivas variaciones al interior de las veredas y corregimientos que componen la ZRC.

En la segunda visita se desarrolló el primer grupo focal y se realizaron más entrevistas con los líderes de asociaciones campesinas dentro de la zona de reserva, identificados en el trabajo previo. Durante esta visita surgió la oportunidad de acompañar a la Agencia de Renovación del Territorio en los talleres de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, propuestos por el Acuerdo de Paz, en dos corregimientos del municipio de Arenal, donde se discutieron las necesidades y potencialidades de la región sobre infraestructura, salud, educación, vivienda, trabajo, activación de la economía y alimentación. Esto permitió establecer contactos con las comunidades, recorrer las veredas y conocer las dinámicas de

los municipios, su relación con la zona de reserva, así como comprender sus percepciones frente a sus condiciones de vida y el papel de la institucionalidad en su transformación.

Finalmente, en la tercera visita se culminaron las entrevistas individuales y los grupos focales en las distintas de veredas de Morales y Arenal, escogidas por su importancia en materia organizativa y diversidad en actividades productivas. En esta última visita se hicieron los recorridos que faltaban por las veredas que componen la zona de reserva de Morales, las cuales estuvieron acompañadas de uno de los líderes con mayor reconocimiento en este municipio, quien permitió las visitas a hogares rurales distantes del casco urbano del municipio.

b. Sistematización de la información:

Una vez realizada la recolección de información en campo, la siguiente etapa fue sistematizar aquellas percepciones de los habitantes de la ZRC en el Sur de Bolívar frente a sus condiciones, respondiendo a la pregunta ¿quién lo está diciendo? O, mejor dicho ¿desde dónde lo está diciendo? En esta etapa se cruzó la información empírica, proveniente de las entrevistas con los datos de los documentos de política pública que permiten caracterizar las condiciones de vida en Morales y Arenal. Esto con el fin de analizar la forma en que la experiencia de vida en esta región afecta las percepciones que tienen los habitantes de los municipios analizados de su condición.

Bajo esta perspectiva, se clasificó la información recopilada en campo en cinco categorías: *i) condiciones de vida*, donde se agruparon las percepciones de los miembros de la zona y los datos recolectados en documentos oficiales en cuanto al tipo y calidad de prestación de bienes y servicios públicos; *ii) características de la vereda/corregimiento*, la cual agrupa las particularidades de cada territorio en cuanto a actividades productivas, organizaciones sociales, tenencia de la tierra, relaciones entre vecinos, etc.; *iii) ZRC* donde se recoge su historia, la importancia para el campesinado y las autoridades locales y las principales problemáticas que ha tenido desde su constitución hasta la actualidad; *iv) nociones de pobreza y calidad de vida*, en la cual se sistematizaron todas aquellas percepciones de los miembros de la zona frente a esta condición y los elementos que necesitan para tener un bienestar en el campo; *v)* y finalmente el **Estado y organización**, donde se agrupa la percepción de los miembros de la zona frente al papel del Estado y las organizaciones

campesinas en la transformación de las condiciones de vida y en la forma en que tramitan sus demandas.

La sistematización de las categorías fue realizada con las entrevistas en campo y con la revisión de documentos. Por un lado, normas que regulan la política de ordenamiento del territorio de las ZRC, documentos de política pública, evaluación y análisis de las mismas, que permitieron identificar la forma en que se ha regulado la figura territorial y los impactos que ha tenido en la región (beneficios y dificultades). Por el otro, se revisaron datos recogidos de entidades estatales sobre las condiciones y calidad de vida en los municipios estudiados, así como datos e información de entidades gubernamentales con respecto a las características propias de sector rural de estos municipios: tenencia de la tierra, actividades productivas, etc. Finalmente, la información fue complementada con literatura sobre la historia y evolución del movimiento campesino en la región.

c. Análisis de resultados:

La última etapa de la metodología de esta investigación consistió en analizar la información recopilada en las fases anteriores a la luz de la literatura sobre el tema. Esta fase se realizó con base en la pregunta, ¿por qué lo dicen?, es decir, ¿por qué los miembros de la ZRC consultados opinan de X o Y manera sobre la pobreza? ¿Por qué para ellos ciertos elementos y no otros son constitutivos de esta condición? Para tal fin, en esta etapa se realizó un proceso de *codificación selectiva*, que consiste en analizar todas las categorías y conceptos propuestos durante la investigación a la luz de una categoría central (Corbin & Anselm, 1990), que en este caso fue la de **pobreza y calidad de vida**.

En este proceso de codificación, se identificaron, primero, las dimensiones que los miembros de la zona de reserva relacionaban con la pobreza: **trabajo, ingresos, alimentación, educación, infraestructura, provisión de servicios públicos y salud** etc. (ver Capítulo IV), según las veces en que fueron nombrados durante las entrevistas y grupos focales. Luego se clasificaron los elementos que la población reconoce como importantes para transformar sus condiciones de vida, así como las problemáticas que son urgentes de abordar en sus veredas y corregimientos con el fin de situar esas dimensiones antes identificadas en el sentir de la población frente a la realización de sus proyectos de vida.

De igual manera, estas percepciones sobre pobreza, calidad de vida y problemáticas de la región se cruzaron con las condiciones de vida de esta población, que establecen los documentos de política pública y los textos académicos, lo que permitió dilucidar las narrativas sobre pobreza y calidad de vida que subyacen a las dimensiones identificadas. Posteriormente, dichas dimensiones fueron jerarquizadas según las veces en que fueron nombradas por los pobladores y fueron analizadas con base en el contexto mismo del municipio o vereda, en su experiencia de vida como campesinos pescadores, agricultores y pequeños ganaderos, y en la literatura sobre las condiciones de la pobreza rural en Colombia y América Latina. Tal codificación permitió establecer las formas en que se manifiesta la pobreza en esta región y los factores que la producen y la reproducen en condiciones económicas y políticas específicas para el campesinado del país.

Tabla 1: Entrevistas individuales

Código	Descripción del entrevistado	Lugar donde de la entrevista
E1-Lider Asopasar	Lideresa de la Asociación de Pescadores Artesanales de San Rafael –Asopasar-	Corregimiento de San Rafael, municipio de Arenal
E2-Presidenta JAC Paredes de Ororia	Presidenta Junta de Acción Comunal del corregimiento De Paredes De Ororia (Morales)	Corregimiento Paredes de Ororia, municipio de Morales
E3-Presidenta JAC Buenavista	Presidenta Junta de Acción Comunal del corregimiento de Buenavista, Arenal	Cabecera municipal Arenal (entrevista grupal)
E4-Presidente Asojuntas	Presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de Arenal (34 juntas)- Asojuntas-	Cabecera municipal Arenal (entrevista grupal)

E5-Presidente JAC Arenal	Presidente de la Junta de Acción Comunal del casco urbano de municipio de Arenal	Cabecera municipal de Arenal (entrevista grupal)
E6-Líder Comuarenal	Representante legal Cooperativa Multiactiva de Arenal –Comuarenal-	Bogotá (entrevista grupal)
E7-Miembro Comuarenal	Miembro Cooperativa Multiactiva de Arenal Comuarenal	Bogotá (entrevista grupal)
E8-Líder Asohonda	Representante legal Asociación de Usuarios del Acueducto de la Vereda Quebrada Honda – Asohonda-	Vereda La Arcadia, municipio de Morales
E9-Presidente JAC Mulitas	Presidente Junta de Acción Comunal de la vereda Mulitas	Vereda Mulitas, municipio de Morales
E10-Presidente JAC Punta De La Cruz	Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Punta de la Cruz	Vereda Punta de la Cruz, municipio de Morales
E11-Vicepresidente Azocamsur	Vicepresidente Asociación de la Zona de Reserva Campesina de Morales y Arenal Sur de Bolívar-Azocamsur	Cabecera municipal de Arenal
E12-Funcionaria ANT	Enlace de la Agencia Nacional de Tierras en la ZRC	Cabecera municipal de Arenal
E13-Funcionario Alcaldía	Secretario de Agricultura, Medio Ambiente y	Cabecera municipal de Morales

	Desarrollo Rural de la Alcaldía de Morales	
E14-Funcionario Incoder	Exfuncionario del Incoder en la década de los 90 y consultor de la FAO para la evaluación a la política de ZRC	Bogotá
E15-Miembro PDPMM	Coordinador para la ZRC del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio	Municipio de Arenal
E16-Miembro FAO	Investigador Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en las ZRC	Bogotá
E17-Miembro FAO	Investigador Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en las ZRC	Bogotá

Significado del código: E (entrevista)

Tabla 2: Grupos focales

Código	Participantes	Características	Lugar
GF1-San Rafael	Al grupo focal asistieron hombres y mujeres líderes de organizaciones representativas del corregimiento, como Juntas de Acción Comunal y organizaciones	La principal actividad económica de este corregimiento es la pesca, que se realiza o bien en la ciénaga de Morrocoy o en los estanques comunitarios para la producción piscícola perteneciente a la Asociación	Corregimiento San Rafael, municipio de Arenal

	productivas, que viven en el corregimiento	de Pescadores Artesanales de San Rafael	
GF2-La Arcadia	Hombres y mujeres miembros de la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de de la Honda –Asohonda-, una de las dos organizaciones que han liderado el proceso de ZRC	La principal actividad productiva de esta vereda es la agricultura, principalmente, el cultivo de arroz. La vereda tiene un distrito de riego y un molino comunitario para este producto y la organización. La experiencia de esta actividad productiva es una de las más representativas de la zona.	Vereda La Arcadia, municipio de Morales
GF3-Villa Noris	Habitantes de la vereda y miembros de organizaciones como juntas de acción comunal y organizaciones productivas	Los miembros de esta vereda son todos familiares, que la fundaron luego de ser reubicados por desplazamiento, y su principal actividad económica es la pequeña ganadería.	Vereda Villa Noris, municipio de Morales

Significado del código: Grupo Focal (GF)

2.3 Consideraciones éticas, limitaciones de la investigación y reflexiones:

Durante el trabajo de campo, todos los participantes de la investigación fueron informados del trabajo que se haría con ellos y ellas y se aclararon las dudas pertinentes en los siguientes aspectos:

- Se aclaró a los participantes que su participación en las entrevistas y grupos focales eran voluntarias y se podían retirar en el momento que lo consideraran.
- Todos los participantes fueron informados sobre la protección de sus identidades, por lo que se les explicó que sus nombres serían anonimizados a través de códigos.

- Antes de iniciar cualquier actividad relacionada con la investigación, se les informó a los participantes sobre el tipo de ejercicio que realizarían y el tiempo que tardaría.
- Se les dio a los participantes el contacto de la investigadora para resolver dudas e inquietudes con respecto al desarrollo del proyecto y después de él.
- Se acordó que los resultados serán entregados una vez la investigación concluya

Frente a los límites de la investigación, es necesario reconocer que este estudio estuvo focalizado en una población específica, cuya muestra no puede ser representativa para todos los contextos y escenarios posibles del campo colombiano y las poblaciones que viven en él (Weber, 2005). Precisamente por estos atributos, pierde la capacidad de hacer comparaciones entre comunidades tanto en el ámbito temporal como espacial, debido al carácter particular al lugar en donde se aplican (Peralta et al, 2006). Esta focalización del estudio, también limita la posibilidad de hacer conclusiones generales sobre la pobreza rural en Colombia, en la medida que los contextos, percepciones y experiencias sobre esta condición pueden variar con respecto a cada región y grupo social. Sin que esto signifique que la definición de pobreza que aquí se construye no pueda servir como una base para analizar la pobreza en contextos similares.

Esta investigación tampoco desagrega las particularidades y experiencias diferenciadas de la pobreza de los distintos sectores que componen la ZRC, por ejemplo, mujeres, jóvenes y adultos mayores, por lo que tampoco se desarrollaron las nociones diferenciadas de la pobreza en esta región. Finalmente, esta investigación tampoco contó con mediciones y cálculos referentes a la calidad de vida de los municipios donde se realizó el ejercicio, es decir, no estableció indicadores para medir la pobreza en la región y no se realizaron comparaciones con los indicadores colombianos para medir la pobreza.

Ahora bien, más allá de estas limitaciones meramente académicas, la investigación en sí misma es un ejercicio de reflexividad frente a la posición social y política en la que el investigador se encuentra y las realidades a las que se enfrenta, lo que constituye, finalmente, otra limitante de la investigación social. Por eso, en este apartado me refiero en primera persona con el fin de hacer una reflexión propia sobre lo que constituyó investigar esta condición en la zona de reserva.

En mi caso, realizar el trabajo de campo, explorar las realidades de quienes habitan estas regiones del país y hacer las entrevistas y grupos focales fue, en muchos casos, un encuentro mediado por las asimetrías sociales (Bourdieu, 1999) que se chocan al indagar por las condiciones de vida de hombres y mujeres en una región apartada de Colombia, siendo yo una estudiante de una universidad privada en Bogotá. Más que un escenario de conflicto, este encuentro nos permite ser conscientes del lugar que ocupamos en el espacio social y del papel político que ocupa la investigación misma, como un escenario de construcción crítica del conocimiento que, si bien no transforma realidades inmediatas, contribuye a problematizar todo aquello que entendemos por natural en la vida social.

En cuanto a la práctica misma de la investigación, en un principio, los encuentros fueron distantes tanto en la presentación del estudio como en los primeros recorridos por el territorio. Los miembros de la zona me llamaban ‘doctora’ y estaban escépticos frente a la investigación, pues pensaron que era una funcionaria de alguna entidad del estado y, por eso, eran renuentes a darme entrevistas. De hecho, unos líderes que me presentaron al resto de la comunidad me sugirieron darles onces a los participantes en los grupos focales por asistir a la actividad, porque de lo contrario no irían, como una retribución por su colaboración en la investigación.

Si bien con el paso del tiempo y a medida que me conocían, el trato se tornó más amigable y los miembros de la zona se mostraron dispuestos a ayudarme en todo momento, es importante pensar en por qué las personas piden una retribución para colaborar en los proyectos de investigación. En el contexto rural, ocupar a los líderes que nos acompañan durante la investigación y las personas que ellos convocan para participar en talleres o en entrevistas, implica perder horas de trabajo e incurrir en gastos, por ejemplo, en los casos donde la persona se tengan que movilizar. En este sentido, la investigación constituye un punto de quiebre en la cotidianidad de las personas.

También, la investigación puede significar un factor de riesgo para los y las líderes, quienes nos muestran el territorio y nos introducen a la población. Son ellos y ellas las que nos dedican días a nosotros los investigadores, nos llevan a recorrer el territorio y quedan como representantes ante la comunidad de nuestro trabajo. Al ser nuestra puerta de entrada a la comunidad, nuestra responsabilidad con ellos es mucho mayor, tanto en el reconocimiento

que les debemos hacer como en la claridad frente a los límites que tenemos como investigadores sociales para incidir en las realidades de las comunidades.

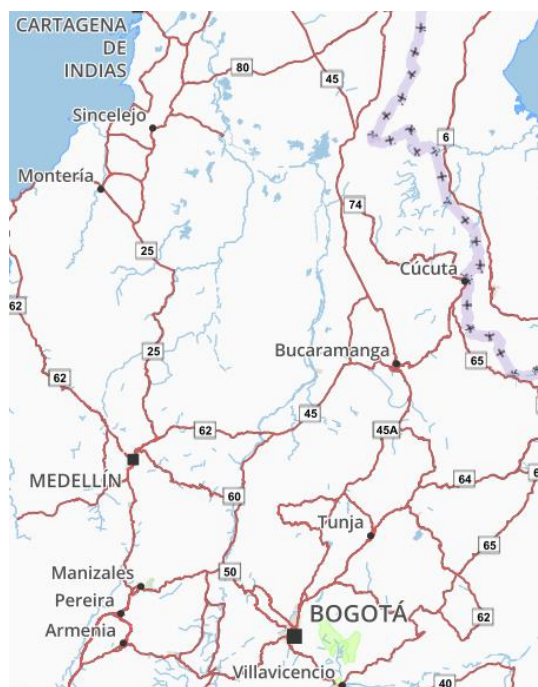
Por eso, considero que este tipo de investigaciones deben realizarse con la responsabilidad que implica, lo que incluye contar con la suficiente financiación para reconocerles económicamente el trabajo que hacen, especialmente los y las líderes, quienes son parte fundamental de la investigación. También es necesario ser claros con la población sobre lo que se va a hacer durante el trabajo y lo que nosotros, como estudiantes o profesionales podemos hacer. De igual manera, es necesario incluir dentro del proyecto mismo de la investigación los resultados que serán entregados a la población que participó en el trabajo. No tanto como el documento final, que muchas veces puede ser inocuo, sino un producto que les sea significativo a las personas en su vida diaria.

Así, realizar una investigación en ciencias sociales es, ante todo, comprender la posición que uno ocupa, la relación particular que se establece con los investigados y el papel que juega la investigación como punto de encuentro entre dos realidades. Esto implica un ejercicio de reconocimiento por parte de nosotros los investigadores del papel activo que ocupan las comunidades y sus líderes en la investigación misma y por ende de la responsabilidad que tenemos frente a ellos.

Capítulo III: Campesinos(as) de tierra y agua en Morales y Arenal

Este capítulo pretende hacer un diagnóstico de las condiciones de vida del campesinado de la zona de reserva, con el fin de dar cuenta del contexto social, geográfico y productivo en el que se enmarcan sus nociones y significados de la pobreza. Aquí se narra, primero, la historia misma de la ZRC, su constitución, la organización social y política al interior de ella y su funcionamiento actual, y luego, las condiciones de vida de estos campesinos y campesinas en cuanto al acceso a bienes productivos y servicios básicos. Todos elementos que determinan y definen el tipo de necesidades de dicha población y sus percepciones sobre ellas.

Como se puede ver en los siguientes mapas⁸, para llegar a la ZRC de Morales y Arenal, desde Bogotá, hay que llegar primero a Bucaramanga o Barrancabermeja en Santander. Luego hay que tomar un bus hasta Aguachica, Cesar, y luego una camioneta que se dirija a uno de los dos municipios. Para llegar a Morales la camioneta debe tomar un ferry para cruzar el río Magdalena, que separa los departamentos de Cesar y Bolívar en el Magdalena Medio, mientras que para llegar a Arenal la camioneta debe tomar este mismo ferry y antes de llegar a la cabecera de Morales, gira por una vertiente de la vía y toma más adelante otro ferry que atraviesa un brazo del Magdalena. El camino desde el departamento de Cesar es una sola trocha, por lo que es casi imposible llegar a estos municipios cuando llueve y en época de sequía es solo polvo.



⁸ Ubicación de los municipios de Morales y Arenal en el departamento de Bolívar, Magdalena Medio. Las líneas rojas corresponden a las vías existentes en el país. El primer mapa muestra el panorama de las vías en Colombia desde Bogotá a la costa caribe; el segundo se acerca a Santander, por donde empieza el Magdalena Medio; el tercero corresponde a la ubicación de los municipios propiamente (Fuente: ViaMichelin)



Una vez en alguno de estos dos municipios, es necesario preguntar por las veredas que componen la zona de reserva para dirigirse a ella, porque no hay ninguna señalización que muestre su existencia en los municipios. De hecho, la única forma de conocer sobre ella es a través de sus líderes o de las autoridades locales. La zona de reserva es una línea imaginaria que atraviesa una parte de estos dos municipios y constituye un territorio campesino que, a pesar de que es importante para la inversión en los municipios, no se han visto materializados algunos de los cambios que se supone debía traer, según comentan algunos de sus miembros.

“Nosotros como comunidad somos pocos los beneficios que hemos tenido. Aquí los únicos beneficios que hemos tenido por la zona de reserva son unos títulos a unas cuantas personas que creo que no son más de cinco títulos, de resto no hemos tenido ninguna ayuda digamos por la zona de reserva, no” (E10- Presidente JAC Punta de la Cruz).

La ZRC-MA es un espacio geográfico que fue delimitado por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria –INCORA- en 1999, a través de la Resolución No. 054. En Arenal, dicha zona comprende la cabecera urbana del municipio, sus tres principales centros poblados y seis veredas, y en Morales se encuentra en dos centros poblados y 12 veredas más (ver Tabla 3). A Morales y Arenal los separa un brazo del río Magdalena, pero las veredas y corregimientos de la ZRC quedan todas hacia una sola orilla del río, en la parte baja de los

municipios, por lo que se puede transitar entre ellas en moto, dependiendo las condiciones de los caminos, o en *jhonson*, como llaman a las lanchas.

La zona de reserva tiene una extensión total de 29.100 hectáreas que fueron sustraídas de la zona de reserva forestal de la Serranía de San Lucas para prevenir la expansión de la frontera agrícola. No obstante, esta extensión no coincide con la cartografía real del municipio, pues “cuando uno va a campo a buscar esos sitios [puntos que ubican la ZRC], y nos pasó a nosotros con la constitución del plan de desarrollo sostenible de la zona, no encontramos esos puntos establecidos” (E6-Líder Comuarenal). Es decir, todavía hay errores en su delimitación.

Tabla 3: Veredas que conforman la ZRC-MA

Municipios	Área	CAB/MPAL	Corregimientos	Veredas
Morales	16.901		Boca de la Honda Paredes de Ororia	La Arcadia Simoita, Simoa Moralito, Canelo Carrizal Villa Noris La Aurora, Mulitas Quebrada de Ororia, Betania
Arenal	12.209	Arenal	Buena Vista Carnizala San Rafael	Bonita Sabana Baja Sereno, Tigrera Quebrada Vieja Peñones Tequendama

Fuente: INCODER (2012) Manual Operativo Zonal. Zona de Reserva Campesina Morales y Arenal

La ZRC está rodeada por ecosistemas que hacen de la región una especial zona de conservación y protección. Las veredas y corregimientos de Morales y Arenal que hacen parte de la zona de reserva limitan con la Serranía de San Lucas; una formación montañosa que hace parte de la cordillera de los Andes y está ubicada en la cuenca media y baja del río Magdalena. Este ecosistema de la región es de tal importancia, que las formaciones boscosas y humedales de la Serranía fueron declarados como áreas protegidas “con especial énfasis en la declaratoria de un nuevo Parque Nacional Natural” (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural [INCODER] & Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio [PDPMM], 2012, p. 35)

Además de la riqueza natural, esta Serranía es el principal motor de la vida en la ZRC. Los afluentes principales de dicha montaña desembocan o bien sea en el río Simití y en sus sistemas de ciénagas o en un brazo del río Magdalena, llamado brazo de Morales, en el que se encuentra la zona de reserva. Esta red hídrica conforma las 27 microcuencas con las que cuenta la ZRC, entre quebradas, caños y ciénagas, de las que se alimentan y producen las miles de personas de la zona de reserva. Así, la ZRC constituye un área entre la parte alta y montañosa de la Serranía de San Lucas y la vertiente del río Magdalena, o brazo de Morales, que sirve como zona de amortiguación para evitar la expansión de la frontera agrícola. Es decir, la zona de reserva se encuentra en “el límite del suelo rural que separa las áreas donde las actividades agropecuarias están permitidas, de las áreas protegidas, las de especial importancia ecológica, y las demás áreas en las que las actividades agropecuarias están excluidas por mandato de la ley o el reglamento” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo [MADR] Rural & Unidad de Planificación Rural Agropecuaria [UPRA], 2018, p. 27).

La zona de amortiguación en la que se encuentra la ZRC le permite a los campesinos y campesinas mezclar sus actividades productivas entre las subidas del río, que inundan la tierra y permite la pesca de diversas especies, y las sequías del mismo que desembaraza la tierra para cultivar y trabajar. De este sistema ecológico derivan sus tres principales actividades productivas⁹: la pesca, la agricultura y la ganadería, que más que ejercerse de forma separada, las familias de la zona de reserva las combinan en función de las condiciones climáticas.

“Pues es que yo vi las tres como para grupos poblacionales distintos o para miembros distritos de las familias también lo vi. Entonces alguien de la familia va y pesca cuando hay temporada de subida en la Ciénega, y de hecho cuando fuimos pues estaba así todo el mundo pescando y diciendo que esta Ciénega es una maravilla, mire cuánto me ha dado, mire no sé qué, el pescado baratísimo además. Pero hay otras temporadas en las que predomina el ejercicio de las otras actividades. Entonces vimos ganadería hacia la zona sobre todo que no estaba cubierta por el distrito de riego y ya más abajo hacia en la parte de La

⁹ Las actividades productivas de la ZRC se dividen entre ganadería, agricultura, pesca y comercio, con 48%, 14, 18 y 8% respectivamente (Incoder & PDPMM, 2012).

Honda y todo esto es predominio de la agricultura, siendo principalmente arroz lo que se siembra.” (E16-Miembro FAO).

En total son aproximadamente 10.000 personas que viven dentro de la zona de reserva, de las cuales el 72% habita en la cabecera municipal de Arenal y el 28% restante en el área rural de Morales y de Arenal, según las estimaciones que hizo el Incoder y la PDPMM (2012) durante la actualización del Plan de Desarrollo Sostenible. Todas estas personas dependen económicamente de una región con un importante interés ecológico y medioambiental, pero cuyas condiciones de vida han estado marcadas por una larga historia de exclusión y marginalización que caracterizan a esta zona de reserva.

3.1 La zona de reserva: historia y lucha

La historia de esta región del país ha estado marcada por un alto nivel de violencia durante el conflicto armado, la proliferación de cultivos de uso ilícito, una inequitativa concentración de la propiedad rural, recurrente minería ilegal, inadecuado acceso a servicios sociales y paulatino deterioro del medio ambiente (Molina López, 2011). En este contexto, la ZRC-MA emerge como una posibilidad de los campesinos de reorganizar su territorio e impulsar una economía sostenible que mejore la calidad de vida del campesinado y promueva la seguridad alimentaria. *“La función de una ZRC debe ser auto sostenible para la gente que vive en la ZRC. Una zona productiva, autosuficiente.” (E11-Vicepresidente Azocamsur).*

La ZRC fue creada por la Ley 160 de 1994 para ordenar la tenencia de la tierra, evitar la concentración de la misma, estabilizar la economía campesina, prevenir la expansión de la frontera agrícola y conservar el medio ambiente (Decreto 1777 de 1996; Acuerdo 024 de 1996). Para que esto se cumpla, las comunidades y las entidades estatales a nivel nacional y local llegan a unos acuerdos sobre el manejo del territorio, que se plasman tanto en las resoluciones de constitución de las zonas de reserva como en los Planes de Desarrollo Sostenible (PDS). En términos generales, las comunidades se comprometen a entablar actividades productivas lícitas que sean acordes con las necesidades ecológicas de su territorio y protejan el medio ambiente, mientras que el Estado y sus instituciones deben emprender acciones dirigidas a legalizar la propiedad rural y titular tierra, crear condiciones preferenciales para otorgar subsidios, incentivos y estímulos, como créditos y adecuación de tierras, promover un acceso ágil y eficaz a los servicios públicos rurales y financiar los PDS

(Sentencia T-713 de 2017; Sentencia C-371 de 2014; Decreto 1777 de 1996; Acuerdo 024 de 1996).

Sin embargo, la labor de mantener viva esta figura ha sido una tarea que únicamente han impulsado las organizaciones campesinas al interior de cada una de estas zonas, pues las entidades del Estado poco han invertido en los territorios (Contraloría General de la República, 2015a): “fuera del reconocimiento dado en la Ley 160 y la competencia del Incoder [ahora Agencia Nacional de Tierras], el Estado colombiano no ha realizado los desarrollos correspondientes para garantizar la viabilidad de las ZRC” (Estrada, 2013). Al punto que no hay indicadores que demuestren la mejoría en la calidad de vida, tanto en provisión de servicios públicos, como en el mejoramiento de los ingresos de los campesinos (Contraloría General de la República, 2015a). Por ello, la transformación de la calidad de vida del campesinado que pretendía la figura no ha sido la esperada en estos territorios, entre ellos, Morales y Arenal.

En estos municipios, el papel de ZRC no ha sido otro que el de implementar proyectos productivos que sirvan como medio para impulsar y garantizar la sostenibilidad de la economía campesina. Iniciativas aisladas y discontinuas, lideradas principalmente por las organizaciones campesinas que no han logrado echar raíces. El apoyo de las instituciones del Estado en esta zona ha sido escaso y no ha representado mayor cambio en las condiciones de vida del campesinado, aunque las diversas organizaciones constituidas con el paso de los años hayan servido como medio para generar la articulación entre la población y demás entes gubernamentales en pro de visibilizar la situación de la región (INCODER & PDPMM, 2012).

A raíz de la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia, se abrió una posibilidad de fortalecer las ZRC en el país, pues la legislación de la Reforma Rural Integral, pactada en La Habana y consolidada en el Plan Marco de Implementación, priorizan a dichas zonas como uno de los territorios para intervenir en el posconflicto. De hecho, desde que se creó la Agencia Nacional de Tierras, en 2015, se designó un personal específico para atender las zonas de reserva en el país y en 2018 se constituyó una nueva zona de reserva (Resolución 057 de 2018). En Morales y Arenal dicho fortalecimiento empezó con la creación de una nueva organización que agrupa a todas las existentes y un plan de reactivación de la zona de

la reserva, que actualmente constituye el marco de referencia para los proyectos que están empezando a construir:

“En el Sur de Bolívar encontramos como experiencias significativas (...) la consolidación de ASOCAMZUR como una organización representativa de la zona que le apunta muchísimo a zanjar ese conflicto que había antes entre un lado y el otro. Otra experiencia significativa que encontramos fue el que ya se comienza a reconocer por parte de la institucional al Plan de Desarrollo como el de la zona de la reserva como algo importante que abarca a los dos municipios” (E16-Miembro FAO).

Así, la historia de la ZRC-MA puede sintetizarse en dos momentos. Por un lado, la historia de constitución de dicha figura en los municipios de Morales y Arenal, como producto de las manifestaciones campesinas durante la década de los 90, que dan cuenta de la exclusión social en la que se encontraba este territorio y marca el inicio de un proceso de consolidación de un territorio para los campesinos. Por otro lado, las condiciones actuales de esta figura en cuanto a la organización social y política, que da cuenta de sus procesos y su relación con las autoridades locales.

3.1.1 Movimiento campesino en la constitución de la ZRC-MA

La historia de creación de la ZRC-MA no fue un proceso sencillo. Si bien el Banco Mundial apoyó la constitución de las primeras ZRC en el país, por medio de un préstamo para poner en marcha la figura (MADR, 2003), estas han sido consideradas como el resultado de los procesos organizativos de las comunidades campesinas para reclamar sus derechos (Estrada, 2013; Ortíz Guerrero, 2004; Osejo Varona, 2013). De hecho, son el resultado de las protestas campesinas que exigían al gobierno condiciones dignas de vida en un territorio meramente campesino, en el que exigían acceso a tierra, servicios públicos y vías de acceso (Fajardo, 2000). En este caso, Morales y Arenal no fueron la excepción.

“El proceso de constitución de ZRC nace de la necesidad de los campesinos del sur de bolívar, de las asociaciones y de todos esos campesinos cocaleros que en ese entonces era que se dedicaban a esa actividad, y tomaron la decisión de salir a las calles. Creo que fue Cartagena, San Pablo, a exigir al gobierno, bueno que una forma de reivindicar los derechos de los campesinos y también la necesidad

para proteger el territorio. Entonces en esas negociaciones que se dieron en el 85, 95, 98, esas marchas es que nace la idea de la creación de la zona de reserva campesina” (E6-Líder Comuarenal).

Si bien desde la década de los 80, las organizaciones campesinas se han movilizad para ejercer presión al gobierno en esta región, este solo se consolidó en la década de los 90 con la constitución de la zona de reserva. El movimiento campesino de esta región tuvo que establecer un proceso de negociación con el gobierno que duró un poco más de tres años (Fonseca et al, 2005) e inició con movilizaciones recurrentes por parte de la población campesina para ejercer presión al gobierno (Rincón García, 2001). En 1996 las diversas organizaciones campesinas del Sur de Bolívar y Antioquia protestaron por la falta de prestación de servicios de salud, educación, vivienda, comercialización de productos e infraestructura vial, además del recrudecimiento del conflicto armado en la región por las violaciones de derechos humanos y los ataques paramilitares. En vista de la intensidad de estas movilizaciones y en aras de llegar a un acuerdo con las comunidades campesinas de la zona, el INCORA ordenó mediante resolución No. 083 de 1996, la preparación de una propuesta de selección y delimitación de la ZRC, como un proyecto piloto en el Sur de Bolívar (INCODER, 2012).

Para ese momento, el movimiento campesino llevó una agenda en temas relacionados con conflicto armado, elementos de política macroeconómica e inversión extranjera, así como de inversión y políticas gubernamentales en esta región (Rincón García, 2001). Se formaron entonces tres mesas de diálogo en torno a los ejes de salud, educación y derechos humanos, infraestructura y saneamiento básico, producción agrícola, pesquera, minera y medio ambiente, con un compromiso adicional de atender la crisis humanitaria causada por la violencia (INCODER, 2012). Esto llevó a las organizaciones de la mesa regional a plantear un desarrollo integral que buscaba defender la vida y establecer condiciones de vida dignas para el campesinado en esta región (INCODER, 2012).

“Hay que reconocer que una de las formas del campesino llegar a que el gobierno lo escuchara, eran las marchas campesinas. Aquí se dio en el Sur de Bolívar la marcha campesina de 1989, que fue la marcha de Pinillo, Bolívar, que hasta ahí llegó, ahí se concentró. Allí se pedían muchas redenciones, muchas

inversiones por parte del gobierno nacional, que nunca se cumplieron” (E11-Vicepresidente Azocamsur).

No obstante, el gobierno no cumplió con los acuerdos establecidos y en vista de su falta de compromiso, las organizaciones campesinas volvieron a movilizarse en 1997 y 1998. Esta vez, dichas organizaciones le añadieron a su lista inicial de reclamos la política de explotación minera y la inserción de las multinacionales en su territorio, así como las masacres paramilitares que incrementaron en esos años, exigiendo respuestas de la política de Estado contra el paramilitarismo (Rincón García, 2001). El éxodo campesino de esos años, compuesto inicialmente por pobladores del Sur de Bolívar, convocó a miles de familias desplazadas del Magdalena Medio, integrando 17 municipios de la región: “la movilización se tomó Barrancabermeja, Santander, e involucró en su dinámica a organizaciones sociales de carácter urbano, entre las que se encontraban sindicatos de industria y organizaciones no gubernamentales” (Rincón García, 2001, p. 96). Tal fue la magnitud de estas protestas, donde se alcanzaron a paralizar y bloquear vías estratégicas para la comercialización y se realizaron tomas a centros públicos y privados, que el movimiento campesino logró que el gobierno, en cabeza del INCODER, finalmente constituyera en 1999 la ZRC de Morales y Arenal.

“El proceso de constitución de la zona de reserva pues en las luchas campesinas, pues se logró conseguir que se implementara la figura y luego la reglamentación y todo el cuento. Pero todo ha sido una lucha campesina, de los campesinos y para los campesinos, una zona especial y diferente a muchas zonas del país (...) Entonces ha sido una lucha dura, difícil, pero no imposible, pues porque voluntad política no ha habido ninguna” (E8-Líder Asohonda).

La constitución de la ZRC también contó con la participación de las administraciones locales, quienes impulsaron su constitución a nivel institucional y fueron activas en el proceso. “La receptividad que hubo en ese momento por parte de las administraciones municipales del momento fue muy determinante para hacer la delimitación de ese territorio (E15-Miembro PDPM)”. Y tuvo especial importancia porque en la época en que se presentaban las marchas a favor de la zona, Arenal era corregimiento de Morales, pertenecía a su jurisdicción y estaba en proceso de constituirse como municipio independiente. Por eso, cuando se aprueba la constitución de la zona en 1999, la figura ya contaba con un respaldo sólido de

dos administraciones locales. “Teniendo en cuenta el grado de compromiso asumido por las administraciones municipales, la participación comunitaria y las circunstancias especiales de los dos municipios, fue así como se dispuso un área aproximada de 29.110 hectáreas, excluidas de la Zona de Reserva Forestal” (Alcaldía de Arenal, 2008, p. 22).

3.1.2 Procesos organizativos al interior de la ZRC-MA

Luego de haber constituido legalmente la figura en estos municipios, la organización y el funcionamiento de la misma se fueron desarrollando sobre la marcha. En un principio, el proceso estuvo liderado por Asoreserva (Asociación de Pequeños Productores de la ZRC de Morales y Arenal) quien estuvo al frente de la zona desde su constitución hasta aproximadamente 2002, cuando fue relevada por otras organizaciones campesinas. La organización fue constituida precisamente con el fin de impulsar la zona de reserva. *“Las organizaciones sociales aquí eran las Juntas de Acciones Comunales que tienen 70 años de existencia. Cuando ya viene ASORESERVA es cuando aparecen las organizaciones. La única organización que había bien, legalmente constituida era ASORESERVA, que se creó precisamente para el manejo de ZRC”* (E11-Vicepresidente Azocamsur).

El trabajo de esta organización y el proceso mismo de constitución y funcionamiento de la zona de reserva contaron con el apoyo del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio –PDPMM–. Una organización que nació en el año 1995 a partir de la alianza entre la Diócesis de Barrancabermeja, La Unión Sindical Obrera -USO y ECOPETROL con el fin de buscar una salida a la situación de violencia y pobreza de la región. El PDPMM es un referente en la región del Magdalena Medio en temas de desarrollo y paz, sobre el cual se han creado nuevos programas en otras regiones del país con condiciones similares y que en la actualidad se encuentran articulados a la Red Prodepaz como instancia nacional que los congrega (DNP & Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 2007).

Durante los primeros tres primeros años de creación de la zona, Asoreserva recibió el primer impulso económico por parte de la Unión Europea (67.8 millones de euros) para crear los Espacios Humanitarios en el marco de los Laboratorios de Paz I y II y la escuela de liderazgo, dirigidos por el PDPMM, que funcionaron hasta aproximadamente 2010 (DNP, & Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 2007). Dichos espacios

consistieron en brindar un estímulo a la participación comunitaria en el manejo de asuntos de carácter público y construir zonas de convivencia pacífica entre los habitantes mediante el fortalecimiento institucional. De igual manera, el trabajo del PDPMM en la ZRC-MA consistió en impulsar el desarrollo económico y social, a través de la promoción y creación de proyectos productivos en la zona (DNP & Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, 2007). Con esa intervención del PDPMM, Asoreserva logró avanzar en algunos aspectos que interesaban a la población:

“Primero pedimos unos espacios en donde se hiciera la labor pedagógica de ayudar a entender hacia la institucionalidad, también comprender y concertar con los campesinos sobre la importancia de la ZRC. Ahí entonces se establecieron unas comisiones y se participa también en la formulación del PDS, que inicia como requerimiento para constituir la ZRC. (...) con recursos del laboratorio de paz, hizo unas buenas intervenciones en el territorio” (E15-MiembroPDPMM).

“Se hicieron muchos talleres, mucha pedagogía de la comunidad. Se hicieron algunos proyectos, y esos proyectos eran de impacto social, pero eran proyectos agropecuarios. El PDPMM comenzó a invertir acá en esos proyectos donde la inversión, la capacitación... trajeron molinos” (E11-Vicepresidente Asocamzur).

La implementación de dichos laboratorios constituyó un hito importante para los habitantes de esta región, pues marcaron el inicio de actividades de la zona de reserva y permitieron la capacitación de decenas de campesinos en el trámite institucional de sus demandas, derechos humanos y acción colectiva. No obstante, los resultados de la zona de reserva en estos primeros años en cuanto al resto de necesidades del campesinado, como el acceso y regulación de la tierra, la provisión de servicios públicos y la estabilización económica, fueron magros. El Incoder no realizó la titulación de tierras dentro de las 29.100 hectáreas, que era uno de los compromisos del Estado con el campesinado (INCODER, 2012), y las inversiones en proyectos productivos tampoco duraron, pues *“uno de los grandes problemas que hay en esta región es que las inversiones que se hicieron, no se le hicieron seguimiento y acompañamiento”* (E11-Vicepresidente Azocamsur).

De hecho, a nivel nacional no se contemplaron instrumentos para poner en marcha los procesos de las zonas de reserva. Si bien los dos Planes Nacionales de Desarrollo que se promulgaron entre 1999 y 2002 mencionan la importancia de las ZRC para el desarrollo del sector agropecuario y la conservación del medio ambiente, ninguno establece metas ni acciones concretas para desarrollar en estas áreas (Contraloría General de la República, 2015a). *“Valga decir que la ZRC para ese tiempo no era parte de la agenda nacional, no era parte de la agenda del gobierno”* (E15-Miembro PDPMM), por lo que el margen de acción de Asoreserva estuvo atado a la labor del PDPMM y los pocos proyectos en materia política y productiva que se pudieran implementar.

Aproximadamente en 2002, Asoreserva se disolvió por falta de recursos y el proceso quedó fraccionado entre Juntas de Acción Comunal de las veredas de la zona y las distintas organizaciones sociales. De acuerdo con el INCODER (2012), hacia 2012 existían más de 30 organizaciones con personería jurídica en la ZRC-MA, y para el 2017 la Agencia Nacional de Tierras reporta que *“existen 57 organizaciones al interior de la zona, entre juntas de acción comunal, organizaciones sociales, productivas, culturales, educativas, juveniles y de víctimas”* (E12-Funcionaria ANT).

El abanico de trabajo al que se dedican las organizaciones es bastante amplio. Unas se dedican a potenciar un sector productivo de la economía campesina como pesca, agricultura, ganadería; a potenciar las pequeñas economías como la venta de dulces típicos, y la prestación de servicios como el transporte interveredal y fluvial. Otras se dedican a las actividades culturales y de comunicación, como la radio comunitaria, y algunas otras abogan por seguir cultivando y promoviendo la importancia de las costumbres, de los juegos, los bailes típicos, las comidas, los cantos y la cultura de la región. Recientemente, se han desarrollado iniciativas de gran capacidad organizativa como el consejo de negritudes constituido en el año 2011, para reconstruir la cultura afrodescendiente en la región.

De estas organizaciones, dos se destacan por su liderazgo en la zona, luego de que Asoreserva dejara de existir: la Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de la Honda (Asohonda) en el municipio de Morales y la Cooperativa Multiactiva de Arenal (Comuarenal) en el municipio de Arenal. Ambas han sido determinantes para difundir la importancia de la zona de reserva en las comunidades alejadas y en la construcción de propuestas económicas que

beneficien a sus pobladores (INCODER & PDPMM, 2012). Durante más de 10 años, su labor ha permitido la supervivencia de la zona de reserva en Morales y Arenal, respectivamente, pues son quienes han liderado el proceso y han alzado sus banderas.

El trabajo de dichas organizaciones ha estado enfocado en recaudar recursos autónomamente, a través de distintos fondos de entidades estatales como la Cámara de Comercio o a través de cooperación internacional, para implementar proyectos productivos que posibiliten el trabajo agropecuario y piscícola de los miembros de la ZRC. *“Desde ese entonces se ha venido interlocutando en la región, con algunas organizaciones locales como también nacional e internacional, como en el caso de la FAO, Naciones Unidas, Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, han hecho inversiones”* (E11-Vicepresidente Azocamsur).

Asohonda es una organización de pequeños productores de arroz que también ha desarrollado iniciativas de carácter social, pero que gran parte de su actividad está enfocada al sector productivo (INCODER & PDPMM, 2012). Dicha organización se ha convertido en el eje articulador del ala sur de la zona de reserva y su trabajo comunitario ha permitido el acercamiento de otros líderes de la zona, quienes se han vinculado al proceso que esta organización lidera para beneficiar a sus comunidades en el área productiva. Asohonda fue especialmente determinante para llevar el distrito de riego para los cultivos de arroz en el corregimiento de Boca de La Honda, apoyado por el PDPMM y del cual se benefician varias veredas de la zona. También facilitó la instalación de un molino de arroz para transformar la materia prima en la vereda La Arcadia, el cual no ha podido funcionar por falta de recursos propios para terminar la obra.

“Asohonda es una de las organizaciones que más ha tenido reconocimiento a nivel de todo, por la gestión de los proyectos, la construcción del distrito de riego. La asociación de nosotros fue una que, después de que estuvo Asoreserva, fue quien quedó, se empoderó del proceso de la ZRC. Nos presentamos como Asohonda con convocatorias, y le trabajamos (...) Por lo menos aquí en tiempo de política, aquí hemos reunido a los candidatos a la Alcaldía, son 3, 4, y los traemos todos, los invitamos, les hacemos un sancocho los reunimos y les decimos: estas son nuestras necesidades, esta es la ZRC en la parte de Morales,

hagamos un compromiso. Eso hace Asohonda, comprometer a los políticos para que nos ayuden, porque nos toca solos” (E8-Líder Asohonda).

Por su parte, Comuarenal es una organización estratégica dentro de la comunidad, pues es una red de organizaciones, que articula y orienta otros procesos organizativos sociales, culturales y políticos en Arenal. A través de sus redes organizativas, Comuarenal tiene presencia en varias veredas de la zona, donde han impulsado fondos rotatorios de ganadería, de piscicultura y de agricultura, además de proveer capacitaciones en técnica agropecuaria y piscícola, y cuentan con su propio banco de maquinarias para usar entre los miembros de la asociación.

“Un asociado, un campesino, una familia campesina socia de la cooperativa mínimamente tiene su unidad ganadera, que son cuatro vacas preñadas, lecheras; una hectárea de yuca, una hectárea de plátano, o una hectárea de arroz o maíz, porque son cuatro cultivos que hacemos la variedad; pero además de eso por veredas tienen su estanque piscícola que les sirve también para la alimentación y para sostenerse. Eso es un campesino asociado a la cooperativa, y reciben procesos de capacitación en agroecología, en buenas prácticas agrícolas, en buenas prácticas pecuarias, buenas prácticas ganaderas, liderazgo y emprendimiento... constantemente estamos en eso. Y además de eso tienen el acceso al banco de maquinarias, la preparación, mecanización de sus tierras, desgrane de maíz, la pilada del arroz, tenemos molinos para todo eso” (E6-Líder Comuarenal).

Durante el tiempo que estas organizaciones estuvieron frente al proceso, el trabajo de la ZRC consistió, principalmente, en impulsar la economía campesina. Según comentan los líderes y miembros de la ZRC-MA, tanto Asohonda como Comuarenal, principalmente, han gestionado sus propios recursos para formular e implementar proyectos productivos piscícolas, de bovinos, de arroz, ajonjolí, maíz, auyama, criaderos de pollos etc. a través de convenios con los Fondos Pymes, el Ministerio de Agricultura, la política de mujer rural, etc. Tal como sucedió con Asoreserva, si bien dichos proyectos han tenido impacto en las comunidades, estos resultaron en experiencias aisladas y esporádicas que no han

transformado las condiciones económicas, según lo mencionan los mismos líderes y miembros de la zona de reserva.

“Aquí se dio una vez... aquí vinieron y les dijeron a los campesinos para que sembraran papaya, eso lo saben todos ustedes, todo el mundo sembró papaya y ese era el boom en un momento, se produjo la papaya y se perdió la papaya, porque no había comercio para la papaya. Entonces lo pusieron a fracasar”
(E5-Presidente JAC Arenal).

Esto se debe, en gran parte, a que las administraciones nacionales y locales estuvieron desvinculadas de las iniciativas comunitarias, y el Plan de Desarrollo Sostenible nunca se implementó. El informe de auditoría a la política de ZRC realizado por la Contraloría General de la República (2015a), señala que los Planes Departamentales de Desarrollo donde se encuentra la ZRC-MA ni siquiera menciona la existencia de esta figura en su jurisdicción y los planes municipales de Morales y Arenal se limitan a reconocer su existencia, pero no establecen acciones específicas en esta área. De hecho, entre 2002 y 2010 hubo una directriz presidencial para frenar toda acción institucional dentro de las zonas de reserva constituidas (Estrada, 2013; Fajardo, 2012).

De igual manera, el informe de la Contraloría muestra que al campesinado de las zonas de reserva no se les ha otorgado créditos, capacitación y asistencia técnica o adecuación de tierras de manera preferencial como lo indica la norma (Contraloría General de la República, 2015a). Por mencionar algunos ejemplos, el Ministerio de Agricultura, en respuesta a la solicitud enviada por la Contraloría (2015a), manifiesta que tanto el campesinado de la ZRC, como el que no se encuentra en ella, pueden acceder por igual a todos los programas y proyectos del Ministerio para apoyar las iniciativas productivas, lo que demuestra que no existe un trato preferencial para la ZRC.

Por su parte, el Banco Agrario declaró que ni el Ministerio de Agricultura ni el Incoder, responsables de la implementación de la figura, le han solicitado a la entidad “participar en la definición e implementación de las condiciones preferenciales al acceso a los pobladores de la ZRC a los diferentes instrumentos de la política agropecuaria y desarrollo rural” (Contraloría General de la República, 2015a, p. 69). Mientras que FINAGRO, que hace parte del Consejo Directivo del Incoder, donde se decide la creación de la figura, no tiene diseñados

ningunos instrumentos especiales de crédito para la ZRC (Contraloría General de la República, 2015a).

Por su parte, la gestión del Incoder tampoco fue efectiva durante estos años. Otro informe de la Contraloría es claro en mostrar que, como autoridad encargada de la ZRC, la labor de esta entidad fue desfavorable en materia de acceso a tierras (Contraloría General de la República, 2015b). El Incoder tenía a su cargo definir las áreas geográficas de las ZRC, convocar a las audiencia pública para su socialización, concertación y aprobación, reglamentar procesos de colonización y adjudicar baldíos (Contraloría General de la República, 2015a). No obstante, durante el periodo de vigencia de esta entidad (Decreto 1300 de 2003 y Decreto 2365 de 2015), no se constituyeron nuevas ZRC y la titulación de tierras en esas áreas fue mínima. De hecho, de acuerdo con el informe de la Contraloría (2015b) sobre la gestión del Incoder, esta entidad no alcanzó las metas propuestas para sus programas, tuvo inconsistencias de indicadores para medir el cumplimiento de metas, no hubo seguimiento oportuno a la ejecución del presupuesto y hubo una baja capacidad institucional para atender a la comunidad objeto de los distintos procesos.

“El Incoder casi no hizo nada. Eso se llama inoperancia de las instituciones. O sea, Incora trabajó, formalizó, pero el Incoder no. Nosotros le atribuimos los pocos resultados a la falta de gestión de las territoriales, porque eso lo manejaba la territorial Bolívar. Y a nivel nacional, la territorial Bolívar fue una de las que muy pocas metas alcanzaron en el tema de formalización, entonces a esto se le atribuye a la falta de gestión de la territorial. Estamos hablando del sur de Bolívar, no sabemos cómo haya sido su gestión en otros sectores del departamento, pero en el sur de Bolívar fue muy poco lo que se hizo” (E12-Funcionaria ANT).

Solo hasta el 2010, con la llegada de Juan Manuel Santos a la presidencia, las ZRC volvieron a tener un respiro. Las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 establecen que una de las formas para mejorar la generación de ingresos por parte de la población rural consiste en fortalecer los procesos de la ZRC para “estabilizar la población cercana a la frontera agropecuaria y mejorar el acceso a mercados de los campesinos”(DNP, 2010, p. 190). Para ello, las mismas bases del Plan planteaban que las ZRC debían estar articuladas a una política

integral de tierras que facilite los mercados y otorgue una seguridad en los derechos de propiedad (DNP, 2010).

En el caso del Morales y Arenal, *“el gobierno Santos, a través de la ANT ordenó la reactivación de las zonas constituidas y básicamente se inició con socializar la reactivación con la propuesta de la formalización de la propiedad y la implementación del plan de desarrollo sostenible”* (E12-Funcionaria ANT). Durante esta reactivación, se constituyó en 2016 una nueva organización quien actualmente representa a toda la zona de en su conjunto: Asociación de la Zona de Reserva Campesina de Morales y Arenal Sur de Bolívar – Azocamsur-. *“Lo interesante es que recoge organizaciones tanto de Arenal como de Morales y su junta directiva está conformada por representantes de las comunidades de Arenal y Morales”* (E12-Funcionaria ANT).

La organización inició su trabajo a través de la Mesa Interinstitucional compuesta por seis miembros de las comunidades, la Agencia Nacional de Tierras y representantes de las alcaldías de los dos municipios, para reiniciar el trabajo en la zona con una sola organización que representara a la población de ambos municipios. En dicha mesa se establecieron los estatutos de la organización y el plan de trabajo para impulsar el Plan de Desarrollo Sostenible que se había actualizado en 2012. Para inicios de 2018, la organización estaba trabajando en la formulación de un proyecto productivo de arroz, con el apoyo de la Agencia Nacional de Tierras, con el fin de presentarlo a la Agencia de Desarrollo Rural para obtener financiación.

3.2 ZRC en contexto: acceso a bienes productivos y servicios públicos

Si uno se fija en las cifras del departamento de Bolívar con respecto a los indicadores de pobreza del país, puede concluir que, en comparación con el total nacional, este departamento no tiene las peores condiciones de vida en el país. Con respecto a la pobreza medida como la falta de ingresos mínimos que una persona necesita para sobrevivir, la incidencia de la pobreza en Bolívar fue de 36,2% para 2018 (DANE, 2019b). Según este indicador, un hogar es considerado como pobre monetariamente si sus ingresos se encuentran por debajo de los \$257.433 que se necesitan para adquirir la canasta de bienes alimentarios y no alimentarios mínimos para la subsistencia, es decir, por debajo de la LP. En este caso, Bolívar es uno de

los 8 departamentos, además de Bogotá, que tiene un ingreso por encima de este total, con un valor de \$261.399 (DANE, 2019b).

Por su parte, el grado de satisfacción que tienen los hogares en Bolívar frente a los bienes y servicios que son vitales para subsistir también fueron superiores frente a otros departamentos para 2018, aunque no haya una cobertura del 100%. El departamento tiene una cobertura en salud del 93,7% de los cuales el 73,9% corresponden al régimen subsidiado; una asistencia escolar del 91,4% entre personas de 5 a 16 años (educación primaria y secundaria) y de 35,4% para la población de 17 a 24 años (educación superior); y un acceso a servicios públicos domiciliarios de 95,9% para energía, 69,4% de gas natural, 80,6% de acueducto y 46,5% de alcantarillado (DANE, 2019c).



A pesar de este relativamente buen desempeño en la calidad de vida de Bolívar, existen variaciones entre los municipios con respecto a su capacidad de generación de ingresos y el acceso a bienes y servicios. Por sus características físicas y geográficas, el departamento de Bolívar se divide en cuatro subregiones: Magdalena Medio, Loba, Depresión Momposina, Mojana, Montes de María y Dique (Espinosa et al.,2007). Los municipios de Morales y Arenal están ubicados en la llamada subregión del Magdalena Medio, al extremo sur del departamento.

Como se mencionó anteriormente, esta subregión comparte dos ecosistemas estratégicos: la Serranía de San

Lucas y la planicie inundable de la Mojana y la Depresión Momposina, que dotan a esta zona del país con altos recursos naturales, pero que, al mismo tiempo, ha repercutido en su desenvolvimiento económico y social. La falta de vías primarias y secundarias (que se pueden ver en los mapas anteriores) dificultan la conectividad y comunicación de los municipios de Morales y Arenal con Cartagena, la capital de Bolívar, pues los accidentes naturales como montañas, ciénagas y humedales, de altas lluvias, inundaciones y sequías han ayudado a mantener aislada y despoblada esta subregión de Bolívar (Viloria-De La Hoz, 2009).

De hecho, a partir de la segunda mitad del siglo XX, Bucaramanga (Santander) se convirtió en el principal centro de actividades del Cono sur de Bolívar (Viloria-De La Hoz, 2009), pues es la ciudad más cercana a los municipios de dicha región que concentra una red de servicios públicos y privados y actividades productivas y comerciales, a los que los pobladores de Morales y Arenal pueden acceder más rápido que Cartagena. Bucaramanga se apoya, además, en nodos secundarios como Barrancabermeja (Santander) y Aguachica (Cesar), que sirven como flujos económicos de la población del Magdalena Medio y desde donde se proveen servicios para el resto de comunidades que habitan el Cono Sur de Bolívar (Viloria-De La Hoz, 2009). Este contexto geográfico ha generado que la experiencia de los habitantes del Morales y Arenal y, por ende, de la ZRC, en cuanto al acceso de bienes y servicios no sea del todo satisfactoria.

Durante la celebración de la Audiencia Pública de constitución de la ZRC-MA, el 22 de septiembre de 1998, las comunidades y las instituciones acordaron una serie de compromisos que quedaron plasmados en el PDS (Plan de Desarrollo Sostenible), promulgado también en la misma audiencia. Este primer Plan incluía cuatro aspectos esenciales para mejorar la calidad de vida de los campesinos: ordenamiento territorial, uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, proyectos productivos auto sostenibles y mejoramiento del entorno social en cuanto a provisión de servicios públicos (Resolución 054 de 1999). Catorce años después, estos acuerdos no se habían cumplido y las problemáticas identificadas inicialmente continúan. Durante la actualización del PDS en 2012, se estableció que, si bien existen oportunidades para la ZRC, las condiciones en materia de acceso a servicios y productividad de las actividades agropecuarias y piscícolas siguen siendo precarias (INCODER & PDPMM). Tales condiciones se detallan en los siguientes dos apartados.

3.2.1 Acceso a bienes y servicios públicos en la zona de reserva

Un panorama general de la de provisión de bienes públicos de los municipios de Morales y Arenal lo otorgan las cifras de los perfiles de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación. Según estos perfiles, para 2016, la cobertura de acueducto y alcantarillado en Arenal era del 78% y de 64,6% en Morales; de energía eléctrica rural era de 44,4% en Arenal y 31,4% en Morales; 34,79% de educación en Arenal y 77,59% en Morales;

y en la mortalidad infantil de 6,8 en Arenal y 1,6 en Morales¹⁰. A primera vista, puede parecer que existe un cierto acceso a vivienda, agua potable y saneamiento básico, energía, educación y salud. Sin embargo, en la práctica, este acceso se ve limitado por las condiciones mismas en que se prestan estos servicios en los municipios, lo que hace que la percepción de los habitantes sobre la provisión de servicios públicos en su territorio no sea del todo satisfactoria.

La Tabla 5 resume las condiciones de los municipios en cuanto a las variables antes mencionadas, a corte de agosto de 2018. En esta tabla se describe cualitativamente las condiciones en las que se encuentran los distintos bienes y servicios públicos de los municipios de Morales y Arenal, que corresponden a las dimensiones sobre las que se mide la pobreza multidimensional en el país, y la cual fue construida con base en la información recolectada por la Agencia de Renovación del Territorio durante la ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial¹¹.

Tabla 4: Provisión de bienes públicos en Arenal y Morales

Tipo	Arenal	Morales
Educación	Dos instituciones educativas, una en la cabecera municipal y la otra en los corregimientos de Buenavista y San Rafael. En las veredas hay educación primaria, mientras que en los corregimientos y cabecera hasta bachillerato.	Sedes educativas en la cabecera municipal y en algunos corregimientos: Micoahumado, Pueblo Nuevo, Simoita, las Pailas, Mina Gallo y Paredes de Ororia. En las veredas hay educación primaria, mientras que en los corregimientos y cabecera hasta bachillerato.
Salud	Un hospital que atiende el primer nivel de complejidad y se ubican en la cabecera y tres (3) centros de salud, ubicados en los corregimientos de Carnizala, Buenavista y San	Los corregimientos de las Pailas y Micoahumado cuentan con un centro de salud. Allí no cuentan con suficiente suministro y dotación de equipos médicos como botiquines, camillas; inestabilidad de médicos e

¹⁰ Estas cifras corresponden a las fichas de caracterización territorial que realiza el Departamento Nacional de Planeación para cada uno de los municipios del país. Disponibles en el siguiente link:

<https://www.dnp.gov.co/programas/desarrollo-territorial/Paginas/Fichas-de-Caracterizacion-Regional.aspx>

¹¹ La formulación de los PDET son el resultado de un amplio ejercicio de planeación participativa en el que se construye progresivamente una visión del territorio a partir de un diagnóstico territorial y líneas de acción estratégicas a 10 años. Los PDET incluyen las principales iniciativas que requieren los 170 municipios priorizados por el Acuerdo de Paz (Disponible en: http://www.renovacionterritorio.gov.co/UAECT/librerias/media/pdf/ABC_PDET_2019.pdf)

	Rafael, donde se prestan los servicios básicos de primeros auxilios. Una vez al mes de forma intermitente atiende un médico consulta general, la población rural recibe jornadas de vacunación.	inexistencia, en algunos casos, de promotores de salud y escasez de personal profesional en el área de salud. El resto de corregimientos y veredas deben ir a la cabecera municipal.
Infraestructura vial	El municipio de Arenal cuenta con 9 vías construidas. Esta red de vías que comunican a Arenal con los corregimientos y veredas se encuentra en precarias condiciones que por su mal estado se alargan las distancias y en época de lluvias se hace más crítico entre veredas y la cabecera.	No hay suficientes vías y las que existen están en mal estado. En los 10 corregimientos y sus 75 veredas hay ausencia de puentes (automovilístico y peatonal) que disminuyen el tiempo de traslado y facilite el acceso, comunicación y comercialización de los productos y personas.
Vivienda, agua potable y saneamiento básico	La cabecera municipal cuenta con 1006 viviendas y 398 en el área rural. En la parte rural, la mayoría vive en hacinamiento, con techos de zinc y sin piso. Hay 1.440 hogares conectados al acueducto municipal distribuidos así: Cabecera Municipal 1.081; Corregimientos de San Rafael 117, Buenavista 172, Carnizala 70, para un total de 359 usuarios en la zona rural.	En la zona rural no disponen de sistemas de acueductos integrales donde se ofrezca el suministro de agua completamente potabilizada a todos los hogares. Más de un 50% de las viviendas rurales tienen problemas estructurales.
Energía, gas domiciliario	En la zona rural no hay servicio de gas natural y el de energía es deficiente.	Un gran número de veredas se encuentran sin luz, sin electrificación y sin fuentes alternas de energía. Alto costo de pipetas de gas, falta ejecución de proyecto de gas.
Residuos sólidos	En el sector rural, solo se presta el servicio de recolección de basura a través de la empresa de servicios públicos del municipio una vez a la semana en los corregimientos de Carnizala, Buenavista y San Rafael. En la mayoría de ocasiones los residuos se botan a los	En el corregimiento de Bodega Central existe una red de alcantarillado, pero no existe el tratamiento de las aguas residuales. Los demás corregimientos y veredas no disponen de sistema de alcantarillado ni tratamiento de las aguas residuales. Tampoco cuentan con baterías sanitarias, ni pozos sépticos. En la zona rural no hay

	sistemas hídricos, como ciénagas.	dónde disponer los residuos sólidos, ni hay un sistema de recolección de estos, por lo que los arrojan las fuentes hídricas o ecosistemas cercanos.
--	-----------------------------------	---

Elaboración propia con base en los Pactos Municipales para la Transformación Regional de los municipios de Arenal y Morales, elaborados por la Agencia de Renovación del Territorio en agosto de 2018.

Tal como lo muestra la anterior tabla, si bien existe una cobertura de los servicios y bienes básicos que un hogar necesita para sobrevivir, la calidad en los mismos no está garantizada. En ambos municipios existen puestos de salud, pero no hay suficiente personal ni dotación de equipos técnicos para atender a los pacientes y la falta de vías que comuniquen el área rural con la cabecera municipal dificultan el acceso. También existen escuelas de primaria en todas las veredas de los municipios y unas pocas de bachillerato en los principales corregimientos, pero tampoco existe un personal o infraestructura adecuada para la cantidad de niños que van a las escuelas, y el acceso a ellas es complicado por la falta de vías y de infraestructura que comuniquen a la zona rural.

Las viviendas, por su parte, no cuentan con energía eléctrica permanente, no tienen alcantarillado ni agua potable y la mayoría se encuentran en hacinamiento. Tampoco hay infraestructura para la deposición de residuos sólidos, por lo que las viviendas en la parte rural, específicamente, deben depositar los desechos en los ecosistemas cercanos, contaminando las fuentes hídricas de las que viven los mismos pobladores. Particularmente, la calidad en la prestación de los servicios de salud y educación, y las condiciones de la infraestructura física de los municipios constituyen la principal queja de los habitantes de la zona de reserva.

Con respecto a la educación, el diagnóstico de la ZRC, elaborado participativamente con la comunidad, plantea que la escolaridad es uno de los factores que más preocupa a la población (INCODER & PDPMM, 2012). Según este documento, “alrededor de 3.600 habitantes de la zona no cuentan con ninguna escolaridad, posiblemente tengan condición de analfabetismo. El 34% de los pobladores cuentan con primaria como máximo nivel escolar, y un mínimo del 13% cuenta con bachillerato” (INCODER & PDPMM, 2012, p. 58). Y para quienes tienen acceso, la percepción sobre la prestación del servicio no es del todo satisfactoria.

En Paredes de Ororia, por ejemplo, un corregimiento de Morales que tiene sede educativa, van estudiantes de *“Villa Noris, Mulitas, Betania, Quebrada Ororia, viene Sanabria y Bombillo (...) pero hay como 20 estudiantes por maestro. Hay un profesor que tiene que cumplir las funciones de varias materias, aunque no es la especialidad de él”* (E2-Presidenta JAC Paredes De Ororia). De igual manera, el desplazamiento hasta la sede educativa es preocupante: *“transportan a los niños en un jhonson [lancha] grande, en una banca, de pronto que no tienen salvavidas y esos jhonson de pronto son inseguros, porque un jhonson se voltea y un niño ahí sin salvavidas”* (GF3-Villa Noris).

En el caso del acceso a salud, la ubicación de sus sedes y la prestación misma del servicio, hacen que este derecho no esté completamente satisfecho. Según el diagnóstico del PDS de la zona de reserva, el 12% de los hogares que tienen acceso al puesto de salud, consideran que no es adecuado el servicio prestado por el personal y los implementos del puesto, por lo que las familias rurales expresan tener otras alternativas de cuidado, como un curandero o sobandero (INCODER & PDPMM, 2012). En el caso de las veredas de la ZRC de Morales y Arenal, respectivamente:

“Se enferma alguien de rapidez y a veces no hay jhonson [lancha] toca esperar que los lecheros nos lleven, y si es el caso no nos llevan porque tienen alguna cosa que les prohíbe (...) A veces llega uno un jueves, le dicen ¡no! la lista está llena, venga por ahí el lunes o el martes, entre semana, y mientras eso está que se muere... pues ya se ha muerto (...) Entonces le dicen vaya que en Valledupar lo atienden y cuando allá llegan, lo que hablaba el compadre que se podía hacer en Aguachica, lo mandan a hacer en Valledupar, en Valledupar traerlos a Morales otra vez, de Morales otra vez lo mandan a Valledupar y entonces es el jueguito que tienen, que es el que no nos parece” (GF3-Villa Noris).

“Nosotros acá no tenemos una promotora las 24 horas del día, no la tenemos. La promotora trabaja por contrato, en el mes de febrero, marzo y termina su contrato en el mes de noviembre y ahí quedamos sin promotora. Y ahí pasa algo en la comunidad y tenemos que brindarle los primeros auxilios, no la encontramos porque no hay promotora. Los médicos...una campaña médica por aquí, casi que no se ve. Por ahí viene un médico, venía, cada 15 días aquí y ya

hace rato no viene, y cuando viene no alcanza a atender a toda la población, atiende a una tercera parte de la población y el resto se queda sin atención. Entonces estamos mal por ese lado” (GF1-San Rafael).

Con respecto a la infraestructura física, según este mismo diagnóstico del PDS, los distintos corregimientos de la zona rural que comprenden la ZRC-MA no cuentan con el servicio de alcantarillado o a lo sumo cuentan con soluciones sépticas individuales que no alcanzan a reunir las condiciones de tratamiento y mantenimiento adecuadas. “La generalidad es la disposición a campo abierto, por lo que se genera gran contaminación sobre el suelo y las fuentes hídricas, afectando la calidad del recurso para uso como consumo humano” (INCODER & PDPMM, 2012, p. 51). Al respecto, miembros de la comunidad afirman que las viviendas son de *“tierra, tabla, palma y así desde el comienzo hasta el final todas son así, aquí solamente hay dos casitas (...) de resto todas son totalmente así, mucho el que tiene la pretina porque a veces cuando llegue la creciente no se le inunde la casa, pero eso no vale”* (E2-Presidenta JAC Paredes de Ororia).

Finalmente, la malla vial es insuficiente para suplir las necesidades de la población en materia productiva y en el ejercicio de los derechos a la salud y educación. La falta de vías primarias y secundarias, y el mal estado de las vías terciarias hace que el campesinado no pueda acceder con facilidad al hospital en la cabecera municipal y los puestos de salud en los corregimientos o los colegios y sus sedes de primaria, lo que en caso de una urgencia se torna peligroso. Así como tampoco pueden comercializar los productos, pues las distancias se hacen más largas en épocas de lluvia y quedan desconectados de centros poblados como Aguachica y Barrancabermeja.

“Qué ha sido uno de los problemas más grandes del Sur de Bolívar: la falta de comunicación, vías terrestres malísimas, las vías terciarias que son del manejo de las Alcaldías; estas Alcaldías de sexta categoría no tienen con qué mantener esas vías. Las vías secundarias que le pertenecen al departamento, las terciarias que le pertenecen a la nación” (E11-Vicepresidente Asocamzur).

3.2.2 Productividad en la zona de reserva

Una segunda cuestión es la capacidad de la producción de los municipios para mantener la economía campesina que, para el caso de Morales y Arenal, puede analizarse a través del acceso a tierra y los instrumentos disponibles para ponerla a producir. A pesar de la amplia riqueza natural que permite hacer actividades agrícolas, pecuarias y piscícolas, la región no logra ser productiva y sostenible para el campesinado (INCODER & PDPMM, 2012). Esto se puede analizar a través de tres variables: el uso de la tierra y la distribución de su propiedad, tanto a nivel departamental como municipal, el acceso a activos productivos como tecnología y asistencia técnica, y las condiciones ambientales de los municipios de las que dependen sus actividades económicas.

Estos municipios están ubicados en un contexto de uso y distribución inequitativo de la tierra en el departamento de Bolívar. Según cifras del Censo Nacional Agropecuario del DANE en 2014¹², el uso de la tierra está distribuido entre actividades agropecuarias que corresponden el 49% del territorio y el 41% restante es considerado área de bosques; mientras que la propiedad de la tierra está dividida entre el 32,49% perteneciente a la nación y sus instituciones y el 62,47% restante es territorio de propiedad privada. Este 62,47% está conformado en su gran mayoría por predios de un tamaño promedio de 31.9 hectáreas para 2009, que son considerados de mediana propiedad y cuentan con cerca del 60% del suelo, seguida por la gran propiedad con el 26% ”(Instituto Geográfico Agustín Codazzi [IGAC], 2012). Por su parte, el Gini de propietarios por calidad de tierra, una medida que calcula cuánta tierra productiva tienen los propietarios registrados, fue para el año 2009¹³ de 0,76 (IGAC, 2012). Es decir, que la tierra productiva del departamento está concentrada en pocas manos, pues los valores de este coeficiente van de 0 a 1, siendo 1 el nivel más alto de desigualdad.

Los municipios de Morales y Arenal no son ajenos a este contexto y, de hecho, son representativos de las condiciones del departamento en esta materia. El estudio del IGAC (2012) evidencia que en estos dos municipios la desigualdad en el acceso y usufructo de la tierra es alta, a pesar de que esto era lo que pretendía evitar la figura de ZRC. En Morales y Arenal, la estructura de la tenencia de la tierra es dominada por la mediana propiedad y

¹² Recuperado de: <https://geoportal.dane.gov.co/geocna/index.html#>

¹³ No existe información más actualizada sobre la concentración de la tierra desagregada por departamentos, pues la información disponible para esta materia “es sumamente parcial, discontinua y dispersa, lo que ha dificultado trazar una imagen de la estructura agraria en el país” (Oxfam, 2017, p. 9)

seguida por la gran propiedad (IGAC, 2012). Además, una poca cantidad de propietarios concentran la mayor parte de las tierras productivas de la región, con un índice de Gini de propietarios entre 0,550 - 0,638 en Morales y entre 0.639 y 0.728 en Arenal (IGAC, 2012). De hecho, los datos más recientes sobre esta materia confirman esta situación. Los cálculos de la Contraloría General de la Nación (2015a), realizados con base en la información del catastro fiscal de los municipios, muestran que el Gini de Arenal es de aproximadamente 0,63, mientras que el de Morales es de 0,54, ubicando a ambos municipios por encima de 0,5, lo que constituye un indicador alto para encontrarse dentro de una zona de reserva.

“Conseguimos la tierra alquilada porque tierras para trabajar hay lo que pasa es que los dueños no la trabajan y los que la quieren trabajar no tienen en donde trabajar, porque tierras hay, tierras que no se hunden” (E2-Presidenta JAC Paredes de Ororia).

“No estamos en contra de los terratenientes, somos pobres, pero no estamos en contra de los terratenientes, que tengan tierras, pero las mejores tierras las tienen los terratenientes y a nosotros los campesinos nos toca estar rasguñando en estos piedreros. Por acá todavía se ve tierra, pero hay una parte de cerro... donde están las mejores tierras. Nosotros para sembrar una mata de yuca, una mata de plátano, de fríjol, nos toca sembrarlas por allá en las mejores tierras, que las tienen los terratenientes: una vaca tiene una hectárea, dos hectáreas para andar, en cambio nosotros somos seres humanos y no tenemos una hectárea para trabajar, y somos los trabajadores” (GF3-Villa Noris).

Además de la concentración de la tierra, dentro de la zona de reserva también existe predios con extensiones menores a área mínima que necesita una familia para sobrevivir, es decir, predios inferiores a la Unidad Agrícola Familiar (UAF) que plantea la Ley 160 de 1994. Según el estudio de la Contraloría (2015a), “el número de poseedores con áreas inferiores a la UAF en los municipios que integran las ZRC, se ha incrementado en el periodo 2000-2014, alcanzando en el año 2014 la cifra de 1.802 poseedores de predios cuya área es inferior a la UAF” (Contraloría General de la República, 2015, p., 54). Particularmente en Morales y Arenal, el porcentaje de poseedores que tienen una extensión menor a la UAF es de 81% en Arenal y 56% en Morales (Contraloría General de la República, 2015).

En cuanto al acceso a tierra, según la Agencia Nacional de Tierras entre 1999, año en que se creó la zona de reserva, y 2014 se han adjudicado 147 baldíos en Arenal y 435 en Morales; en ambos municipios se adjudicaron entre los años 2002 y 2010 164 baldíos (ANT Derecho de Petición 201922000718161). Sin embargo, no se especifican si estos baldíos fueron adjudicados dentro de la zona de reserva o fuera de ella. Por su parte, ninguno de estos dos municipios fue priorizado para la ejecución del Programa Nacional de Formalización de la Propiedad Rural, implementado por el Ministerio de Agricultura¹⁴ (Resoluciones 346 de 2013, 327 del 2014, 98 del 2015 del Ministerio de Agricultura).

En materia del uso del suelo, según los perfiles de caracterización territorial del Departamento Nacional de Planeación, estos municipios cuentan con un área total de ecosistemas estratégicos del 33% para Morales y 10,38% para Arenal, la cual incluye área de humedales, bosque seco tropical y manglares, donde las actividades agropecuarias tienen limitantes o están restringidas. En ambos municipios existen conflictos por la sobreutilización de la tierra del 17,16% en Morales y del 19,01% en Arenal. El resto de tierras aptas para el aprovechamiento agropecuario se encuentran inundadas debido a las condiciones climatológicas de la zona y el campesinado no cuenta con la capacidad económica suficiente para aprovechar en su totalidad estas parcelas (INCODER, 2012). Estas inundaciones son ocasionadas por crecientes del brazo de Morales y las ciénagas que componen la zona, causando daños en los predios al punto de arrasar con cultivos y viviendas.

“Pero entonces también cuando se inunda acá, nos toca echar las vacas también para la montaña, para aquel filo. Eso es pura piedra allá. Allá hay una sabana y bueno allá ahí se ampara el ganado. Esto queda aquí como (un desierto) no queda sino barro, y uno que le toca desplazarse a los cerros” (GF-Villa Noris).

El campesinado tampoco cuentan con una tecnología apropiada para el manejo de sus actividades (INCODER & PDPMM, 2012, p. 35). Según la caracterización de los documentos de la Agencia de Renovación del Territorio, existe una falta de inversión, financiamiento o subsidios para proyectos productivos en el sector pesquero, ganadero, agricultura, minería, entre otros. Tampoco hay acceso a créditos o subsidios para la compra de tierras ni adecuación de tierras, y en la única vereda en la que existe un distrito de riego

¹⁴ Este programa fue creado mediante la Resolución 452 de 2015 del Ministerio de Agricultura

para mejorar la producción, la falta de centros de acopio y seguridad en la comercialización han hecho que el proyecto fracase.

“Nos fue bien y como a todo el mundo le fue bien, la gente empezó, o empezamos a cultivar los lotes grandes, sí nos va a ir súper bien. Se nos metió lo del TLC. Hicimos, quedamos arremangados todos. Y actualmente, quedamos en la pobreza porque más de uno acá en La Arcadia estamos endeudados, que tenemos otras cositas como sobrevivir, pero estamos prácticamente pobres” (GF2-La Arcadia).

En cuanto al sector pesquero, según la caracterización de la Agencia de Renovación del Territorio, no existe asistencia técnica para generar buenas prácticas de pesca y hay cierre de caños naturales y humedales que se encuentran en predios privados y es denegado el acceso para realizar pesca en ocho corregimientos y veredas de Morales, dos de ellos (Simoita y Boca de la Honda) pertenecientes a la ZRC. En el caso del corregimiento de San Rafael, en Arenal, la pesca ha disminuido por la construcción de un jarillón que bloquea la entrada del río a la ciénaga, impidiendo el flujo natural del desove: *“eso lo hicieron pa que no hubiera más inundaciones, porque si no hubiera inundación, no habrían hecho el tapón nunca. Pero esas cosas las hicieron muy... eso tenían que mirar primero de que el río alimenta esta ciénaga, ¿sí? Y al tapar ese caño nos están perjudicando”* (GF1-San Rafael).

Finalmente, con respecto al área ambiental, la falta de buenas prácticas en la agricultura, ganadería y pesca, además de la no existencia de un área exclusiva para el depósito de residuos sólidos, ha hecho que las condiciones ambientales del territorio se deterioren con el paso del tiempo. Según un investigador de la FAO:

“La contaminación de las aguas digamos que eran problemáticas alusivas al agua ¿sí? Entonces hay contaminación por varias fuentes uno minería, en todas sus formas pero digamos que hay minería ilegal de oro que se realiza la mayor parte de la una de reserva campesina hacia Micoahumado, hacia las partes altas en general de las cuencas de la quebrada la onda y la quebrada arenal que son las quebradas que hacen los acueductos de la zona aunque no están muy desarrollado pero pues eso es crítico, y es crítico porque digamos se libera mercurio de muchas maneras, se libera mercurio líquido, pero se genera

mercurio aéreo y ese mercurio también lloviendo en otro sitios donde no sabemos que se acumula” (E16-Miembro FAO).

El diagnóstico del INCODER & PDPMM (2012) estableció que se evidencia “sedimentación, deforestación, tendencia a la disminución de los caudales de las fuentes hídricas especialmente la quebrada Arenal y la Ciénaga de Morrocoy, deterioro en la calidad del agua por contaminación proveniente de la actividad minera, pesticidas, vertimientos de aguas servidas y residuos sólidos” (INCODER & PDPMM, 2012, p. 38). Para el campesinado, es necesario solucionar los conflictos ambientales, pues “el mejoramiento de las condiciones ambientales asociadas a las ZRC, es la vía directa para el mejoramiento de la calidad de vida y garantía de derechos fundamentales a los pobladores de la ZRC” (INCODER & PDPMM, 2012, p. 52).

Así, en términos generales y de acuerdo con los datos existentes para estos municipios y percepciones de sus habitantes, puede decirse que, si bien existe una provisión de servicios públicos, esta es deficiente. La falta de infraestructura en cuanto a vías y puentes automovilísticos y peatonales, hacen que las veredas y corregimientos de dichos municipios estén aislados de los cascos urbanos y, estos, a su vez, de las ciudades intermedias, lo que aumenta el tiempo de desplazamiento de las personas e impide que puedan acceder a los centros educativos y de salud con agilidad.

También existe una falta de inversión, financiamiento o subsidios para proyectos productivos en el sector pesquero, ganadero, agricultura, minería, entre otros, y la poca producción que existe se pierde con las inundaciones de los ríos, mientras el acceso a los acuíferos es cada vez más restringido para quienes viven de la pesca. A esto se suma la poca tierra existente para el campesinado que se dedica a la agricultura y la ganadería, debido a la concentración, por un lado, y, por el otro, la extensión menor a lo que se necesita para producir y las condiciones climáticas que hacen que dichas tierras se inunden.

Capítulo IV: La pobreza no es como la pintan

Entender la pobreza como la privación de capacidades para desarrollar las libertades personales, permite visibilizar las múltiples formas en que estas capacidades se ven mermadas o potenciadas según los contextos en los que residen los grupos sociales (Sen,

2000a). Es decir que dependiendo del lugar donde se habite y las características asignadas y adquiridas que tenga una persona (raza, género, discapacidad, edad, etc.), varían las formas en que operan y se experimentan las privaciones (en plural porque pueden ser varias) y, por ende, también varían las percepciones que se tengan sobre dichas privaciones (Sen, 2000a).

En el caso de la zona de reserva de Morales y Arenal la privación de capacidades, o la noción de pobreza, está directamente relacionada con su condición de campesinos, en un país donde esta población rural se ha configurado históricamente desde la marginalidad y la exclusión (Gutiérrez Sanín, 2014). Para los miembros de esta zona de reserva, la pobreza se relaciona con las necesidades que el campesinado tiene en materia de ingresos y de acceso a bienes y servicios para vivir dignamente del campo y en el campo. Dicha noción, incluye dimensiones económicas y no económicas que corresponden al contexto específico del sector rural y que se jerarquizan según la importancia que le dan los miembros a unas dimensiones sobre otras.

Este capítulo elabora el concepto de pobreza a partir de las perspectivas y experiencias de los habitantes de la ZRC, desde su condición de campesinos y campesinas, para luego proponer una caracterización de este campesinado como grupo social, según los contextos económicos, políticos y de relaciones sociales a los que están adscritos y sus acciones frente a dichos contextos. El capítulo termina con una propuesta de incluir algunas dimensiones de la pobreza que se identificaron durante esta conceptualización y que son importantes para desarrollar las capacidades en Morales y Arenal.

4.1 La pobreza vista desde la vida en el campo

El corregimiento de San Rafael, en Arenal, es por excelencia pescador. Sus habitantes viven a unos cuantos metros de la ciénaga de Morrocoy, que se alimenta de una vertiente del río Magdalena y en la cual los pobladores pescan el Bocachico, la Mojarra Amarilla, la Doncella y la Blanquilla que sirven como alimento y fuente de ingresos de San Rafael. En los meses de mayo y octubre, que son las épocas de lluvia, estos peces entran a la ciénaga para hacer el proceso natural del desove, por lo que los campesinos de San Rafael salen en sus canoas a las cuatro o cinco de la mañana para navegar por Morrocoy y llevar sus encargos al casco urbano de Arenal. Así era la vida en el corregimiento hasta el 2011, año en que las autoridades ambientales regionales iniciaron la construcción de un jarillón con el propósito de evitar las

inundaciones de las casas y demás infraestructura del corregimiento, que también llegan con la comida y el trabajo de los pobladores de San Rafael.

“Mire, aquí las inundaciones, lo que ya le comentaba yo allá en la ciénaga. Aquí las inundaciones nos hacían daño, cuando crecía demasiado la ciénaga y el río, pues nos inundábamos acá. Casi que el 70, el 80% de la población se hundía, pero había buena comida, entre más creciente había, más comida había. Pero qué es lo que ha pasado ahora, ahora existió el jarillón, ahora en vez de haber comida, lo que hay es hambre. No nos hundimos, pero hay hambre. ¿Sí? Entonces yo preferiblemente, le digo a la gente, yo mejor paso un mes hundido, con agua al tobillo y no un año aguantando hambre” (GF1-San Rafael).

Para la población, el problema no es tanto la existencia de un jarillón, sino la falta de unas compuertas que permitan la entrada controlada de agua a la ciénaga, para evitar las inundaciones y permitir que los peces entren. A principios de 2018, el alcalde de Arenal estaba realizando un proyecto de adecuación del jarillón o muralla carreteable para las veredas y corregimientos de Buenavista - Los Peñones – Tequendama y Boca de la Honda, Morales, con el fin de mejorar la vía de acceso. Hasta el momento y según comentan los mismos habitantes de San Rafael, el proyecto que refuerza este jarillón no ha sido socializado con ellos y les preocupa que su situación empeore, pues reforzaría la infraestructura del jarillón impidiendo el flujo del agua.

A unos cuantos kilómetros más al sur, en la vereda La Arcadia, perteneciente a Morales, la situación de escasez es similar. Esta vereda se dedica a la agricultura, especialmente al cultivo de arroz, y se ha caracterizado por tener fuertes lazos comunitarios para mejorar la producción, como la construcción de un distrito de riego y la infraestructura de un molino para procesar el arroz. A pesar de que estas iniciativas han mejorado la calidad de vida de la población, en la medida que permiten la mejora de la producción, siguen siendo insuficientes para que este cultivo sea sostenible en el tiempo, debido a los bajos precios del arroz que llegaron con el Tratado de Libre Comercio.

“Sí, porque estamos endeudados con los bancos, estamos mejor dicho... por la crisis que está viviendo en el país el arroz. Igual acá también se vive con ganadería, pero ya llevábamos un ritmo con el arroz. Cuando el distrito [de

riego] se hizo para mejorar la calidad de vida de toda La Arcadia y de todos los socios, pero lástima que hace tres años cuatro no lo hemos sabido aprovechar, porque el gobierno nos hizo ¡pum!, algo que no esperábamos, el TLC, entonces quedamos todos graves. Los insumos acá en Colombia son muy costosos. Entonces qué hacemos, sembramos para pagar insumos, pero quedamos debiendo.” (GF2- La Arcadia).

La construcción del molino de arroz para estos pobladores fue sinónimo de oportunidades de trabajo para toda la comunidad, pues con él podrían transformar y procesar la materia prima; trillar, empaclar y vender el arroz al resto de la ZRC y otros municipios. Sin embargo, la construcción quedó incompleta. Está la infraestructura física, con los respectivos espacios para trillar y empaclar, pero aún falta electricidad y la maquinaria suficiente. Un proyecto que quedó estancado por falta de recursos propios y que, con la ayuda de la ANT y la ADR esperan poner a marchar en un futuro próximo.

Mucho más al sur de Morales, por vía fluvial, se encuentra Villa Noris. Una vereda completamente organizada en la que viven solo familiares, que llegaron allí a causa de un desplazamiento forzado de otra vereda de Morales, llamada Libertadores. Los campesinos vivían en la finca California, pero grupos armados ilegales llegaron 18 años atrás para sacarlos de sus viviendas, porque “estaban invadiendo propiedad privada”, según comentan los habitantes. En California cada familia tenía su parcela donde cultivaban arroz y compartían la producción con los que llegaban con maquinaria a trabajar. Al ser desplazados y reubicados, fueron beneficiados con un proyecto de ganadería a pequeña escala, que combinan con las actividades agrícolas. Sin embargo,

“Tenemos la creciente de mayo y la de octubre. Entonces a los que nos han dado de pronto dos, tres vacas, pues tenemos cuatro, cinco vaquitas, de ahí la exprimimos, vendemos las lechecitas, ya llegan las panelas ahí. Pero entonces también cuando se inunda acá, nos toca echarlas también para la montaña, para aquel filo (...) Ahora en esta creciente que tuvimos (-mayo) pues la suegra mía, el cuñado y la mujer estaban allá y el brisón que hizo le quitó el plástico le tocó que amarrarlo y la suegra enferma. Y de pronto unos palos de madera le cayeron cerquita al rancho, ¿qué tal un palo de eso se les vaya y le caiga al caucho ese?,

todos hubieran sido víctimas. Mira uno que una cosa como inhumana, ¿si? Es una cosa que no tiene...debajo de un plástico es una cosa tenaz” (GF3- Villa Noris).

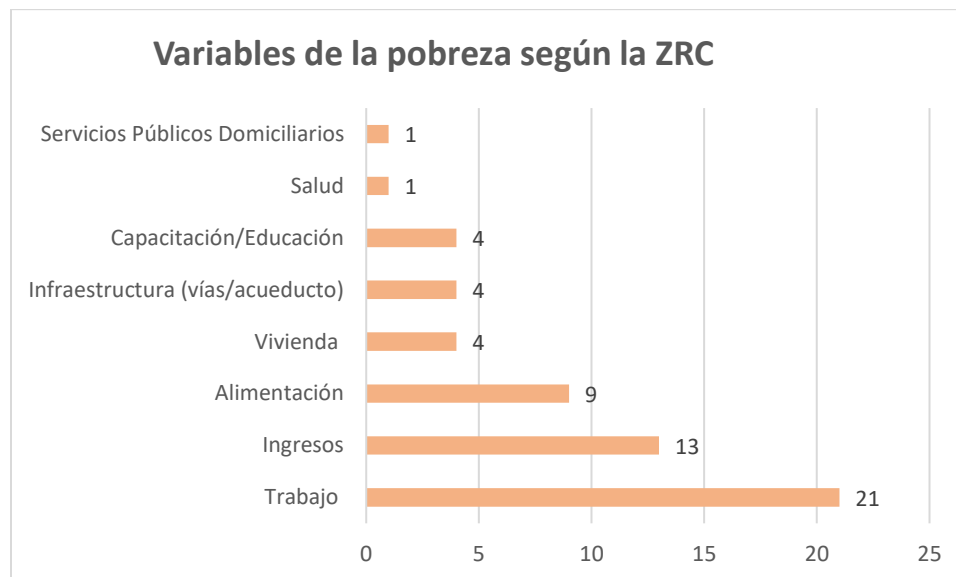
El mayor problema de Villa Noris son las inundaciones. Las crecientes de mayo y octubre, hacen que se desborde el río del brazo de Morales que queda a unos cuantos metros de las casas de los habitantes. Aunque algunos habitantes han construido sus casas con palos y palmas que crean un segundo nivel, el río alcanza a inundar las construcciones, dañando, a su paso, los cultivos de ñame, yuca, plátano, frijol, etc. que se producen en la vereda. Además, el ganado que obtuvieron por el proyecto también se ve afectado por los constantes traslados hacia la montaña para evitar que se ahoguen o se pierdan. La comunidad ha entablado acciones ante las autoridades locales para que se tomen medidas frente a estas inundaciones, bien sea creando un muro de contención del río o reubicándolos en otras tierras.

Estos tres casos constituyen el escenario en el que se enmarca la noción de pobreza de los habitantes de la ZRC y representan la preocupación general de este campesinado con respecto a sus condiciones de vida: la imposibilidad de ejercer sus actividades productivas de manera sostenible. Tanto la construcción del jarillón que reduce la fuente de ingresos en San Rafael, como los bajos precios del arroz que impuso el TLC y lo costoso que resulta transformarlo en La Arcadia, hasta las constantes inundaciones que hacen perder el tiempo de trabajo y los productos en Villa Noris, son condiciones que les impiden a los campesinos y campesinas de la región producir la tierra y devengar ingresos de ella.

Por ello, la noción de pobreza de esta región está directamente relacionada con sus condiciones de vida en el campo. Para el campesinado de la zona de reserva, la pobreza es la imposibilidad de vivir digna y tranquilamente en el campo, en el lugar donde nacieron o escogieron para vivir y donde quieren culminar sus proyectos de vida. Esta noción de vida digna y tranquila se relaciona con el aspiración de generar ingresos a partir de sus actividades tradicionales, lo que saben y quieren hacer, y que sean suficientes para cubrir sus necesidades, consolidar un ahorro, sostener a sus familias y generar inversión, además de tener acceso a los bienes y servicios que les permitan una buena calidad de vida. Dicha conceptualización de pobreza o esta forma de entender esta condición, incluye dimensiones económicas y no

económicas, que operan de manera simultánea en la vida del campesinado, y que fueron recopiladas en la siguiente gráfica:

Gráfica N° 2: Variables de la pobreza según la ZRC



Estas dimensiones fueron identificadas tanto en las discusiones grupales como en las entrevistas individuales, las cuales se clasificaron según la frecuencia en que fueron nombradas y relacionadas directamente con la condición de pobreza. Es decir, se contó el número de veces que aparecía cada una de las dimensiones mencionadas en la gráfica durante las conversaciones con los miembros de la zona de reserva. Es importante recalcar que, en la mayoría de veces, los pobladores hacían referencia a varias dimensiones en una sola respuesta frente a su noción de pobreza, por lo que cada una de estas dimensiones nombradas se contaron por aparte. Lo anterior se evidencia, por ejemplo, en la respuesta de una líder de la vereda de Buenavista, en Arenal:

“Tener acceso pues a una vida, porque es que aquí hay personas que comen una sola vez, verdad, porque no tienen para las tres. Muchas personas no gozan de los servicios públicos domiciliarios porque no tienen cómo cancelarlos. Entonces no es una calidad de vida. Es así una vida como bien precaria, entonces los que tienen su negocio pues son los que en mejores condiciones están. En cuanto a los empleos por aquí, pues no hay variedad de empleo. Lo único que hacen algo son los de la alcaldía, los profesores y el hospital, de resto todos se

dedican a actividades varias. Que si por lo menos trabajan hoy quizá mañana ya no trabajen. Y ese trabajo aquí vale 30 mil pesos, como puede salirle un día, puede salirle toda la semana” (E3- Presidenta JAC Buenavista).

De esta manera, se identificaron ocho dimensiones que el campesinado de la ZRC relaciona directamente con la pobreza: trabajo, ingresos, alimentación, vivienda, infraestructura (vías y acueducto) capacitación/educación, salud y servicios públicos domiciliarios. Con respecto a la infraestructura, los habitantes relacionaron la pobreza específicamente con la construcción de vías y de acueducto para las viviendas, y no incluyeron aspectos como alumbrado público y electricidad en los hogares, por ejemplo, por lo que esta categoría solo incluye estos dos aspectos. Mientras que la dimensión de capacitación/educación fue agrupada dentro de la misma categoría, debido a las constantes referencias de los pobladores a tener un mejor acceso y calidad a la educación superior que sirviera, también, para facultar y tecnificar en temas agropecuarios a los miembros de la ZRC. Sin embargo, es importante mencionar que los materiales con los que está construido el hogar y el acceso a bienes y servicios del Estado sí fueron nombrados frecuentemente por los pobladores de Morales y Arenal en su relato sobre la calidad de vida de sus respectivas veredas y la importancia que esto representa para transformar sus condiciones de vida.

Ahora bien, como se puede ver en la gráfica expuesta, las dimensiones de trabajo e ingresos fueron las mencionadas con mayor ahínco por el campesinado de la ZRC para definir la pobreza. La primera hace referencia a obtener un empleo fijo por tiempo indefinido, mientras que la noción de ingresos se refiere a la posibilidad de obtener dinero de manera sostenible en el tiempo. La tercera con mayor reconocimiento fue la de alimentación, que se refiere posibilidad de tener las tres comidas diarias, y la cuarta a tener un hogar donde residir, una vivienda, sin especificar las condiciones de la misma (materiales de la construcción o hacinamiento). Por su parte, capacitación/educación e infraestructura fueron nombradas en algunas ocasiones, pero sin mayor representatividad para el resto de los pobladores. Mientras que salud, que se refiere a tener una atención adecuada y oportuna, y servicios básicos, referentes a contar con agua potable y luz para el hogar, no fueron resaltadas por más de dos entrevistados.

Ahora bien, de esta definición de la pobreza y jerarquización de sus componentes se resaltan tres aspectos, siendo los dos últimos los más importantes. Primero, que las dimensiones que componen la visión de la pobreza para el campesinado contemplan lo económico, pero van mucho más allá de ello, lo que da cuenta de las múltiples privaciones que puede experimentar una misma persona o grupo social de manera simultánea. Segundo, que dichas dimensiones no son excluyentes las unas de las otras, sino que están completamente ligadas entre sí, por lo que no se pueden comprender de manera separada. Y tercero, que dichas dimensiones se refieren a problemáticas específicas para el campesinado por lo que las dimensiones son particulares a su identidad. De estos dos últimos aspectos se hablará en las siguientes líneas.

En cuanto a la interrelación de las dimensiones, para el campesinado de la zona de reserva las dos primeras dimensiones (trabajo e ingresos), que son las más nombradas por los habitantes, no pueden desligarse. La falta de oportunidades para emplearse se relaciona con la pobreza en la medida en que de ella depende la obtención de ingresos, los cuales, a su vez, son necesarios para poder comer, mejorar la vivienda, tener acceso a la educación y a salud de calidad, etc. Es decir, para el campesinado de Morales y Arenal, existe un *efecto dominó* al obtener un trabajo, en la medida que este incide en las otras dimensiones relacionadas con la pobreza. Por eso no es suficiente con tener cualquier tipo de trabajo, esporádico y sin una remuneración suficiente, pues este tiene que ser constante y aportar los ingresos necesarios para lograr movilidad social:

“Es porque no hay empleo. Si hubiera empleo nosotros no tendríamos la necesidad de que nos ayudaran en forma de estudio, porque uno mismo sacaba... la vaina es la pobreza que hay en la región” (GF1-San Rafael).

“Todo es importante, pero nosotros produciendo bien, trabajando bien, nosotros hacemos nuestra casa, mejoramos la vivienda. Entre todos podemos mejorar un acueducto” (GF3-Villa Noris).

Estas dos citas resaltan ese efecto dominó que el campesinado entiende con respecto a la condición de pobreza. En el caso de San Rafael, los pobladores hablan de una época fructífera para ellos, cuando la pesca en la ciénaga les proveía los ingresos necesarios para solventar sus necesidades. Mientras que la familia de Villa Noris considera que siempre que exista una producción sostenible, que no se dañe por las inundaciones que sufren, sus condiciones de

vida serán satisfactorias. Así, la pobreza se relaciona con la falta de un trabajo sostenible económicamente con el que puedan costear sus otras necesidades.

No obstante, esta idea de trabajo sostenible económicamente se refiere a un trabajo específico: el trabajo en el campo, lo que conlleva al tercer punto a resaltar de esta conceptualización. Si bien se menciona la falta de empleo en términos generales como una de las principales problemáticas de la región, en su relato acerca de la definición de pobreza, los pobladores hacen referencia a que su trabajo en el sector agropecuario no les produce los suficientes (y más) ingresos para vivir, por lo que no es sostenible para ellos y sus familias. En la tabla 5 se recogen algunas citas de las entrevistas y grupos focales en las que los pobladores de la zona de reserva relacionan la pobreza con el trabajo en el campo

Tabla N° 5: La pobreza y su relación con el trabajo en el campo

Grupo focal o entrevista	Citas
<p>GF2-La Arcadia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Para mí la pobreza es no tener cómo subsistir, los alimentos, no tener cómo darles educación a los hijos, <u>no poder trabajar en el campo, no tener cómo cosechar</u>. Si uno es pobre cómo va a trabajar, cómo va a tener que comprar una libra de arroz, eso es la miseria.”</i> <i>“Eso nos daña a nosotros la calidad de vida, mejor dicho, la pobreza. <u>Usted saca un producto allí y lo va a comercializar y llega todo deteriorado, no lo compran, y si lo compran es a menos precio. Entonces, mejor dicho, uno está en la pobreza”</u></i> <i>“¿<u>Qué mejora nuestra calidad de vida? Proyectos productivos que generen empleo y que lleven a la misma transformación de lo que nosotros produzcamos”</u></i>
<p>E4-Presidente Asojuntas</p>	<p><i><u>La pobreza, pues, se genera también por falta de oportunidades, por falta de capacitar al pueblo y a su gente (...)</u> Entonces qué pasa, una buena tecnificación, adecuada, donde haya unos buenos agrónomos que le expliquen al campesino qué semilla es mejor</i></p>

	<i>para la época de sequía, la tecnificación. <u>Se necesita que haya una capacitación para los agricultores, y también el comercio</u></i>
GF3-Villa Noris	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nosotros tenemos la yuca, el mafufo [tipo de plátano], tenemos todo y llega el río y pum nos deja con las manos cruzadas y otra vez a volver a sembrar, pa volver otra vez (...) Entones entre más días, la pobreza nos va agarrando, nos va agarrando. (...) <u>La pobreza la tenemos aquí mejor dicho, sobretudo el río, el río es el que nos está acabando porque lo que hacemos pues nos lo acaba.</u></i> • <i>“Que lo del río nos ha perjudicado muchos años, porque (...) una mata de yuca, una mata de plátano, todo lo destruye eso, primeramente. <u>Entonces eso es una pobreza, porque imagínese todos los años trabajando y entonces va quedando todo en vano.</u>”</i>
GF1-San Rafael	<i>Primero, una fuente de trabajo. Segundo, que se abran las compuertas para que, entre el agua del río a la ciénaga, ¿sí? Tercero, mejoramiento de las vías (...) - Mejora la calidad de vida inmediatamente... <u>Nosotros sabemos que el municipio no tiene la capacidad de darle empleo a todo el mundo, pero si nosotros tenemos una ciénaga recuperada, tenemos trabajo.</u></i>

Dichas afirmaciones, a pesar de haber sido mencionadas por miembros distintos de la ZRC, con actividades económicas y características organizativas distintas, muestran que su noción de pobreza está directamente ligada con las condiciones particulares del ser y hacer campesino o campesina. Las dimensiones de trabajo e ingresos, se refieren todas a una producción de alimentos. De hecho, las otras dimensiones como construcción de vías y capacitación/educación también se mencionan como algunos elementos que impiden que la producción campesina sea sostenible. En el caso de la capacitación, por ejemplo, el presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de Arenal hace referencia a la importancia de tecnificar la producción, que se implementen nuevas tecnologías y que se eduque al campesinado en su trabajo agropecuario. De igual manera, los

habitantes de la zona de reserva hacen referencia a la ciénaga, las inundaciones y la falta de opciones para transformar y comercializar productos como las principales características que marcan su condición de pobreza.

Para este campesinado, el trabajo es la labor en el campo misma y lo que identifican como pobreza es no poder ejercer esta actividad con suficientes ingresos. Por lo tanto, la pobreza significa no poder desempeñarse como productores de alimentos y vivir de ello, que es lo que define por excelencia su condición de campesinos y campesinas (Forero Álvarez, 2013). Así, estas particularidades de la noción de pobreza, incluyen algunas dimensiones propias del ser y hacer campesinado, que fueron recalçadas por los mismos habitantes de la ZRC y que vale mencionar. La tabla 6 incluye las percepciones de los habitantes frente a las variables que se necesitan para hacer que la producción de alimentos en el campo sea sostenible y los ayude a superar la pobreza

Tabla N° 6: Variables en la producción de alimentos

Grupo focal o entrevista	Variable	Citas
E6-Líder Comuarenal	Soberanía alimentaria	<i>Yo creo que lo mínimo es garantizar la soberanía alimentaria, porque un campesino que tenga una finca, tenga la finca y no encuentre producción, creo que no tiene nada. Entonces creo que lo mínimo es garantizar la soberanía alimentaria. Podría ser un indicador para medir la calidad de vida</i>
E8- Líder Asohonda	Implementación del Plan de Desarrollo Sostenible construido por los mismos miembros de la ZRC	<i>Desde que se haga una inversión como tal, y se haga una implementación el Plan de Desarrollo, que fue construido con los mismos campesinos donde planificaron el antes, el ahora y el</i>

		<p><i>después, se verían más adelante cómo iba a ser nuestro futuro, claro que sí podemos mejorar la calidad de vida y superar la pobreza, pero no ha habido ninguna clase de respuesta</i></p>
<p>GF3-Villa Noris</p>	<p>Extensión de la tierra en relación con la familia</p> <p>Seguridad social (pensión)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Nos parcelaron 14 familias, 11 hectáreas por familia, ¿si entiende? Y tenemos... yo nada más tengo cinco hijos, tengo tres que son mayores de edad y de pronto ellos necesitan un pedazo de tierra, necesitan una casa, y yo no se las he podido dar (...) una vaca tiene una hectárea, dos hectáreas para andar, en cambio nosotros somos seres humanos y en cambio no tenemos una hectárea para trabajar, y somos los trabajadores, somos los camellos del gobierno, que camellamos</i> • <i>Ya nosotros esa fuerza de trabajo nos la están quitando porque nosotros ya yo soy... yo tengo 44 años, y trabajé de pronto hasta los 40, ya esto para ya, ya mira uno que las fuerzas se están acabando y</i>

		<i>que uno no aguanta para tanto, sí me entiende</i>
--	--	--

En estos relatos, se hace referencia a los elementos que se necesitan para mejorar la calidad de vida en la zona de reserva, los cuales corresponden la condición de campesinos y campesinas en este territorio. Aquí se mencionan aspectos como la falta de tierra adecuada para cultivar, la imposibilidad de asegurar mercados para la producción de alimentos nacionales, la falta de una seguridad social para el campesinado que llega a una edad avanzada y la falta de inversión en los planes y proyectos que la misma comunidad ha definido como determinantes, son algunos elementos que los habitantes de Morales y Arenal relacionan con la falta de calidad de vida y que al tenerlo mejoraría sus condiciones y permitiría superar las condiciones de pobreza que ellos mismos identifican.

En este sentido, conceptualizar la pobreza desde la mirada del campesinado, permite dar cuenta de las particularidades de esta condición para un grupo social específico, lo que permite comprender este fenómeno desde las realidades y experiencias de dicho grupo. En este caso, la pobreza incluye aspectos como el acceso a medios para la producción de alimentos (tierra de calidad y una ciénaga o estanques aptos para la producción), las herramientas con las que cuenta para hacerlo (tecnología, maquinaria, capacitación o asistencia técnica), la provisión de bienes para la posproducción (infraestructura vial y comercial) y los ingresos que se derivan de esta actividad. También incluye elementos claves para la inclusión del campesinado como la seguridad social (pensión y salud).

4.2 El ser y hacer campesino: lo económico, lo político y lo social

Ahora bien, la noción de pobreza del campesinado de la zona de reserva se enmarca en un contexto más amplio de relaciones económicas, políticas y sociales en las que este grupo social ocupa una posición. Lo que para ellos significa la pobreza responde no solo a su percepción como agentes individuales, sino, como plantea Bourdieu (2001), a la posición que ocupan en el sistema de relaciones sociales que se establecen en un campo social. Es decir, las percepciones de los agentes, su visión frente al mundo social y la capacidad que tienen para actuar en él, se define históricamente de acuerdo a su “situación actual y potencial en la estructura de distribución de las diferentes especies de poder (o de capital) cuya posesión

condiciona el acceso a los provechos específicos que están en juego en el campo” (Bourdieu, 2001, p. 15). Por eso, en este apartado se propone dotar de contenido esa noción de pobreza que presenta el campesinado de la zona de reserva, desde las posiciones que este ocupa y la agencia que tiene sobre su posición en los órdenes económicos, políticos y sociales que condicionan su modo de vida.

Para Salgado (1995), crear políticas de desarrollo rural que pretendan superar la pobreza, implica “reconocer y asumir explícitamente la profunda diferenciación interna entre los campesinos” (Salgado Araméndez, 1995 p. 170), en la medida que se identifican las causas primarias de su condición y se pueden canalizar adecuadamente sus capacidades y habilidades. Según el autor, los campesinos se diferencian en muchos aspectos, pero es útil tipificarlos según su capacidad para responder a estrategias productivas, que es el resultado cultural y social de sus relaciones de trabajo y producción (Salgado Araméndez, 1995). También es importante distinguirlos según el tipo de recursos que controlan, las zonas en donde están presentes, los vínculos laborales en que se mueven, el rol de jóvenes y mujeres, los actores con los que abren relaciones, las formas de acción política y los cambios sociales comunales, entre otros (Salgado Araméndez, 2002). Es decir, implica reconstruir sus dinámicas a partir de las experiencias vividas y su cotidianidad.

Es importante señalar que, más allá de las teorías clásicas sobre el campesinado (Chayanov, 1990; Shanin, 1996) este grupo social existe, ante todo, como proceso dinámico, que va transformando sus hábitos con respecto a las relaciones que construye con el entorno colombiano. Dichas transformaciones están ligadas a los cambios de las relaciones económicas y de poder, las reconfiguraciones territoriales y la presencia de diferentes actores en el campo, que condicionan las respuestas del campesinado a los desafíos que la producción, la organización y los cambios culturales le plantean generación tras generación (Duarte, 2015).

No obstante estas transformaciones, el campesinado puede caracterizarse como aquel agricultor familiar (o trabajador/a agrícola familiar) que piensa en el suelo no solo como un bien productivo, sino también como parte de su patrimonio cultural (físico o simbólico) y que pertenece y forma parte activa de sus comunidades rurales (Forero Álvarez, 2013). Es decir, son “productores familiares agropecuarios para quienes sus unidades de producción

son al tiempo unidades de consumo, y cuya finalidad es la reproducción de la familia y la comunidad” (Forero, 2002 en Salgado Araméndez, 2004). Justamente, esta noción de la producción es lo que diferencia al campesinado con el empresariado capitalista agropecuario, pues la organización económica de una unidad de producción campesina está relacionada con la organización familiar, mientras que la producción de las familias capitalistas del campo se determina por el valor agregado del trabajo, la tierra y el capital invertido (Forero Álvarez, 2013).

Por su relación con la tierra, el campesinado representa, entonces, un grupo social cuya experiencia de vida está directamente ligada con la historia agraria del país (Bejarano, 1983), y con todo lo que ello implica: la inserción de las estructuras internacionales de producción y comercialización, la ampliación acelerada de la frontera agrícola, el conflicto armado, la presencia de cultivos de uso ilícito y el narcotráfico, entre otras (Fajardo, 2018). Por eso, el campesinado ha sido analizado, principalmente, desde el referente económico y político: “la característica de las prácticas agrícolas que implica una relación directa de las personas con la tierra es el elemento central de significación de la noción de campesinos” (Velasco Olarte, 2014, p. 35).

Sin embargo, esta dimensión política y económica de la identidad campesina implica también una configuración sociocultural que tiene que ver con las formas de producción campesina. La relación del campesinado con la tierra “refleja un proceso previo de socialización y de aprendizajes de elementos socioculturales que permiten construir una relación con el entorno y emplear técnicas pertinentes para contextos específicos, es decir, conocimientos concretos y situados” (Becerra Ostos & Rojas Guzmán, 2015, p. 44). Así, reconocer al campesinado como un grupo social específico implica rescatar los elementos económicos y políticos, que corresponden a su posición en el mundo agrario, como las dinámicas culturales y sociales que han desarrollado. En este apartado se muestran las particularidades económicas, políticas y sociales del campesinado que conforma la zona de reserva de Morales y Arenal y la forma en que este se relaciona con esas mismas dinámicas a nivel más macro.

4.2.1 Lo económico:

A grandes rasgos, los campesinos y campesinas de la ZRC tienden a diversificar sus actividades económicas, debido a la precariedad de los ingresos por la vía agropecuaria. Por

eso, estos campesinos han recurrido a trabajos temporales en transporte en moto o lancha, a abrir una tienda o un local y participar en convenios con agencias de cooperación internacional (para el caso de los líderes), así como la creación de negocios pequeños, diversos y esporádicos. No obstante, la principal actividad económica de estos campesinos y campesinas sigue siendo aquella relacionada con el campo, bien sea trabajando como jornaleros en tierras ajenas o dentro de sus mismas parcelas pequeñas. De hecho, están en constante búsqueda de alternativas para hacer de su producción agropecuaria un medio sostenible de ingresos.

La pesca, la agricultura de distintos tipos de productos y la pequeña ganadería son todas actividades que pueden desarrollarse por encontrarse en una zona que tiene ciénagas, ríos, sabanas y montañas, que hacen de Morales y Arenal una tierra fértil para la producción. Esta misma riqueza de recursos naturales, sin embargo, limita la cantidad de tierra disponible para la producción agropecuaria. En la parte alta de los municipios, se encuentra el área protegida de la Serranía de San Lucas, donde no se pueden titular tierras, mientras que la parte baja de los municipios, las sabanas, en las que se puede realizar alguna producción agropecuaria, o bien se inundan en épocas de invierno o se encuentran acaparadas por terratenientes. Por ende, de acuerdo con las entrevistas realizadas y los datos de entidades oficiales (ver Capítulo III), los campesinos y campesinas de Morales y Arenal no cuentan con la suficiente cantidad y calidad de tierra para producir y obtener ingresos de sus cultivos.

Esta misma diversidad en los recursos naturales ha generado su exclusión en cuanto a vías de acceso para servicios del Estado como salud (hospitales de segundo y tercer nivel) o educación superior, por ejemplo, así como para la comercialización de sus productos (Viloria-De La Hoz, 2009), vital para la reproducción de su actividad económica y cultural. En los municipios que conforman la ZRC no hay suficientes vías y las que existen se encuentran en mal estado; los tiempos para desplazarse se alargan y en algunas ocasiones, debido a las épocas de lluvia, es prácticamente imposible la movilización (ver Capítulo III). Esta situación, para los miembros de la zona de reserva, constituye un factor de aislamiento que limita su capacidad productiva y la posibilidad de movilidad social.

No obstante, esta convivencia con los recursos naturales también les ha permitido tener un conocimiento sobre sus ciclos y dinámicas; a entender en qué época del año es conveniente

sembrar y recoger los frutos; a adaptarse a las condiciones climáticas y a tener una consciencia sobre la importancia de cuidar ese entorno, pues de él derivan sus actividades productivas. Esto les ha permitido tener un conocimiento específico sobre las condiciones ambientales en las que viven, por lo que han aprovechado a su favor y constituye un sinónimo de riqueza.

“Nosotros aquí por lo menos en la parte ambiental estamos bien. Nosotros no nos hace tanto daño el sol, el sol caliente, pero nosotros tenemos aquí un ambiente bastante favorable, a orillas de la ciénaga, nos llega la brisa, tenemos unos espacios para digamos, lo que es la cría de los animales. Exactamente, me entiende. Somos ricos así en esa parte” (GF1-San Rafael).

A pesar de los pocos recursos con los que cuenta el campesinado de la ZRC para acceder y adecuar sus tierras, transformar la materia prima y comercializar sus productos, razón por la cual se ha visto obligado a diversificar sus actividades productivas, este campesinado está altamente monetizado y aprovecha sus recursos no monetarios para ser sostenible. Para Forero (2013), existe una creciente conexión entre los agricultores familiares y los mercados monetizados para productos, suministros, mano de obra y crédito, así como existe una elevada participación como compradores en una sociedad de consumo masivo. Es decir, el campesinado colombiano, a pesar de sus diferencias internas, permanece en contacto con los sistemas de mercado actuales (Forero Álvarez, 2013). De igual manera, el sistema de producción familiar del campesinado también incluye una dimensión *doméstica*, o no monetaria, en palabras del autor, dentro de las cuales se encuentran aspectos como el trabajo familiar, el uso de recursos naturales o el autoconsumo.

En el caso de los miembros de la ZRC, todos los miembros de la familia tienen un rol dentro de las actividades diarias del campo y su producción la usan para el autoconsumo. Por ejemplo, en una familia de Villa Noris, antes de ir al colegio los niños ordeñan las vacas y seleccionan los baldes que van unos para la casa y otros para el lechero que pasa en lancha todos los días por cada finca comprando litros que luego vende en el casco urbano. También, en otra familia en La Arcadia, la mujer recoge todos los días los huevos de las gallinas de su galpón para el consumo diario, y el resto los vende en el pueblo o por encargos, mientras que los hijos se encargan de recoger los frutos de los árboles que tienen para hacer jugos o postres.

Lo mismo sucede con el cultivo de la yuca y el plátano que se cosecha y recoge entre las familias miembros de las veredas, en los que se comparte tierras para el cultivo de quien le hace falta.

Además, pese a estar en una región alejada de los centros poblados y sus dinámicas económicas, el campesinado de la zona de reserva tiene discursos de *racionalidad económica*, como el ahorro y la inversión, y emprende acciones para crear empresa de su trabajo. En el caso de La Arcadia y Villa Noris, las asociaciones campesinas, incluyendo las Juntas de Acción Comunal, gestionan recursos y desarrollan proyectos para adecuar tierras, adquirir maquinaria y transformar la materia prima, con el fin de darle más valor a sus productos, sin cambiar su actividad tradicional. En el caso de Arenal, la organización con mayor presencia en las veredas y corregimiento es Comuarenal, con una larga trayectoria en el municipio (ver capítulo III), cuyo trabajo consiste en concentrar y distribuir los recursos productivos entre sus miembros, como maquinaria, asistencia técnica y semillas capital, por ejemplo, que ha permitido establecer relaciones.

“Nosotros también hacíamos nuestra propia gestión con otras entidades, con ministerios con el Fonpyme, que es el Fondo de las microempresas a través del Ministerio de Comercio, con la CCI Colombia, con el Ministerio de Agricultura logramos la implementación en campo de fondos rotatorios de ganadería, de piscicultura, de agricultura. Logramos formar, capacitar a las personas que hacían parte del proceso, agroecología, buenas prácticas agrícolas” (E6-Líder Comuarenal).

El campesinado también es consciente de los costos requeridos para poner en marcha su producción, como la compra de fertilizantes, pesticidas y herramientas, la mano de obra que se requiere (familiar o comunitaria) y el pago de transporte, así como los posibles ingresos que obtendría de su producto transformado. El acceso a créditos para proyectos productivos, la creación de microempresas, el afán por capacitarse y adquirir nuevas tecnologías en su quehacer, constituyen una parte esencial de los discursos de la población campesina de Morales y Arenal para mejorar la calidad de vida: *“lo que necesitamos para mejorar la calidad de vida es una microempresa o una empresa que dé empleo, de transformación de productos, de agricultura y piscicultura* (E3-Presidenta JAC Buenavista).

En San Rafael, por ejemplo, luego de que el deterioro de la ciénaga fuera inminente, 51 miembros de la comunidad se organizaron para construir unos estanques piscícolas en el corregimiento que sirvieran como un sustento alternativo que mantuviera relación con su actividad tradicional. Si bien este proyecto ha tenido varios fracasos y obstáculos desde que inició en 2001, debido a la falta de planeación y experiencia de los pobladores en trabajos colaborativos, “*la meta es hacer de esta unidad productiva una empresa (...) ya tenemos 7 producciones con derrotas y éxitos, pero seguimos adelante para decir algún día sí se pudo*” (El-Líder Asopasar).

De esta manera, el campesino y la campesina de la zona de reserva, son sujetos aislados de los centros poblados, dedicados al trabajo en el campo, principalmente, con tierra y medios insuficientes para realizar sus proyectos de vida, pero que están en permanente adaptación y transformación de sus condiciones. Una racionalidad que contradice el imaginario del campesinado como pobre y atrasado en las narrativas de desarrollo agropecuario y de las políticas impulsadas por los gobiernos nacionales para traer el crecimiento económico al país (Salgado Araméndez, 2002).

4.2.2 Lo político

La relación entre el campesinado y el Estado se ha caracterizado por *momentos de alianzas*, en los que el Estado ha emprendido acciones concretas para beneficiar al campesinado frente a los terratenientes, pero que no son constantes ni estructurales; son *momentos* precisamente porque no han perdurado en el tiempo, ni han estado exentos de subordinación (Rubio, 1996 en Salgado Araméndez, 2004). Dichos *momentos de alianzas* permitieron la funcionalidad de las economías campesinas en los procesos de modernización económica del país, dentro de los cuales se rescatan las reformas agrarias impulsadas en el siglo XX, las regulaciones sobre aparcería y arrendamientos y las políticas dirigidas como como Desarrollo Rural Integrado (Salgado Araméndez, 2004).

No obstante, en términos generales, la institucionalidad y el sistema político colombiano han sido ampliamente excluyentes con una buena porción de los grupos sociales que conforman el país, aunque haya mantenido una democracia continua durante más de un siglo de historia (Gutiérrez Sanín, 2014). Las fuerzas políticas del país han mantenido por fuera de las esferas del poder a buena parte de la población rural, marcada por un sesgo de clase, racial y regional,

y sin capacidad de decisión frente a las coyunturas políticas y económicas, entre ellos el campesinado. De hecho, la sociedad colombiana ha tendido a invisibilizar al campesinado como sector social específico tanto como ciudadanos, como su importancia social y económica, y especialmente su organización autónoma y sus derechos colectivos (Mondragón, 2002).

Para el caso de Morales y Arenal, si bien esta población reconoce los esfuerzos de distintas administraciones por atender sus necesidades e impulsar proyectos de diversa índole para su beneficio, como la misma creación de la ZRC, también son conscientes que dichos esfuerzos son aislados, sin continuidad, y que no buscan transformar sus condiciones de vida. Esta sensación del campesinado frente al Estado es lo que denomino acá como una *relación de doble vía*. Por un lado, es un campesinado que reclama a los gobiernos de turno, y al Estado en general, el histórico abandono económico y social al que ha sido sometida su región. Para los miembros de la ZRC, dicho abandono se manifiesta, principalmente en la falta de oportunidades económicas para producir, el precario acceso y calidad a servicios y bienes públicos como infraestructura vial, la falta de acceso a educación y salud, las constantes oleadas de la violencia que los golpea por ciclos y la falta de garantías para permanecer en el territorio.

Como se puede apreciar en las siguientes citas, este sentimiento de abandono, que dista de ser solo una percepción (ver Capítulo III). se explica por su condición de campesinos y campesinas. Es decir, parte del reclamo de esta población se relaciona con el hecho de que por ser campesinos el Estado y los distintos gobiernos los han excluido sistemáticamente de las políticas sociales y económicas. En este sentido, las exigencias que le hacen al Estado surgen desde su condición de campesinos, desde su vida en el campo y lo que necesitan para permanecer en su territorio.

“O sea, en los municipios del sur de Bolívar es raro, extraño, que haya luz, lo común es que se vaya. Entonces eso lo necesita el campesino. Hoy que supuestamente estamos en un mundo de desarrollo. El tema de las vías, o sea todo eso lo necesita el campesino para estar allí. Pero necesita también ese acompañamiento técnico, que es lo que se ha venido haciendo desde... esa es la pelea que tenemos con el gobierno” (E7-Miembro Comuarenal).

“Aquí nos compró el Incoder la tierra, y nos soltó como que sueltan una manada de marranos en un rastrojo, porque no nos volvieron a dar nada. Entonces de buen corazón estamos acá, porque por eso van a los grupos al margen de la ley, decepcionados, porque no tienen cómo trabajar, porque si trabajaban aquí, lo que hacían se perdía, el agua lo acababa. (...) Aquí hay gente que tiene tierras sin titular, y para titularle un pedacito de tierra a uno, son miles de problemas aquí, porque aquí hemos tenido la ANT, la hemos traído aquí. Una doctora de la ANT para que nos titule y ella dijo: esto no es así de hoy para mañana, y le ponen como muchas trabas al campesino para que tenga su pedacito de tierra que sea propio, que sea de él” (GF3-Villa Noris).

La otra cara de la moneda de esta relación con el Estado, es que el campesinado de la zona de reserva no espera ayudas de los gobiernos y administraciones nacionales, sino que pretende y desea depender de su propio trabajo. Aquí es importante resaltar la palabra *ayuda*, pues si bien el campesinado hace constantes reclamos sobre su situación de abandono y solicita que se le atiendan sus necesidades para mejorar su calidad de vida, no lo hace refiriéndose a una asistencia estatal, sino como un deber o una deuda que la nación tiene con esta población. Durante el trabajo de campo fue posible escuchar en repetidas ocasiones el descontento que el campesinado tiene frente las condiciones de vida de Morales y Arenal, por lo que exige al gobierno una transformación de las mismas. Sin embargo, esta narrativa corresponde a la insatisfacción por no tener las condiciones mínimas para que ellos mismos, por sus propios medios, puedan culminar y consolidar sus proyectos de vida. Lo anterior permite ver un sentido de *reclamo social* frente al Estado, pero no de dependencia frente a él:

“Le dijimos a Natalia que aquí hubo una época que nosotros nunca necesitábamos alcaldía, nunca necesitábamos gobernaciones, para esas cuestiones de un dolor de cabeza, de una fiebre, de una gripa, nunca lo necesitamos. Pero ¿por qué no lo necesitábamos? Porque en la ciénaga lo teníamos todo, todos los días diario para el sustento y para cualquier cosita que se nos pasara, una enfermedad, teníamos para ir a Arenal, teníamos para ir a

Aguachica, a costa del bolsillo de uno, no a costa de los alcaldes del municipio
(GF1-San Rafael).

“Pero si no tenemos con qué, o sea, no tenemos cómo ganar de pronto plata para poder invertir en nuestra calidad de vida. Porque esperar que el gobierno nos la haga, para nosotros nunca va a llegar la plata...porque con esa corrupción que hay. La plata alcanza para mandar primero hacer los afiches, las camisetas, los pasacalles, que es lo que mandan por acá” (GF2- La Arcadia).

Paralelamente a esta relación con el Estado, o mejor dicho, en medio de la relación se encuentra la historia de violencia que ha marcado la vida del campesinado colombiano. En Colombia, a pesar de contar con un régimen democrático prácticamente ininterrumpido por décadas, se desató durante 100 años de historia (1910-2010) una violencia dirigida especialmente aunque no únicamente contra el campesinado (Gutiérrez Sanín, 2014). Una violencia que no solo se manifestó en el exterminio hacia esta población, sino también en las prácticas de desplazamiento y despojo de sus tierras que han sucedido desde las primeras décadas del siglo XX (LeGrand, [1988] 2016).

Esta particularidad de la historia campesina con respecto a la violencia, tierra y la permanencia en su territorio también constituye un punto central de la narrativa de los miembros de la ZRC frente a sus condiciones de vida. Las demandas del campesinado de esta región frente al Estado están relacionadas con la desprotección institucional que los expone a las oleadas de violencia que se viven en Morales y Arenal, lo que genera una sensación de constante incertidumbre y de vulnerabilidad para el campesinado de la zona de reserva. Esta narrativa de violencia/incertidumbre es especialmente importante porque parte de sus demandas sociales y económicas se justifican a partir de su condición de víctimas:

“Esto era de mis abuelos, de mis papás y ahora creo que va a ser de mis hijos, con el favor de Dios si lo logro, si no me sacan de aquí. Entonces me considero campesina y con orgullo lo hago, a pesar de que hayan asesinado... porque no se sabe si llegaremos a viejos, no se sabe. Todo es indeciso. Si siguen esas leyes del Estado, pues es complicado sobrevivir en el campo, pero mientras se pueda, seguimos en la lucha” (E8- Líder Asohonda).

“Y otra cosa es que nosotros somos desplazados, nosotros somos desplazados, y de donde salimos perdimos todo. Y nos traen aquí a esta finca y de pronto se pierde todo, porque cada vez que hay una inundación, se pierde lo que tenemos y todos son desplazados, tenemos cartas de desplazados, tenemos los derechos, entonces que nos indemnice el Estado, si me entiende. El Estado tiene que indemnizarnos” (GF3- Villa Noris).

En el caso particular de los habitantes de Villa Noris, el desplazamiento por razones de conflicto y su posterior reubicación los dejó en una situación más precaria que la que tenían en sus antiguos predios, pues las tierras de su vereda actual se inundan y con el agua se pierden sus cultivos. Justamente por haber sido desplazados, los habitantes de esta vereda acuden a esta categoría de víctimas para exigir derechos y tramitar sus demandas socioeconómicas. Dicho reclamo radica, en parte, en la incapacidad del Estado por hacer legible la categoría de campesino (Ángel-Botero, 2016). Según la investigadora, la incapacidad de leer lo campesino en los distintos mecanismos de gobierno ha hecho que dicha identidad sea inútil, y que, por lo tanto, estas poblaciones negocien nuevas identidades ciudadanas, entre ellas la categoría de víctimas, pues a través de ella se tiene acceso a una serie de derechos. En las sociedades contemporáneas, las políticas de identidad se han convertido en el mecanismo para que movimientos sociales puedan ser reconocidos por el aparato normativo, por lo que, lo que pareciera la creación de una nueva identidad (víctimas) es en realidad un llamado al ‘derecho a tener derechos’ (Ángel-Botero, 2016).

4.2.3 Lo social:

En el plano social, las relaciones de los pobladores se dan principalmente a nivel veredal. Aunque en algunas veredas y corregimientos de Morales y Arenal existe la figura de ZRC que los agrupa en un solo espacio geográfico delimitado, en la práctica los ejercicios organizativos están anclados al *núcleo inmediato*. Es en ese *núcleo inmediato* donde existen relaciones de solidaridad y cooperación entre vecinos y familiares que viven en la vereda, pues son personas que han estado allí por generaciones, lo que genera una sensación de seguridad y tranquilidad. Dentro de las veredas y corregimientos existen relaciones fraternas y de colaboración, en la medida que se reconocen las necesidades mutuas y que existe confianza para encomendar cualquier tarea. Los niños se cuidan y protegen entre vecinas, en

caso que la madre no esté presente, se intercambian alimentos y otros productos en caso de que otro vecino o familiar no lo tenga y se posibilita el trabajo, en la medida de lo posible.

“Y hay la solidaridad del que tiene tierra deja que el otro haga el cultivo, aunque sea de media hectárea de maíz, para que siembre.” (GF2-La Arcadia)

“Muchos que no tienen tierras, si no que... hay personas que la tienen y ellos quieren trabajar les piden el favor que les presten por tantos meses una o dos hectaritas de monte para sembrar el maíz” (E3-Presidenta Buenavista)

“Me gusta vivir aquí pues una parte aquí por lo sano, porque de todas maneras aquí en lo que es esta parte, digamos se respetan las cosas. No tenemos el problema que se escuchan en otros alrededores que uno sale y que todo se llevan, que se han presentado, pero se ha controlado un poco, entonces siempre vivimos en paz, no se oye tampoco digamos conflicto, en la comunidad casi todos vivimos cordialmente” (E10-Presidente JAC Punta de La Cruz)

Si bien las relaciones comunitarias pueden ser cordiales entre miembros de una misma vereda, esto no implica necesariamente que la organización se dé de igual manera. Como se ha mencionado anteriormente, el campesinado colombiano se caracteriza porque la familia representa un elemento central de su economía, y por tener fuertes lazos con la comunidad en la que vive, al punto que en algunas ocasiones parte de las decisiones económicas individuales pasen por el filtro de la comunidad (Forero Álvarez, 2013). De hecho, el sujeto campesino colombiano toma como su principal fundamento organizativo y de ordenamiento de su territorio las relaciones vecinales y veredales de cooperación (Becerra Ostos & Rojas Guzmán, 2015; Duarte, 2015). A pesar de ello, el tipo de relaciones comunitarias son diferentes para cada comunidad campesina, incluyendo su nivel organizativo, pues estas dependen de la configuración histórica de su territorio, el cual se define según las relaciones de carácter productivo, socioculturales, políticas, económicas y ambientales en las que se encuentre la vereda.

Tal diferencia se presenta en el caso del corregimiento de San Rafael. A pesar de que en dicho corregimiento existen Juntas de Acción Comunal, que son responsables de tramitar las demandas de la comunidad y cuentan con la legitimidad de la misma, la constitución de

organizaciones productivas entre los mismos habitantes ha tenido bastantes obstáculos y, según comentan algunos de sus miembros, ha sido traumática. La creación de Asopasar como una organización que se dedica al sostenimiento de tanques piscícolas no ha podido salir a flote, porque, entre otros motivos, más de la mitad de sus miembros iniciales se han retirado de ella y no cuenta con suficiente apoyo en la comunidad.

Históricamente, la pesca en San Rafael ha sido una actividad productiva de carácter individual que no requiere mayor inversión, *“pues la ciénaga lo daba todo”* (E2- Líder Asopasar). Solo era cuestión de salir en una canoa a pescar y los ingresos que se obtuvieran de ello, dependían únicamente del trabajo de cada pescador, del tiempo que estuviera navegando por la ciénaga y las herramientas que usara para ello. Por eso, el campesinado de este corregimiento no está acostumbrado a invertir tiempo y dinero en un proyecto para la producción, y menos a hacerlo de manera conjunta. El mantenimiento de los tanques piscícolas implica trabajar colaborativamente para alimentar los peces, construir tuberías de desagüe, establecer conexiones eléctricas, construir una cerca y una malla anti-pájaros, entre otras cosas, que se necesitan para mantener y sacar provecho del criadero de peces, cosas que se hacían naturalmente en la ciénaga. Por eso, el reto más grande de Asopasar es que *“sus socios cambien de cultura, pues para ellos es sacar, vender y gastar, y acá es planear, invertir y administrar”* (E2-Líder Asopasar).

No obstante, estas prácticas y las relaciones de producción arraigadas en el territorio, en este corregimiento, así como en el resto de la zona de reserva campesina existe un capital social reconocido por sus miembros. Para los campesinos y campesinas, la organización y, en especial, el apoyo en la comunidad es necesario si se quieren conquistar derechos y transformaciones en las condiciones económicas y sociales del territorio. Aquí es importante resaltar la noción de colectividad del territorio campesino, donde existen relaciones cercanas y de apoyo mutuo. A pesar de tener diferencias internas tanto de carácter productivo, como de problemáticas sociales y condiciones físicas del territorio, en todas las veredas visitadas y a lo largo de las discusiones realizadas fue posible evidenciar ese carácter comunitario en las relaciones de los pobladores. De hecho, los mismos habitantes de la ZRC reconocen la capacidad de gestión y trabajo comunitario como una de sus principales fortalezas.

“Porque si hablamos de capacidad, hablamos de pronto de gestión, si hablamos de cosas, podemos ser ricos, podemos ser ricos por lo menos de gestión, podemos ser ricos por lo menos en capacidad de líderes, podemos ser ricos de pronto en otras situaciones” (GF1-San Rafael)

“Entonces, lo importante es cómo amarra uno los proyectos, o cómo amarra uno lo que es trabajar, trabajar en común porque todo eso es lo que queremos sembrar. Lo importante es que nosotros aprendamos muchas cosas y que los jóvenes aprendan más cosas que en el caso de nosotros, porque la batuta les va quedando a ellos” (GF3- Villa Noris)

En la ZRC de Morales y Arenal existen, pues, numerosas organizaciones de carácter local que se encargan de trabajar por los problemas más inmediatos de su comunidad. No obstante, la declaración de esta área como una zona de reserva impulsó la creación de una sola asociación que reuniera y representara a todas las veredas y corregimientos, incluyendo la cabecera urbana de Arenal, que se encuentran dentro del área delimitada (ver Capítulo III). La importancia de esta iniciativa es que constituye un ejercicio que permite el encuentro de varias poblaciones que por falta de vías para la comunicación han estado aisladas unas de las otras, y les permite a los pobladores pensar el territorio de manera integral y tratar las problemáticas conjuntamente. Es decir, se trata de unir las experiencias de carácter local y de *núcleo inmediato* a un plano municipal que permita un cierto nivel de coalición y alianzas entre todos los miembros de la zona. De hecho, gracias a la zona de reserva y la creación de Azocamsur, muchos líderes han podido conocer por primera vez las otras veredas que conforman la zona de reserva y dialogar acerca de sus problemáticas.

Si bien no todas las organizaciones se encuentran afiliadas a Azocamsur y existen diferencias en cuanto a la forma en que se debe manejar la zona de reserva, como es el caso de Comuarenal, la visión del territorio de estas organizaciones sigue siendo la misma. Las organizaciones y la población en general tienen en común establecer una agenda para el bienestar del campesinado y crear las condiciones necesarias para que este territorio pueda ser reconocido como tal. Para todos los habitantes, la importancia de la creación de una zona de reserva campesina radica en el valor simbólico que esta figura le da al territorio,

especialmente, porque reconoce un espacio específico para esta población y permite rescatar las costumbres y tradiciones del trabajo campesino: la producción de alimentos.

“Si ellos por ejemplo aprendieron a ejecutar el proyecto de cerdo, por lo menos en el caso de ellos, allá hay varios, está el de pollo, de piscicultura, el de ganadería y muchos más de agricultura, sembrar piña, o sea cultura que está acabada y no la vemos en la región y queremos incluirla en el proyecto, moverla, para que no se acabe y esa cultura sea la que siga rotando esta vez culturas antiguas. Todo esto hay que recogerlo otra vez, cómo cultura antigua, cómo es la siembra antigua, porque como decían ellos: ustedes conocen mucho, nosotros lo que somos es portadores y ustedes conocen más que nosotros porque ustedes sí conocen la tierra, nosotros no la conocemos” (GF3- Villa Noris)

“Entonces nosotros concebimos la ZRC como el espacio donde los campesinos y las campesinas discuten sobre su territorio, las necesidades, pero también se plantean propuestas que vayan en beneficio de esas mismas comunidades (...) La reserva campesina de Morales y Arenal es un proceso que, aunque esté ubicado allí es un proceso regional, no es solamente por mirar el pedacito allí. Entonces es una dinámica regional que eso va, es parte de esa acumulación de luchas permanente que se ha vivido en la región. Un acumulado organizativo socialmente, un acumulado político, un acumulado productivo” (E7- Miembro Comuarenal).

Así, los miembros de la ZRC son, ante todo, productores de alimentos. Si bien en la zona de reserva existen otro tipo de actividades como el comercio y el transporte, los campesinos y campesinas se dedican principalmente a la pequeña ganadería, agricultura y pesca, por lo que sus demandas y acciones que emprenden para mejorar su calidad de vida se relacionan todas con la economía campesina. Las distintas organizaciones de la zona de reserva se preocupan por crear y financiar proyectos productivos que potencien la economía campesina y, ante las condiciones adversas como la construcción del jarillón, los bajos precios del arroz y las constantes inundaciones, el campesinado crea nuevas estrategias y mecanismos para continuar ejerciendo su actividad económica tradicional. En San Rafael se constituyó Asopasar y se crearon los tanques piscícolas para mantener activa la pesca; en La Arcadia,

Asohonda y Azocamsur han concentrado sus esfuerzos por buscar un crédito que les permita financiar la segunda parte de la construcción del molino; y en Villa Noris, los miembros de la vereda iniciaron el proyecto de pequeña ganadería después de haber sido desplazados de la anterior vereda donde se dedicaban exclusivamente a la agricultura.

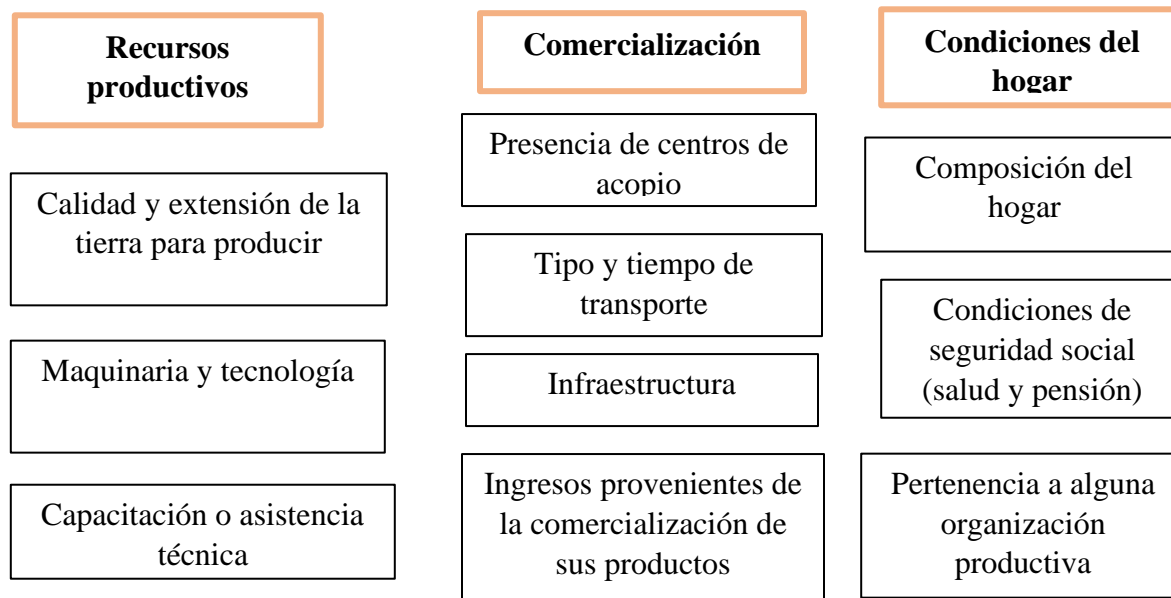
4.3 Las dimensiones de la pobreza: algunos aportes a la medición desde las vivencias campesinas

La mayoría de los campesinos y campesinas que viven en esta zona de reserva nacieron en Morales o Arenal, o en los municipios aledaños como Simití o Santa Rosa. Muy pocos han llegado de otras partes del país para instalarse en la zona, especialmente en el área rural. Tal vez en las cabeceras, sobretodo en Morales, se encuentren foráneos, pero en las veredas y corregimientos, en especial en los más alejados de los cascos urbanos de la zona de reserva, es común encontrarse con personas que han vivido allí de generación en generación, se conocen, conocen a sus familias y tienen una trayectoria que sus vecinos reconocen, por lo que anhelan terminar allí el resto de sus días. El proyecto de vida de estos campesinos está en vivir en el campo, tener un pedazo de tierra en el que su familia pueda vivir también, rodeados de la naturaleza, con la comunidad que siempre los ha acompañado: *“claro imagínese usted sabe que es tener lo propio, donde tiene sus matas, donde puede sembrar, donde puede cuidar donde su casa es propia (...) entonces cuánta importancia no sería al menos tener un pedazo de tierra donde edificar su casa”* (E10- Presidente JAC Punta de la Cruz).

Pero para que esto suceda, el campesinado de esta región requiere contar con infraestructura o acceso a servicios y seguridad social que le permitan vivir dignamente en el campo, pero sobretodo, tener los medios para que sus actividades económicas les provean lo suficiente para vivir tranquilamente allí. Justamente, esta falta de condiciones para culminar los proyectos de vida es lo que el campesinado relaciona con la pobreza, a saber, la imposibilidad de obtener una remuneración económica acorde con su trabajo como productor de alimentos y no tener las condiciones necesarias para hacerlo. Por eso, aquí se propone asociar la pobreza con las condiciones o elementos necesarios para producir alimentos y los ingresos que esta actividad genere. La gráfica 3 recoge esas dimensiones que son importantes para que el

campesinado de esta región pueda culminar su proyecto de vida en el campo, según las percepciones de la misma población.

Gráfica N° 3: Dimensiones de la pobreza campesina



Los tres primeros cuadros constituyen las dimensiones relacionadas directamente con la pobreza y los cuadros que se encuentran debajo de ellas son las variables con las que se pueden determinar dichas dimensiones. Los recursos productivos y la comercialización se refieren a las condiciones en las que se da la producción alimentaria, mientras que las condiciones del hogar representan la forma en que los hogares rurales campesinos responden a dichas condiciones de la producción.

Al nombrar como constitutivas de la pobreza estas dimensiones y sus respectivas variables, se pueden relacionar, por ejemplo, los ingresos que perciben los hogares frente a esta condición y los gastos en los que incurren para mantenerla; o el transporte, maquinaria y tecnología con los que cuentan los hogares para producir. Aquí también se desagregan variables importantes de la pobreza rural como el acceso a tierra, identificada tanto en la literatura (ver Capítulo I) como en las entrevistas y grupos focales, a través de la distinción entre calidad y extensión de la misma. Esto debido a que no es suficiente con tener un pedazo de tierra si esta no da para producir, por lo que es necesario pensar en las condiciones que se requieren para que la tierra pueda constituir un sustento para las familias. Así, es posible identificar en qué condiciones se da el trabajo campesino y cuáles son sus carencias, al tiempo

que permite focalizar los escenarios en los que es más débil la producción y comercialización para sostener a los miembros del hogar campesino.

Desde luego, dichas dimensiones y variables propuestas para medir la pobreza no desconocen otros instrumentos para medir la misma, sino que se plantean aquí como un insumo para complementar esos mismos instrumentos. De hecho, si bien aspectos como vivienda y acceso a servicios públicos domiciliarios fueron relacionados con la pobreza durante las conversaciones con los habitantes de la zona de reserva, estos no se incluyeron en este gráfico, puesto que ya se encuentran integrados dentro de las mediciones estándar de pobreza en el país. En este sentido, este gráfico pretende resumir aquellas dimensiones que no se encuentran tradicionalmente en los índices de pobreza, pero que son constitutivos de esta condición para la población campesina del sur de Bolívar.

Ahora bien, estas dimensiones no pueden determinar la condición de pobreza de este grupo social, si no se acompañan de una caracterización del campesinado. Por eso, en la Tabla 7 se presenta una propuesta para distinguir el tipo de actividades productivas en las que se desempeña el campesinado y sus características. Si bien esta tabla no constituye una matriz para la medición de la pobreza, sí permite agrupar los elementos que hacen parte de la vida del campesinado como productor de alimentos. En ella se proponen algunas preguntas con el fin de operacionalizar las variables que componen las dimensiones de la producción de alimentos.

Tabla N° 7: Caracterización del campesinado como productor de alimentos

Dimensiones de la producción		Preguntas asociadas a las dimensiones
Recursos productivos	Trabajador pecuario	<ul style="list-style-type: none"> - ¿Qué animales tiene? - ¿Los animales son de propiedad suya? - ¿Los animales que cría se encuentran en tierra propia? ¿Tiene un título registrado a nombre suyo o de su cónyuge? - ¿Cuál es la extensión de su tierra? -¿Cría animales de otras personas? - ¿Qué productos obtiene de la cría de animales? (carne, leche, huevos, etc.) -¿Cuenta con maquinaria para la cría de animales?

	<p>Agricultor</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ¿Cultiva, cosecha o siembra algún alimento? ¿Cuál? - ¿Cultiva, cosecha o siembra algún otro producto? ¿Cuál? - ¿Ese alimento/producto lo cultiva, siembra o cosecha en tierra propia? - ¿Cosecha, cultiva o siembra en tierra ajena? - ¿Tiene un título registrado a nombre suyo o de su cónyuge? - ¿Cuál es la extensión de su tierra? - ¿Cuenta con maquinaria para transformar sus productos? - ¿Cuenta con tecnología para transformar sus productos? Es: prestada, arrendada, propia, de alguna organización - ¿Ha recibido capacitación o asistencia técnica? (rango de tiempo donde el mínimo es más de 5 años y máximo un mes)
	<p>Pescador</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ¿Desde hace cuánto se dedica a la pesca? (rango de años?) ¿Dónde pesca? (río, ciénaga, estanque, caño, entre otros) - ¿Qué animales pesca? - ¿Con qué frecuencia sale a pescar? - ¿Cuánto pescado recoge? - ¿Qué herramientas usa para pescar? - Las herramientas son propias, prestadas, de una organización productiva, de un gremio o de una entidad pública - ¿Desde que se dedica a esta actividad, pesca la misma cantidad? - ¿De qué depende la variación? (condiciones climáticas, herramientas disponibles, contaminación del recurso hídrico, inversión en los estanques) - ¿Ha recibido capacitación o asistencia técnica? (rango de tiempo donde el mínimo es más de 5 años y máximo un mes)
<p>Comercialización</p>	<p>Centros de acopio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ¿Dónde comercializa sus productos? - ¿Tiene un comprado fijo? (intermediario, encargo, tiendas, etc.) - ¿Con qué frecuencia comercializa sus productos? - ¿Cuántos ingresos obtiene por comercializar sus productos? ¿Tiene un centro de acopio en la cabecera urbana de su municipio? - ¿Puede comercializar sus productos allí?

		<ul style="list-style-type: none"> - ¿Tiene un centro de acopio en algún municipio aledaño al suyo? - ¿Puede comercializar sus productos allí? -¿Comercializa sus productos en esos centros de acopio?
	Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> -Califique el estado de las vías para transportar los productos: bueno, regular, malo - ¿Qué medio utiliza para transportar sus productos? -¿Cuánto tiempo se demora en transportar sus productos? - ¿El transporte que utiliza para transportar sus productos es de su propiedad? -¿Cuánto es el costo de transportar sus productos? (Intervalo del costo de transporte)
Condiciones del hogar	Destinación de la producción	<ul style="list-style-type: none"> - ¿Transforma su producto? (individualmente; a través de una organización/asociación productiva) - ¿Vende la materia prima? -¿Vende la transformación del producto? - ¿Consume la materia prima? -¿Consume la transformación del producto? - Proporción de lo que vende y consume para materia prima y transformación
	Relación ingresos y gastos	<ul style="list-style-type: none"> - ¿Lo que produce le da ingresos? (Intervalo de ingresos por semana) - ¿Cuántas personas componen su hogar? - ¿Cuántos miembros de su familia mantiene? - ¿Cuántos miembros de su familia trabajan con usted en la producción? - ¿Cuántas personas externas a su familia trabajan con usted? - ¿Necesita insumos para la producción? (por ejemplo herbicidas, alimentos etc.)
	Pertenencia a organizaciones productivas	<ul style="list-style-type: none"> -¿Pertenece a alguna organización productiva? -¿Qué papel ocupa en la organización? -¿Desde hace cuánto? -¿Qué hace la organización productiva? Presenta proyectos productivos, acceso a crédito, presta maquinaria, capacitación -¿Considera que la organización es importante para la producción y comercialización?
	Seguridad social	<ul style="list-style-type: none"> -¿Desde qué edad trabaja? ¿Está afiliado a algún seguro de salud? -¿Aporta a pensión?

Las dimensiones, variables y preguntas que las operacionalizan permiten, por un lado, hacer una distinción conceptual del trabajo en la producción de alimentos de otro tipo de oficios y profesiones con las que se mide el empleo y desempleo en el país. Y por el otro, rescatan la importancia de analizar estas dimensiones de forma integral, pues el trabajo y lo que se necesita para realizarlo está directamente ligado con los ingresos que se obtengan de ello. Si bien estas distinciones pueden no ser representativas para todo el campesinado del país, sí son útiles para conceptualizar elementos claves de las condiciones del campesinado colombiano.

Como bien se ha mencionado, la noción de pobreza está relacionada con la imposibilidad de obtener una remuneración económica acorde con el trabajo del campesinado en la producción de alimentos, por lo que es importante ser explícitos en nombrar dicho trabajo como un tipo de ocupación específica. En primer lugar, porque no es lo mismo trabajar como agricultor, bien sea en la industria agraria que produce materia prima para la transformación de productos como etanol y aceites, o de pequeñas empresas dedicadas a la cosecha, que producir alimentos para el autoconsumo y la seguridad alimentaria del país, los cuales son gestionados por los mismos campesinos a través de cooperativas y organizaciones sociales comunitarias.

“Entonces la enfermedad sí la tenemos aquí porque lo que hacemos se nos pierde y pues, así como se ha hablado de la muralla o de algo pues ya volvemos a trabajar. Porque nosotros lo que sabemos es eso, sembrar yuca y maíz, porque no sabemos hacer más nada” (GF3-Villa Noris).

En segundo lugar, porque las distintas ocupaciones en el sector rural también pueden constituir un indicador de pobreza. La pluriactividad de los hogares campesinos, que están involucrándose cada vez más en una variedad de actividades no agropecuarias como comercio, turismo, manufactura o transporte, por ejemplo, permiten la supervivencia del campesinado, pero no mejoran sus condiciones de vida, pues no se transforma el contexto de inequidad agraria (Kay, 2007). De hecho, un estudio sobre las políticas de desarrollo rural en Ecuador muestra que “en la medida en que el campesino era más pobre, su actividad se diversificaba, al igual que los ingresos y que se trataba no solo de una estrategia temporal sino estructural de la sociedad rural” (Martínez Valle, 2007, p. 58). Tal situación es

importante pues los ingresos en el sector agropecuario son bajos y los extra prediales constituyen una fuente importante de ingresos en los hogares campesinos del país (Leibovich et al, 2006). Además, porque en la ZRC esto se percibe como un problema:

“Entonces para que los hijos de uno... yo tengo dos hijos por fuera y el mayor que ya volvió, que de pronto necesitan tener y también migrando, jornaleando, el día a día, hasta lavar ropa, trabajando en lo que salga por ahí, cualquier cosa, porque el empleo es mal, mal. De pronto nosotros tenemos empleo porque los padres de familia acá tenemos las parcelitas, pero tienen que trabajar ellos y tenemos que trabajar nosotros, no alcanza” (GF3-Villa Noris).

“Fijo, fijo no nada. Por lo menos en el caso de él es un trabajo que tiene fijo, pero tampoco es que sea fijo porque no tiene un contrato o sea trabaja temporalmente (...) De empleo por ahí ganado, la gente que busca de vaquería, pero eso no son sueldos compensables con digamos, con el trabajo. Bueno y aquí a la mayoría de las personas por el caso un trabajo fijo, la Ciénega es la que los salva y eso en un tiempo cuando hay pescado porque aquí pasan unas necesidades unas personas” (E10-Presidente JAC Punta de la Cruz).

Ahora bien, en cuanto a la integralidad de los indicadores, también es necesario pensar la relación de los ingresos con el tipo de trabajo mencionado, así como otros factores que son determinantes para la producción agropecuaria de alimentos, como maquinaria o asistencia técnica. Lo que se busca aquí es encontrar elementos y dimensiones que sirvan para cuantificar específicamente las condiciones del campesinado como productor de alimentos, cruzando variables propias de su actividad campesina como con aquellas de la cuestión agraria y el sector rural, como la distribución de la tierra y la inclusión del campesinado en la toma de decisiones, tal como se propone en la tabla 7.

Ya la literatura sobre pobreza rural (ver Capítulo I) ha hecho importantes avances acerca de la comprensión de este fenómeno y los factores que inciden en él. A nivel macro, se destacan políticas económicas neoliberales como los Tratados de Libre Comercio que permiten el ingreso de alimentos producidos en otros países a bajos precios y que entran a competir con los del campesinado (Forero Álvarez, 2002; Kay, 2015; Salgado Araméndez, 1995), así como la falta de políticas redistributivas que sean acordes con el crecimiento económico (Sarmiento

et al, 2005). Pero también, dicha literatura resalta a los activos públicos y privados con los que cuenta un hogar del sector rural para vivir sin necesidades en el campo. Lo que incluye maquinaria y tecnología suficiente, asistencia técnica, etc., en cuanto a los activos privados, e infraestructura, centros de acopio y acceso a servicios en materia de activos públicos (Leibovich et al, 2006; Tobasura et al, 2013; Argüello & Zambrano, 2006). Todos elementos que se relacionan con la sostenibilidad de la economía campesina y que constituye un elemento de vital importancia para la noción de pobreza de estas comunidades.

Tabla N° 8: Sustento de las dimensiones según las percepciones del campesinado

Grupo focal o entrevista	Citas
E7-Miembro Comuarenal	<p><i>Entonces todo ese tipo de cosas, o sea, lo que necesita hoy la gente para producir en el territorio, <u>para no estar pensando en economías extractivas sino economías productivas, tiene que ser integral, una medida integral de mucha participación en lo económico</u> (...)</i></p> <p><i>Entonces no ha habido una propuesta sólida que permita que el campesino tenga unas mejores condiciones de vida, <u>que haya una mejoría de ingresos, que pueda mejorar las condiciones de vida de la familia, y que pueda establecerse y posesionarse más en su producción campesina, porque el apoyo es muy precario. (...) El gobierno le facilita un proyecto, pero si no le presta asistencia o acompañamiento técnico, eso no va a ningún lado, porque el campesino lo necesita, entonces cuando la gente no tiene conocimiento ni ese tipo de cosas</u></i></p>
E11- Vicepresidente Asocamzur	<p><i>“Y yo pienso que ahí lo que falta es que el gobierno mantenga esas políticas a favor del campesino, cuál sería <u>comercialización de los productos agrícolas que el campesino siembra</u>. Y eso para qué, oiga, cuando hablamos de comercialización es para que <u>le sostengan un precio en los centros de acopio</u>”</i></p>

E4- Presidente Asojuntas	<i>“Lo interesante aquí es abrirles comercio a los productos, ese es otro sector que falta aquí. <u>Aquí ojalá que en Aguachica hubiera un abasto, un corabasto, un centro de comercio y que venga y le den inclusión</u>”</i>
E2- Presidenta JAC Paredes de Ororia	<i>“<u>Conseguimos la tierra alquilada</u> porque tierras para trabajar hay lo que pasa es que los dueños no la trabajan y <u>los que la quieren trabajar no tienen en dónde trabajar, porque tierras hay, tierras que no se hunden. Entonces pues la primera si hubiera una tierra para la gente porque hay muchos que les gusta trabajar, a pesar de que no tienen ellos trabajan, <u>les gusta trabajar, pero tienen que conseguir tierras arrendadas o tierras prestadas, eso entonces ya lo que les va a quedar para ellos tienen que pagárselo al dueño de la tierra porque no lo tienen</u></u>”</i>

Así, la integralidad en la comprensión de la pobreza, que relaciona la producción de alimentos como un trabajo con los ingresos que de ella se derive, es pensar en las dimensiones que son relevantes para el campesinado para que pueda vivir digna y tranquilamente del y en el campo para poder contarlas, cuantificarlas y medirlas. Pero, además, es importante caracterizar y distinguir la forma en que dichas actividades productivas se llevan a cabo. El papel de la comunidad y de las organizaciones sociales del campesinado en la producción de alimentos es vital, pues, para el caso de la ZRC, a través de asociaciones como Comuarenal, Asohonda o Asopasar, se tramitan las demandas productivas y sociales. Por eso también es útil contabilizar y tipificar a dichas organizaciones según el número de miembros, las actividades productivas a las que se dedica, la tierra y maquinaria con la que cuentan, con el fin de focalizar las políticas públicas también en las organizaciones y darles más margen de acción.

De igual manera, las condiciones en las que se producen los alimentos varían. Por ejemplo, los elementos que necesita la agricultura para ser sostenible pueden ser distintos a los que se necesita en la pesca, y en esto incide la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales. Así, “la cuestión agraria en el período de globalización neoliberal contemporánea

debe encuadrarse en un contexto interdisciplinario y ampliarse más allá de lo económico para abarcar las dimensiones sociales, políticas, ecológicas y culturales de la tierra” (Kay, 2006, p. 483). Es decir, la producción de alimentos también está inmersa en unas dinámicas y discursos globales sobre el medio ambiente, reclamos por el territorio de comunidades tradicionales y de responsabilidad empresarial, entre otros aspectos, que inciden en la forma que se lleva a cabo esta producción. Por lo tanto, una medición sobre este tipo de economías incluye también una caracterización de la calidad de los recursos naturales con los que cuenta la población para producir, la calidad en el acceso y la relación social y cultural con ellos.

Conclusiones y recomendaciones

Esta investigación arroja tres grandes conclusiones. En primer lugar, el campesinado de la ZRC-MA es, ante todo, un productor de alimentos; este es el rasgo más distintivo de su identidad, por lo que su noción de pobreza tiene que ver con la imposibilidad de trabajar dignamente del sector agrario. Si bien las privaciones son múltiples (ver Capítulo III), la principal preocupación del campesinado constituye en poder trabajar como productores de alimentos y depender económicamente de ello. El proyecto de vida de estos pobladores consiste en vivir en el campo y derivando sus ingresos de sus actividades tradicionales, pero teniendo capacidad de ahorro e inversión, de modernizar sus casas, profesionalizar a sus familias, etc. Es decir, es un campesinado altamente monetizado, en palabras de Forero (2013), consciente de las demandas económicas actuales y que mantiene el interés por vivir del campo, pero en mejores condiciones sociales y económicas.

Por ende, la pobreza para este grupo social se relaciona tanto con las precarias condiciones para que su producción y su economía sean sostenibles, como con su histórica marginalidad política y social para incidir en la toma de decisiones que los afecten. Dicha definición de pobreza se corresponde, además, con un contexto nacional en el que las políticas económicas les han dado prioridad y beneficios a los grandes capitales, por encima o a costa de las pequeñas economías como la del campesinado, y en que las inequidades agrarias continúan irresueltas en Colombia

Esta noción de pobreza es importante porque permite ver que esta condición se manifiesta y experimenta de manera diferenciada según el espacio social que ocupa cada grupo social en

la distribución de capitales. El campesinado, con su identidad política y cultural particular, es distinto de un residente de la ciudad, por lo que la pobreza no puede ser entendida de manera homogénea, en la medida que sus proyectos de vida y los medios que necesitan para cumplirlos son distintos. Por eso, esta investigación muestra que es importante reconocer como constitutivos de la pobreza elementos que no necesariamente se relacionan con ella directamente como los recursos productivos y comercialización para la producción de alimentos (ver Capítulo IV), pero que son determinantes para mejorar las condiciones de vida de la zona de reserva en los términos que el mismo campesinado sugiere.

Dichos elementos de la producción agraria también deben entenderse en función de las demandas del sector agrario en la era neoliberal. La pobreza rural tiene como eje transversal la estructura y política agraria del país, que en palabras de Kay (2006), tiene que ver con la distribución desigual de la tenencia de la tierra y el sistema de poder político inequitativo. Por ello, uno de los elementos distintivos de la condición de pobreza rural es la tierra. La capacidad de producción y reproducción de determinadas condiciones de vida en el campo está íntimamente ligada con la posibilidad de acceder a un predio, que, en el mundo actual, debe ser de calidad y con suficientes recursos para ponerlo a producir. Tal acceso tiene que ver con las nociones de pobreza identificadas en la literatura, como medidas redistributivas en el crecimiento económico, a través de una reforma agraria (Berry, 2003); la acumulación de activos en los hogares rurales (Argüello & Zambrano, 2006); o las relaciones de conflicto, violencia e injusticia inherentes a la historia agraria de Colombia (Berry 2017).

Otro de los puntos distintivos de la pobreza rural es el tipo de capital humano que se requiere en el campo y la inserción del campesinado a este. Según Kay (2006), los procesos de modernización agrícola aumentan las demandas de capital, trabajo y conocimiento. Por ende, para atacar la pobreza en este sector, son necesarias “más inversiones en nueva tecnología, infraestructura, en recursos humanos, etc. con el fin de mejorar las habilidades y conocimientos técnicos de la población rural (Kay, 2006, p. 22). Para el autor, en el actual mundo de globalización neoliberal, la modernización de la empresa agrícola implica acceso a capital, tecnología y mercados, así como también el acceso al conocimiento y los sistemas de información.

En segundo lugar, esta investigación demuestra que el campesinado no es un sujeto pasivo, en espera de ayudas estatales, sino está en una constante búsqueda de mejorar sus condiciones de vida por sus propios medios. Por ende, los reclamos hacia las entidades gubernamentales radican en la falta de oportunidades para desarrollar sus actividades tradicionales y exigen políticas que transformen sus condiciones socioeconómicas actuales. Por ejemplo, los miembros de la ZRC se quejan de que los proyectos productivos que implementan las instituciones públicas no tienen continuidad o no se garantiza una ganancia futura; en la mayoría de los casos, las entidades llegan con un capital semilla (bien sea en dinero o en especie) para poner a producir, pero no establecen los mecanismos para que esa producción se sostenga con el tiempo y dada la falta de asistencia técnica, centros de acopio o vías, se obstaculiza la comercialización y, por ende, la ganancia.

Aunque parezca muy obvio, esta conclusión es importante porque demuestra empíricamente que el campesinado no aspira a subsidios del Estado, sino a establecer condiciones para que su trabajo sea reconocido social y económicamente. Sin embargo, esto no implica que no haya un reclamo profundo entre el campesinado por la falta de atención de las entidades gubernamentales y la precariedad con que se ha mantenido su región. El acceso del campesinado a los recursos económicos y políticos ha sido escaso, por lo que han diversificado sus formas de tramitar sus demandas, acudiendo a la condición de víctima como una identidad política (Ángel-Botero, 2016).

En tercer lugar, si bien la pobreza está relacionada con políticas macro, que se definen por el crecimiento económico del país y del sector agropecuario (ver Capítulo I), son las experiencias en la vida cotidiana las que le dan forma a la pobreza. Para el campesinado de la zona de reserva, la pobreza se hace tangible en: la necesidad de buscar diversas fuentes de ingresos todos los días, realizando varias labores al tiempo y por largas horas; no poder hacer planes a futuro, sino vivir al día, con la incertidumbre que eso genera; no tener cómo alimentar a su familia; en tener que enfermarse por las subidas de los ríos que inundan sus casas y no tener una atención en salud inmediata, por cuestiones de tiempo y costo de transporte que implica la llegada al hospital; o en el hecho que a una edad avanzada deba seguir buscando fuentes de trabajo para tener ingresos con qué subsistir. Es no tener certeza de qué pasará al día siguiente.

Esto es importante porque permite visibilizar los momentos y situaciones en los que la pobreza se manifiesta en el ámbito local, lo que, a su vez, permite encontrar soluciones puntuales a dichos momentos. En este caso, la reproducción de la pobreza en la zona de reserva tiene como responsables a las entidades del Estado en materia de tierras, desarrollo rural y medio ambiente, que, con sus políticas o la falta de ellas, privan al campesinado de los medios para transformar sus condiciones de vida. Pero también a las mismas organizaciones de campesinos que, por malas prácticas en la gestión de recursos y en la organización misma, han dejado perder varios proyectos productivos que han llegado a la zona, como el caso de Asoreserva.

Teniendo en cuenta que la pobreza no es inherente a las comunidades, sino que es producida y reproducida por unas dinámicas y actores específicos en el plano económico, político y social (ver capítulo I), el empobrecimiento de los campesinos como productores de alimentos es generado por la falta de políticas en términos de acceso a tierras de calidad, capacitación, tecnología, inversión en infraestructura y transporte, etc. que permitan una producción sostenible de alimentos. Por eso, entidades como el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, de Desarrollo Rural y de Renovación del Territorio, tienen responsabilidad frente a la creación de políticas que permitan superar estas condiciones.

Dicha responsabilidad en la (re)producción de la pobreza también se hace visible en la implementación de políticas públicas que generan efectos adversos en la población misma y que no estaban contemplados originalmente. Tal es el caso de la construcción del jarillón en San Rafael, que, al no consultar a la población, terminó perjudicando la única fuente de ingresos de este corregimiento, lo que produjo un detrimento de sus condiciones de vida, como ellos mismos lo describen. De igual manera, la falta de socialización y apoyo en la adaptación al campesinado frente a grandes decisiones macroeconómicas, como la implementación del TLC para los productores de arroz, terminan por afectar la microeconomía del campesino.

En este sentido, la pobreza está compuesta por una serie de dispositivos y mecanismos que, en tanto se producen, se pueden atenuar con acciones concretas por parte de quienes tienen las capacidades y los medios para hacerlo. Para el caso particular de la zona de reserva,

existen cuatro acciones puntuales que pueden ayudar a mermar esa condición de precariedad que existe en la región y sirven como recomendaciones que deja esta investigación:

- La instalación de compuertas en el jarillón que permita la entrada controlada de agua a la ciénaga, por parte de las autoridades ambientales locales como Cormagdalena.
- Restablecer los puentes de comunicación de Asopasar con el resto de la comunidad y con las alcaldías municipales de Morales y Arenal, para lograr una mejor trabajo e inversión, respectivamente, en los tanques piscícolas de San Rafael.
- Un conteo de la extensión, calidad de tierra y condiciones del hogar que tienen las familias de la zona de reserva, por vereda, y desagregando si tienen título registrado de su propiedad, que lo pueden realizar las mismas Juntas de Acción Comunal en cada vereda, para que luego sea recopilado por la Azocamsur quien tiene mayor capacidad de interlocución con las agencias del Estado.
- La destinación de recursos para activar el molino de arroz, a cargo de la Agencia de Desarrollo Rural

Finalmente, esta investigación también deja preguntas abiertas sobre el análisis de la pobreza, asociadas a los estudios comparativos que pueden hacerse con campesinos productores de alimentos de otras regiones del país o con familias empresarias del campo. También, esta investigación sienta las bases para establecer indicadores y medir la pobreza de estos municipios, según su misma conceptualización, con el fin de analizar las diferencias y similitudes con los indicadores nacionales y tener una comprensión más profunda del fenómeno en Colombia. De igual manera, este estudio abre nuevos campos de investigación como, por ejemplo, *(i)* los efectos de la desigualdad económica y social dentro de la misma Zona de Reserva Campesina y su relación con la pobreza; *(ii)* la forma el conflicto armado impacta en las condiciones socioeconómicas como: la inseguridad física, desplazamiento, pérdida de tierras, desarraigo y reubicación, como sucedió en Villa Nori; *(iii)* la relación entre condiciones ambientales y pobreza, como las inundaciones en Villa Noris y en San Rafael; *(iv)* la relación entre condición de víctima y pobreza.

Bibliografía

- Addison, T., Hulme, D., & Kanbur, R. (2009). *Poverty dynamics: Interdisciplinary perspectives*. Oxford: Oxford University Press.
- Alcaldía de Arenal. (2008). *Plan de Desarrollo Municipal 2008-2011*.
- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95, 476–487.
- Ángel-Botero, C. (2016). Reproduciendo diferencias: La negociación de las identidades ciudadanas en el marco de la justicia transicional. *Revista de Estudios Sociales*, 59, 44–55.
- Argüello, R., & Zambrano, A. (2006). ¿Existe una trampa de la pobreza en el sector rural en Colombia? *Desarrollo y Sociedad*, 58, 85–113.
- Arzate Salgado, J., Gutiérrez, A., & Huamán, J. (2011). *Reproducción de la pobreza en América Latina. Relaciones sociales, poder y estructuras económicas* (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales).
- Atkinson, A. B. (2003). Multidimensional deprivation: Contrasting social welfare and counting approaches. *Journal of Economic Inequality*, 1, 51–65.
- Barrientos Marín, J., Ramírez Ramírez, S., & Tabares, E. (2014). El patrón de crecimiento económico y la pobreza en Colombia. *Coyuntura Económica*, (24), 7–31.
- Becerra Ostos, S. J., & Rojas Guzmán, J. (2015). Buscando los rostros campesinos de por acá. Una aproximación desde la noción de vida campesina. *Controversia*, 205.
- Becerril Velasco, C. I. (2015). El papel de los Estados en el alivio a la pobreza en la era neoliberal. Una aproximación teórica. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 225, 369–394.

- Bejarano, J. A. (1983). Campesinado, luchas agrarias e historia social: Notas para un balance historiográfico. *Anuario colombiano de historia social y de la cultura*, 11, 251–204.
- Berry, A. (2003). Poverty response to poverty and inequality in the developing world. *Cepal Review*, 79.
- Berry, A. (2017). Reflections on injustice, inequality and land conflict in Colombia. *Canadian Journal of Latin American and Caribbean studies*, 42(3), 277–297.
- Booth, C. (1892). *Pauperism and the Endowment of Old Age*. Londres: Macmillan.
- Bourdieu, P. (1999). Comprender. En *La miseria del mundo* (pp. 527–543). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Bourdieu, P. (2001). *Poder, derecho y clases sociales* (2a ed.). Desclée de Brouwer.
- Bourguignon, F., & Chakravarty, S. (2003). The measurement of multidimensional poverty. *Journal of Economic Inequality*, 1, 25–49.
- Bowd, R., Özerdem, A., & Kassa, D. G. (2016). A theoretical and practical exposition of participatory research methods. En *Participatory research methodologies. Development and post-disaster/conflict reconstruction*. Londres: Routledge.
- Bush, R. (2007). *Poverty and neoliberalism: Persistence and reproduction in the Global South*. Londres: Pluto Press.
- Castillo, J. C., & Rivera, M. (2018). Dimensiones comunes a las atribuciones de pobreza y riqueza. *Psyche*, 27(2), 1–10.
- Castillo, M. (2014). Cómo se contruye la vulnerabilidad en Cundinamarca, Colombia, o la historia de la eterna pobreza (de la vivienda) rural. *Bulletin de l'Institut français d'études andines*, 43(3), 559–585.

- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: Whose reality counts? *Environment and Urbanization*, 7(1).
- Chayanov, A. (1990). *L'organisation de l'économie paysanne*. Paris: Librairie du Regard.
- Cimadamore, A., & Donato Biocca, M. (2008). *La construcción de la pobreza y la desigualdad en América Latina*. Bogotá: CLACSO-CROP.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2016). *Panorama social de América Latina*. Naciones Unidas.
- Contraloría General de la República. (2015a). *Informe de auditoría a políticas públicas (actuación especial) Incoder- Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y Zonas de Desarrollo Empresarial (ZRE). Instrumentos de la política de desarrollo rural (vigencias 1997-2014)*.
- Contraloría General de la República. (2015b). *Informe de Auditoría: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-Incoder (Vigencia Fiscal de 2014)*.
- Corbin, J., & Anselm, S. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons and evaluative criteria. *Qualitative Sociology*, 13(1).
- Corrales Roa, E., & Forero Álvarez, J. (1992). La economía campesina y la sociedad rural en el modelo neoliberal de desarrollo. *Cuadernos de Desarrollo Rural*, 29, 55–71.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2019a). *Boletín Técnico. Pobreza Monetaria en Colombia*.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2019b). *Boletín Técnico. Pobreza Multidimensional en Colombia*.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2019c). *Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) Caribe 2018*.

- Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2019d). *Pobreza monetaria por departamentos en Colombia 2018*.
- Departamento Nacional de Planeación. (2010). *Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014*.
- Departamento Nacional de Planeación, & Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. (2007). *Evaluación de los resultados e impactos tempranos del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio*.
- Duarte, C. (2015). *Desencuentros territoriales: La emergencia de conflictos interétnicos e interculturales en el departamento del Cauca (Tomo I)*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
- Duncan, C. (1999). *Worlds Apart: Why Poverty Persists in Rural America*. Yale University Press.
- Echavarría, R. (1998). Un creciente interés en lograr mercados de tierras rurales más efectivos. En *Perspectivas sobre mercados de tierras rurales en América Latina*. Washington, DC: Banco Interamericano de Desarrollo.
- El Amin, K. A. (2003). Understanding and combating poverty: A quest for conceptualization, measurements, indicators, causes, and empirical methodologies. *Economic Research Forum Economic Paper*, (0338).
- Escobar, A. (1995). *Encountering Development: The making and unmaking of the Third World*. Princeton: Princeton University Press.
- Espinosa, A., Alvis, J., & Toro, D. (2007). *El departamento de Bolívar frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio*. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

- Estrada, J. (2013). *Territorios campesinos: La experiencia de las zonas de reserva campesina*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Fajardo, D. (2000). *Las Zonas de Reserva Campesina: Primeras experiencias*. Mimeo.
- Fajardo, D. (2012). Experiencias y perspectivas de las Zonas de Reserva Campesina. En *Autonomías territoriales: Experiencias y desafíos*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Fajardo, D. (2018). *Agricultura, campesinos y alimentos (1980-2010)*. Universidad Externado de Colombia, Bogotá.
- Fitchen, J. (1985). *Poverty in Rural America: A case study*. Westview Press.
- Fonseca, D., Gutiérrez, O., & Rudqvist, A. (2005). *Cultivos de uso ilícito en el Sur de Bolívar: Aproximación desde la economía política*. Bogotá: PNUD.
- Forero Álvarez, J. (2002). *La economía campesina colombiana 1999-2001*. Bogotá: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos.
- Forero Álvarez, J. (2013). The economy of family farming production. *Cuadernos de Desarrollo Rural*, 10(70), 27–45.
- Gasparini, L., Cicowiez, M., & Sosa, W. (2014). *Pobreza y desigualdad en América Latina: Conceptos, herramientas y aplicaciones*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS),.
- Giovenardi, E. (1999). Estructuras de la pobreza y del agro: ¿por qué son pobres los campesinos? *Innovar, Revista de Ciencias Administrativas y Sociales*, 2(2), 54–64.
- Gómez Jiménez, A. (2003). Colombia: El Contexto de la Desigualdad y la Pobreza Rural en los Noventa. *Cuadernos de Economía*, 21(38).
- Green, D. (2008). *From poverty to power. How active citizens and effective states can change the world*. Oxfam International.

- Green, M. (2003). Representing poverty and attacking representations: Perspectives on poverty from social theory. *Journal of Development Studies*.
- Gutiérrez Sanín, F. (2011). La Constitución de 1991 como pacto de paz: Discutiendo las anomalías. *Estudios Socio-Jurídicos*, 13(1), 419–447.
- Gutiérrez Sanín, F. (2014). *El Orangután con Sacoleva*. Bogotá: IEPRI.
- Harris, J. (2009). Bringing politics back into poverty analysis: Why understanding of social relations matters more for policy on chronic poverty than measurement. En *Poverty dynamics: Interdisciplinary perspectives*. Oxford: Oxford University Press.
- Instituto Colombiano de Desarrollo Rural. (2012). *Manual Operativo Zonal: Zona de Reserva Campesina Morales y Arenal*.
- Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, & Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. (2012). *Actualización Plan de Desarrollo Sostenible de la ZRC de Morales y Arenal en el Sur de Bolívar*.
- Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2012). *Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia*. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.
- Jaramillo, P. (2006). Pobreza rural en Colombia. *Revista Colombiana de Sociología*, (27), 47–62.
- Kay, C. (2006). Rural Poverty and Development Strategies in Latin America. *Journal of Agrarian Change*, 6(4), 455–508.
- Kay, C. (2007). Algunas reflexiones sobre los estudios rurales en América Latina. *Revista de Ciencias Sociales*, 29.
- Kay, C. (2015). The Agrarian Question and the Neoliberal Rural Transformation in Latin America. *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 100.

- LeGrand, C. (2016). *Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950)*. Bogotá: Universidad de los Andes, Ediciones Uniandes.
- Leibovich, J., Nigrinis, M., & Ramos, M. (2006). Caracterización del mercado laboral rural en Colombia. *Borradores de Economía*, 408.
- Leibovich, J., & Núñez Méndez, J. (1999). *Los activos y recursos de la población pobre en Colombia*. Inter-American Development Bank.
- Loaiza Quintero, O., Muñetón Santa, G., & Vanegas López, J. G. (2018). An exploratory assessment of the relationship between multidimensional poverty and armed conflict: The case of Antioquia, Colombia. *Desarrollo y Sociedad*, 80, 11–51.
- López Castaño, H., & Núñez Méndez, J. (2007). *Pobreza y desigualdad en Colombia: Diagnóstico y estrategias* (Departamento Nacional de Planeación).
- Mabughi, N., & Selim, T. (2006). Poverty as social deprivation: A survey. *Review of Social Economy*, 64(2), 181–204.
- Machado, A. (2009). *La reforma rural, una deuda social y política*. Universidad Nacional de Colombia.
- Martínez Valle, L. (2007). ¿Puede la pobreza ser abordada a partir de lo local? *Revista de Ciencias Sociales*, 29, 51–61.
- Mazoyer, M. (2008). Globalización liberal y pobreza campesina, ¿qué escoger? *Revista Colombiana de Sociología*, (30), 89–108.
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (2003). *Hacia una estrategia de estabilización de la frontera agrícola con desarrollo humano*.
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, & Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. (2018). *Identificación general de la frontera agrícola en Colombia. Escala 1:100.000*. Recuperado de

https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Projects_Documents/IDENTIFICACION%20GENERAL%20DE%20LA%20FRONTERA%20.pdf

Molina López, L. (2011). Zonas de Reserva Campesina en el Sur de Bolívar: Una propuesta de reordenamiento territorial. En *Política de Tierras y Desarrollo Rural ¿cuál futuro para el campo colombiano?* Grupo Semillas.

Mondragón, H. (2002). *La organización campesina en un ambiente de terror*. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA).

Mora Cortés, A. F. (2013). Conflicto, violencia socioeconómica y desplazamiento forzado en Colombia. *Cuadernos de Economía*, 32(61), 721–754.

Njeru, E. (2005). Bridging the qualitative-quantitative methods in poverty analysis. En *Quantitative and qualitative methods for poverty analysis*. Nairobi: Kenya Institute for Public Policy Research Analysis-Kippra.

Núñez Méndez, J., & Ramírez, J. C. (2002). *Determinantes de la pobreza en Colombia. Años recientes*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2018). *Las zonas de reserva campesina: Retos y experiencias significativas en su implementación. Aportes para una adecuada aplicación de la Ley 160 de 1994, la Reforma Rural Integral y las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tenencia*. Bogotá: Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Ortíz Guerrero, C. E. (2004). *Zonas de reserva campesina: Aprendizaje e innovación para el desarrollo rural*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

- Ortíz Guerrero, C. E., Pérez Martínez, M. E., Castillo Brieva, D., & Muñoz Wilches, A. (2004). *Zonas de Reserva Campesina. Aprendizaje e innovación para el desarrollo rural*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Osejo Varona, A. (2013). *Zona de Reserva Campesina: Política pública y estrategia para la defensa de territorios campesinos. Aportes para su reglamentación y aplicación*. Centro Nacional de Memoria Histórica.
- Oxfam. (2017). *Radiografía de la desigualdad. Lo que nos dice el último censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia*.
- Øyen, E. (2004). Poverty production: A different approach to poverty understanding. *Advances in Sociological Knowledge*, 299–315.
- Parra-Peña, R. I., Ordóñez, L. A., & Acosta, C. A. (2013). Pobreza, brechas y ruralidad en Colombia. *Coyuntura Económica*, XLIII(1).
- Peña Huertas, R. del P., Parada Hernández, M. M., & Zuleta Ríos, S. (2014). La regulación agraria en Colombia o el eterno déjã vu hacia la concentración y el despojo. *Estudios Socio-Jurídicos*, 16(1), 123–166.
- Peralta, A., García, J. A., & Johnson, N. (2006). Dinámica y definición de pobreza en los Andes colombianos: Enfoques participativos versus enfoques objetivos. *Desarrollo y Sociedad*, 209–243.
- Pérez Martínez, M. E., & Pérez Correa, E. (2002). El sector rural en Colombia y su crisis actual. *Cuadernos de Desarrollo Rural*, (48).
- Perfetti, J. J. (2009). Crisis y pobreza rural en América Latina: El caso de Colombia. *Documento de Trabajo N° 43. Programa Dinámicas Territoriales Rurales*.

- Puyana, A., Horbath, J., & Romero, J. (2005). El sector agropecuario mexicano: Un decenio con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. La pobreza y la desigualdad se intensifican, crece la migración. *OASIS*, 0(11), 213–250.
- Rincón García, J. J. (2001). Problemática campesina: Una mirada al movimiento campesino en los noventa. *Revista Colombiana de Sociología*, 6(1), 87–108.
- Rowntree, S. (1901). *Poverty: A Study of Town Life*,. Londres: Macmillan.
- Ruiz Reyes, M. (2015). Territorio y ambiente en las Zonas de Reserva Campesina de Colombia. *EUTOPIA*, (8), 45–56.
- Salgado Araméndez, C. (1995). Competitividad con pobreza: ¿El tiempo de la gente campesina? *Cuadernos de Economía*, 22, 159–175.
- Salgado Araméndez, C. (2002). Los campesinos imaginados. En *Cuadernos de tierra y justicia*. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA).
- Salgado Araméndez, C. (2004). Economías campesinas. En *La academia y el sector rural 1*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Centro de Investigaciones para el Desarrollo.
- Salgado Araméndez, C. (2010). Procesos de desvalorización del campesinado y antidemocracia en el campo colombiano. En *El campesino colombiano: Entre el protagonismo económico y el desconocimiento de la sociedad*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Sarmiento, A., González, J. I., Alonso, C. E., Angulo, R., & Espinoza, F. (2005). Crecimiento pro-poor en Colombia 1996-2004. *Coyuntura Social*, 33.
- Sen, A. (1978). *Three Notes on the Concept of Poverty*. International Labour Office.
- Sen, A. (1985). *Commodities and Capabilities*. Amsterdam: North Holland.
- Sen, A. (1987). *The Standard of Living*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Sen, A. (1993). *Justicia: Medios contra libertades*. Barcelona: Paidós.
- Sen, A. (2000a). *Desarrollo y libertad*. Buenos Aires.
- Sen, A. (2000b). *Development as freedom* (Anchor Books). New York, Toronto.
- Shanin, T. (1996). El campesinado como factor político. *The Sociological Review*, *xiv*.
- Thomson, K. (2014). Concept of poverty in a rural community: A qualitative study of the views of Magobbo smallholder farmers in Zambia's Mazabuka district. *International Journal of Social Science Research*, *2*(2).
- Tobasura Acuña, I., Patiño Murillo, M., & Salinas, F. A. (2013). Pobreza, medios de vida y seguridad alimentaria. El caso de los municipios de Aguadas y Palestina, Caldas, Colombia. *Sociedad y Economía*, *24*.
- Tobón Quintero, G., & Ferro, J. G. (2012). Las zonas de reserva campesina y la naciente autonomía territorial. En *Autonomías territoriales: Experiencias y desafíos*. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
- Torres Penagos, M. F. (2016). *Medición Mixta de pobreza multidimensional para ocho localidades de Bogotá: Un enfoque de pesos participativos*. Tecnológico de Monterrey, Monterrey.
- Uribe-López, M. (2013). Estilo de desarrollo y sesgo anticampesino en Colombia. *Cuadernos de Economía*, *32*(60), 505–535.
- Velasco Olarte, M. E. (2014). *Quiénes son hoy los/las campesinos/as: Un acercamiento al proceso de construcción de identidad campesina en el marco del conflicto armado en Colombia. Caso de estudio: Las Zonas de Reserva Campesinas*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Ecuador.

Viloria-De La Hoz, J. (2009). *Economía y conflicto en el cono sur del departamento de Bolívar*. Cartagena: Banco de la República. Centro de Estudios Económicos Regionales.

Weber, B., Jensen, L., Miller, K., Mosley, J., & Fisher, M. (2005). A Critical Review of Rural Poverty Literature: Is There Truly a Rural Effect? *International Regional Science Review*, 28(4).

Woolcock, M. (2009). Toward an economic sociology of chronic poverty. Enhancing the rigour and relevance of social theory. En *Poverty dynamics. Interdisciplinary perspectives*. Oxford University Press.

Anexo 1

Entrevista semiestructurada

Miembros de la zona de reserva campesina

Identidad campesina

1. ¿Desde hace cuánto vive en esta vereda?
2. ¿Cómo llegó acá?
3. ¿A qué se dedica?
4. ¿De qué vive la gente de esta vereda?
5. ¿Con quién vive?
6. ¿Qué hace su familia?
7. ¿Le gustaría irse de esta vereda?
8. ¿Alguna vez ha tenido miedo de que se tenga que ir de esta vereda?
9. ¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de vivir acá?
10. ¿Cómo son las relaciones entre vecinos?
11. ¿Conoce a la gente con la que vive?
12. ¿Usted se considera campesino? ¿por qué?

Condiciones de vida

Vivienda

- a. ¿Cómo es su casa?
- b. ¿Cuántas personas viven en su casa?
- c. ¿Cómo son las casas en el sector donde vive?
- d. ¿Considera que su casa y las del sector donde vive están en condiciones óptimas para vivir?

Educación

- e. Cuántos colegios hay en San Rafael?
- f. Quedan muy lejos de las viviendas?
- g. Hasta qué curso dictan?
- h. Qué hacen los niños después?

Componente ambiental

- i. ¿Cuál es la situación de las ciénagas, ríos y demás recursos naturales?
- j. ¿Le afectan las malas condiciones de los recursos?
- k. ¿Qué actividades dañan más esos recursos?
- l. ¿Qué se ha hecho desde la ZRC? ¿Qué han hecho las instituciones?

Situación de la tierra

- m. ¿Ustedes son dueños de la tierra donde viven?
- n. ¿Creen que es importante ser dueños de la tierra? ¿Por qué?
- o. ¿Qué les hace falta para ser dueños?

Actividades económicas

- p. ¿A qué se dedica?
- q. ¿Qué se produce en esta vereda/corregimiento?
- r. ¿Todos las personas se dedican a eso?
- s. ¿Es fácil producir eso?
- t. ¿Le da ingresos?
- u. ¿Qué necesita para producir?

Percepciones sobre la calidad de vida

- 13. ¿Para usted qué significa tener una buena calidad de vida?
- 14. ¿Considera que en su vereda tiene una buena calidad de vida? ¿por qué?
- 15. ¿Le gusta vivir en esta vereda? ¿por qué?
- 16. ¿Cree que le hace falta algo a esta vereda para que tenga una mejor calidad de vida?
- 17. ¿Cree que es difícil vivir acá?
- 18. ¿Cómo define la seguridad?
- 19. ¿Cree que es seguro vivir aquí?
- 20. ¿Cree que en esta vereda hay oportunidades de salir adelante? (movilidad socioeconómica)
- 21. ¿Considera que en esta vereda hay gente con más oportunidades que otros?
- 22. ¿Cómo es la educación en esta vereda?
- 23. ¿Cómo es la salud?
- 24. ¿El empleo?
- 25. Si tuviera la posibilidad de emplearse, ¿en qué le gustaría?
- 26. ¿Cómo son las viviendas acá?
- 27. ¿Tiene acceso a agua, alcantarillado, luz, gas, etc.?

28. ¿Desde qué edad empieza a trabajar?

29. ¿Para usted qué es pobreza?

Relación con las instituciones: estado y organizaciones sociales

30. ¿Cree que las instituciones del Estado pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de esta vereda?

31. ¿Qué instituciones pueden hacerlo?

32. ¿Cómo evalúa la labor de esas instituciones en la vereda?

33. ¿Hay confianza con las instituciones del Estado?

34. ¿La pobreza tiene que ver con estas instituciones?

35. ¿Cree que las organizaciones campesinas son importantes para mejorar la calidad de vida?

36. ¿Qué actividades hacen las organizaciones campesinas en esta vereda?

37. ¿Cree que es importante que se hagan este tipo de actividades?

38. ¿Qué han hecho las organizaciones en la ZRC, específicamente en esta vereda?

39. ¿La pobreza tiene que ver con estas organizaciones?

Anexo 2

Guía de grupos focales para miembros de organizaciones sociales

Participantes:

miembros de las 5 principales organizaciones de la Zona de Reserva Campesina:

Presentación: 10 minutos

Se explicará el objetivo del grupo focal y de la investigación en general a los participantes. Se les hará entrega del consentimiento informado y cada participante se presentará ante el resto:

- a. Nombre
- b. A qué se dedica
- c. Cuál es su rol dentro de la organización

Actividades: 2 horas

- **Calidad de vida (tiempo estimado 24 minutos)**

Los participantes se sentarán en mesa redonda y responderán a las preguntas que haga el guía de la actividad. Para el desarrollo de esta actividad se llevará un papel periódico donde se recogerán las ideas principales que surjan del espacio deliberativo

1. ¿Para ustedes qué significa tener una buena calidad de vida en Morales y Arenal?
2. Teniendo en cuenta esa definición, ¿creen que en Morales y Arenal hay una buena calidad de vida? Sí/No ¿por qué?
3. ¿Qué tienen y qué no tienen estos municipios para lograr una buena calidad de vida?

4. ¿Es igual la calidad de vida en Morales y Arenal y en la Zona de Reserva Campesina de estos municipios? Si no, ¿qué los diferencia?
5. ¿Para ustedes qué es la pobreza?
6. ¿Cómo definirían la pobreza en Morales y Arenal? ¿Y cómo la definirían para la ZRC?
7. Una familia es pobre en Morales y Arenal si...

- **Elementos de la calidad de vida (tiempo estimado 24 minutos)**

Con base en la discusión anterior, se les pedirá a los participantes que escriban cada uno en una cartulina tres elementos que consideren importantes para mejorar la calidad de vida. Estos serán leídos frente a los demás participantes y se pondrán a discusión. Luego se ubicarán de mayor a menor importancia.

Lista de problemas (24 minutos)

Los participantes escribirán en un cuadro con las columnas de “solución inmediata, de largo y mediano plazo” aquellos problemas que más inquietan a sus municipios. Al escribir un problema en cada columna, el participante explicará por qué los ubicó así y luego se abrirá el espacio para la discusión:

1. ¿Han cambiado estos problemas a lo largo de los años o siempre han sido los mismos?
2. ¿Desde hace cuánto perciben estos problemas?
3. ¿Son transversales a todos los habitantes?

Papel de las organizaciones (24 minutos)

En esta actividad cada participante sacará una pregunta de una bolsa para responder todos en grupo:

1. ¿Cuál es la función de la organización de la que hace parte?
2. ¿A quiénes beneficia y de qué manera?
3. ¿Quiénes pueden hacer parte de la organización?
4. ¿Cuál es el papel de esta organización en la zona de reserva campesina?
5. ¿Tiene alguna influencia en la calidad de vida de las personas?
6. ¿Qué puede hacer la organización para mejorar la calidad de vida de las personas?
7. ¿Consideran que es importante que existan asociaciones de este tipo en los Municipios? ¿Por qué?